

El cambio de régimen Político en Argentina: 1976-1983.

La transición a la democracia.

Hugo D. Bertín¹

¹ Tesis presentada para acceder al grado de Magister en Ciencia Política. Director: Profesor Juan Carlos Corbetta. Jurado: Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Ricardo Pablo Rea (presidente), Profesora María Monserrat Lapalma, Profesor Horacio Sanguinetti. Calificación: 10 (sobresaliente), 14 de junio de 1991. Maestría en Ciencia Política, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata.

Bertín, Hugo Darío

El cambio de régimen político en Argentina: 1976-1976. La transición a la democracia.

Palabras clave: 1. Ciencia política. 2. Transición a la democracia. 3. Cambio de régimen político. 4. Argentina.

Tabla de contenido:

INTRODUCCIÓN:.....	5
1. Marco teórico para el análisis de la transición de regímenes políticos:	5
PARTE I: LA INTERVENCIÓN MILITAR DEL 24 DE MARZO DE 1976	17
2. Contexto político, institucional y económico:.....	17
Parte II.: LAS FASES DEL RÉGIMEN AUTORITARIO	28
3. La instauración de los militares en el poder:.....	28
3.1. Las normas institucionales de gobierno:	29
3.2. La estructura de poder:.....	32
3.3. La “división de poderes” dentro del régimen autoritario:.....	33
4. La trayectoria del Proceso de Reorganización Nacional:	36
4.1. La eliminación de la subversión:	37
4.2. La fase fundacional de un nuevo sistema:	43
4.3. El modelo institucional “a futuro” de las Fuerzas Armadas:	51
5. La crisis política del Proceso de Reorganización Nacional:	56
5.1. La sucesión presidencial en el régimen militar:.....	56
5.2. Las secuelas de la lucha contra la subversión:.....	58
5.3. La regulación sucesoria del régimen militar:	59
6. El punto de no retorno: Malvinas.....	61
PARTE III: LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA	64
7. La transición a la democracia en la Argentina:.....	64
7.1. La salida del autoritarismo:.....	64
7.2. Elementos teóricos para identificar la transición hacia la democracia:	67
7.3. La transición a la democracia en Argentina:.....	70
8. La instauración de la democracia en Argentina:	74
EPÍLOGO:.....	76
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:.....	80
ANEXO: Legislación consultada.	100

"...Este es un tiempo invernal. Hombres y paisajes entran ahora en los altos fríos de la verdad. Las antiguas protecciones, las antiguas estufas, los jardines de invierno de la autocomplacencia, los aparatos del almohadamiento individual (y sus complicaciones recalentadas) ya no sirven. Este es un tiempo hiemal, y el hombre necesita del hombre. Cada cual deberá dar esto o aquello: lo que es. ¿Quién podrá presentarse a la actual intemperie con sus reservas mentales, con sus precauciones disimulativas, con su insinceridad hecha persona? Frío quiere decir verdad. Toda verdad es desértica y lleva, en el fondo, hielo; por eso es tan humana y tan inhumana. Aunque las verdades más alegres llevan adentro aquel hielo temido, que no sentimos al pronto, pero que viene después.

Y por eso mismo, lo mejor que se puede hacer es no esquivarla, no lentificarla, sino entrar en el frío y no detenerse hasta que haya sido vencido. Porque hay una cosa que resiste a la verdad, al frío de la verdad, que lo soporta, y es la vida, la vida que soporta la intemperie."

Eduardo Mallea: *La vida Blanca*. Buenos Aires, Sur. 1960. p. 23-24.

INTRODUCCIÓN:

En este trabajo se estudia el cambio de régimen político ocurrido en Argentina entre los años 1976 y 1983. La transición del autoritarismo a la democracia es un cambio *de* régimen político, no un cambio *en* su interior². Por ello, es de particular interés detenerse en el análisis de las transformaciones en el sistema político desplazado, en las características del proceso de cambio, y en la agenda de temas pendientes que deberá enfrentar el nuevo régimen.

El trabajo está organizado de la siguiente manera: en el capítulo 1 se presentan los elementos del marco teórico. A continuación, se describe el contexto político, institucional y económico previo a la intervención militar (capítulo 2). Luego, se analiza el proceso de cambio de régimen, distinguiendo seis fases³: las cuatro primeras corresponden al régimen autoritario: instauración (capítulo 3), trayectoria (capítulo 4), crisis (capítulo 5), y punto de no retorno (capítulo 6), y las dos restantes se refieren al proceso de cambio en sí: transición (capítulo 7), e instauración (capítulo 8). En el epílogo se exponen las reflexiones finales.

1. Marco teórico para el análisis de la transición de regímenes políticos:

En esta sección expondremos las definiciones de los siguientes conceptos que utilizaremos en el estudio: sistema político, régimen político, totalitarismo, autoritarismo, democracia, legitimidad de origen, de medios y de fines, ideología y mentalidad, eficacia y efectividad del gobierno, sociedad civil, sociedad política y Estado, transición, instauración y consolidación de la democracia, coalición dominante, régimen burocrático autoritario. En el capítulo 7 analizaremos una de las tipologías de

² Huneus (1986): La dinámica de los nuevos autoritarismos: Chile en una perspectiva comparada, p. 105-166

³ Morlino (1987): *Ibíd.* Mario Justo López advierte que, en la perspectiva de Bertrand de Jouvenel, existen "... tres pasos necesarios en la actividad política, en su misión arquitectónica de agregados humanos, con sus modos y fines incluidos: creación, consolidación y conservación. Citando a Jouvenel en el caso de las democracias constitucionales: *Se trata de un concurso durable, de una 'composición' de voluntades que debe tener el carácter de un edificio. Siendo la voluntad humana inconstante, el edificio tendrá una tendencia inmanente a la disgregación. Y cuanto más crezca, más se multiplicarán las fuerzas destructoras, los factores de incoherencia. El sostenimiento del edificio se convierte entonces en una obra cotidiana: la conservación es más difícil que la construcción*". López, Mario Justo (1987): Palabras iniciales, p. 7 a 10. (La cita de Jouvenel pertenece a: Jouvenel, Bertrand de (1957): *La Soberanía*. Madrid, Rialp. p. 53-55).

transiciones a la democracia que existen en la literatura de la ciencia política para poder ubicar al caso argentino⁴.

Loewenstein define al sistema político como: *"... la sociedad estatal que vive bajo una ideología concreta: política, sociopolítica, ética o religiosa a la cual corresponden unas determinadas instituciones destinadas a realizar dicha ideología dominante"*⁵. El autor sostiene que: *"... el concepto "sistema político" se refiere a la estructura ideológica, mientras que el concepto de "tipo de gobierno" o "régimen político" alude a la concreta conformación de las instituciones del sistema político en una determinada sociedad estatal"*⁶. Al referirse al sistema político de la autocracia, realiza la distinción entre el régimen autoritario del régimen totalitario. Para el autor, *"... el concepto autoritario caracteriza una organización política en la cual el único detentador del poder -una persona o "dictador", una asamblea, un comité, una junta o un partido- monopoliza el poder político sin que les sea posible a los destinatarios del poder una participación real en la formación de la voluntad estatal. El término autoritario se refiere más bien a la estructura gubernamental que al orden social"*⁷. El concepto de "totalitario": *"... hace referencia a todo el orden socioeconómico y moral de la dinámica estatal ... La técnica de gobierno de un régimen totalitario es necesariamente autoritaria. Pero este régimen aspira a algo más que a excluir a los destinatarios del poder de su participación legítima en la formación de la voluntad estatal. Su intención es modelar la vida privada, el alma, el espíritu y las costumbres de los destinatarios del poder de acuerdo con una ideología dominante, ideología que se impondrá a aquellos que no se quieran someter libremente a ella, con los diferentes medios del proceso del poder. La ideología estatal vigente penetra hasta el último rincón de la sociedad estatal; su pretensión de dominar es*

⁴ Stepan (1988): Caminos hacia la redemocratización: consideraciones teóricas y análisis comparativos, p. 105-136.

⁵ El concepto de ideología puede ser considerado como *"... Un sistema cerrado de pensamientos y creencias que explican la actitud del hombre frente a la vida y su existencia en la sociedad, y que propugnan una determinada forma de conducta y acción que corresponde a dichos pensamientos y creencias, y que contribuye a realizarlos ... Ideologías son, por lo tanto, el "telos" o el espíritu del dinamismo político en una determinada sociedad estatal."* Por otro lado, el autor resalta la íntima correspondencia entre instituciones e ideología *"... las ideologías sociopolíticas han creado en cada caso las instituciones adecuadas para servirlos. Seguro es que la mayor parte de las instituciones están fundadas, condicionadas y acuñadas por una ideología"*. Loewenstein (1983): Teoría de la constitución, p. 30.

⁶ Loewenstein (1983): *Ibíd.*, p. 30-32.

⁷ Loewenstein (1983): *Ibíd.*, p. 76.

"total"⁸. El criterio para distinguir al autoritarismo del totalitarismo se basaría en encontrar en los sistemas políticos la presencia de una ideología⁹ del Estado impuesta por la coacción a los destinatarios del poder, v.gr. Hitler en Alemania, Stalin en Rusia. En diversos casos contemporáneos, las autocracias se conforman con el ejercicio autoritario del poder, y no intentan -por distintas razones- la imposición coactiva de visiones ideológicas¹⁰.

Linz entiende que el régimen autoritario es *sui generis*, y lo ubica entre los regímenes totalitarios y los democráticos, son: *"sistemas políticos con pluralismo político limitado, no responsable, carentes de una ideología elaborada y directora, pero con mentalidades características, despolitización o carentes de movilización política extensa e intensa, excepto en algunos momentos de su desarrollo, y en que un líder o a veces un pequeño grupo ejerce el poder dentro de límites formalmente mal definidos, pero en realidad predecibles"*¹¹. Las cinco dimensiones de la definición son: el *pluralismo limitado* se refiere a la comunidad política y a los actores determinantes para el régimen y sus políticas; *mentalidades peculiares* está en relación con la modalidad de la justificación ideológica del régimen, y presupone la existencia de control y represión por parte del gobierno autoritario; *la ausencia de movilización política* concierne también a la comunidad política; *líder o grupo reducido* que ejerce el poder identifica a las autoridades del régimen; y *límites formalmente mal definidos*, señala el aspecto general de las normas y procedimientos propios del régimen autoritario¹². Para Linz, Los regímenes totalitarios se caracterizan por la presencia de tres elementos: el primero es la ausencia de pluralismo, y el papel preeminente del líder y del partido único, éste es una estructura burocrática y jerarquizada, a la que se subordinan todos los otros actores: burocracia, militares, iglesia, hay un centro de poder monista, pero no

⁸ Loewenstein (1983): *Ibíd.*, p. 78 y 79.

⁹ Loewenstein (1983): *Ibíd.*, p. 80.

¹⁰ En un sentido similar, Talmon señala que en las democracias totalitarias: *"Un credo exclusivo no puede admitir oposición. Se siente necesariamente rodeado de innumerables enemigos. Sus creyentes nunca pueden sentirse en medio de una existencia normal. Este sentimiento de peligro les hace pedir, cada vez con más insistencia, protección para su ortodoxia; tienen que apelar al terror. Quienes no son sus enemigos se ven precisados a aparecer como creyentes fervientes y, para lograrlo, se apela a manifestaciones emocionales, se finge la unanimidad en reuniones públicas o en las elecciones. El mesianismo político se ve obligado a reemplazar el pensamiento empírico y la crítica libre por razonamientos y definiciones basados en ideas colectivas a priori, que han de ser aceptados aun en contra de las evidencias de hecho"*. Talmon (1958): *Los orígenes de la democracia totalitaria*, p. 276.

¹¹ Linz: *Una interpretación de los regímenes autoritarios*, p. 13.

¹² Morlino (1988): *Los regímenes autoritarios*, p. 132.

monolítico, y cualquier pluralismo de instituciones o de grupos que exista deriva su legitimidad de ese centro. El segundo componente es la ideología articulada y rígida, orientada hacia la legitimización, con la cual se identifican el grupo gobernante o el líder y el partido que sirve a esos líderes, y que emplean como base para su política. El tercer módulo es la presencia de una movilización alta y continua, sostenida por la ideología, y promovida por el partido, la participación se alienta, se exige, se compensa, y se canaliza a través de tareas políticas y colectivas; el terror totalitario se ejerce tanto sobre los enemigos objetivos como sobre los enemigos potenciales. El autor distingue los regímenes autoritarios de los totalitarios: los regímenes totalitarios se fundamentan en una *ideología*, los autoritarios en una *mentalidad*, aunque aclara que la distinción refleja dos polos extremos separados por una amplia zona oscura¹³. En éstos el elemento emotivo origina las adhesiones y, en consecuencia, es difícil que puedan crear una cultura cívica. Los regímenes autoritarios contienen las condiciones para su crisis política, la mentalidad, como base de la legitimidad, puede crear adhesiones a personas, pero difícilmente a instituciones y, en consecuencia, estos regímenes están pendientes de los éxitos, y tienen escasa resistencia en los momentos de adversidades políticas^{14 15}.

¹³ En la definición de regímenes autoritarios preferimos emplear la palabra *mentalidad* en lugar de la palabra *ideología*, en base a la distinción del sociólogo alemán Theodor Geiger. Para él las *ideologías* son sistemas de pensamiento elaborados y organizados más o menos intelectualmente, a menudo por escrito, por intelectuales, pseudointelectuales, o con su ayuda. Las *mentalidades* son formas de pensamiento y sentimiento, más emocionales que racionales, que proporcionan formas no codificadas de reacción ante distintas situaciones. Emplea una expresión alemana muy gráfica: la *mentalidad* es *subjektiver Geist* (incluso cuando es colectiva); la *ideología* es *objektiver Geist*. La *mentalidad* es una actitud intelectual; la *ideología* es un contenido intelectual. La *mentalidad* es predisposición psíquica, la *ideología* es reflexión, auto interpretación; la *mentalidad* es previa, la *ideología* es posterior; la *mentalidad* carece de forma, es fluctuante, sin embargo, la *ideología* está sólidamente formada. La *ideología* es un concepto de la sociología de la cultura, la *mentalidad* es un concepto del estudio del carácter social. Las *ideologías* poseen un fuerte elemento utópico, las *mentalidades* están más próximas del presente o del pasado". Linz, *Ibíd.*, p. 16 y 17. (La obra citada es: Theodor Geiger, *Die Soziale Schichtung des Deutschen Volkes*. Stuttgart: F. Enke, 1932, p. 77-79).

¹⁴ Linz, Juan (1988): *La quiebra de las democracias*, p. 36-51.

¹⁵ Sánchez Agesta considera que la vida política no es solo racional, sino también emocional y, como tal, está, en parte, fundada en ideas que dan base a la legitimidad y, en parte, está fundada en emociones que son también capaces de sostener un régimen político legitimando una autoridad. El autor define a la ideología como: "... un sistema de principios y creencias coherentes que se desarrollan e informan un conjunto de instituciones políticas y jurídicas (y hasta incluso quizás un orden económico social) con cierto rigor racional, que implica la coherencia de un pensamiento sistemático. El significado correspondiente a *mentalidad* (*Denkart*, en lengua alemana) tiene un carácter subjetivo, vital, que configura las ideas que responden a elementos emotivos y volitivos que adaptan y conforman los elementos ideológicos, que, en las ideas, que integran una *mentalidad*, se pueden contener). Sánchez Agesta (1987): *Sobre la consolidación de la democracia*, p. 7-36. (El trabajo de Linz citado es: Linz, Juan: *Una teoría del régimen autoritario. El caso de España*. Madrid, en la *España de los años setenta*". p. 1470-1531.

Loewenstein define a la democracia como el sistema político constitucional que se erige sobre la infraestructura ideológica que coloca al gobierno en función del poder que emana del pueblo y, por lo tanto, gobierno y parlamento deben seguir a la voluntad del pueblo que se manifiestan en procesos electorales libres y sin proscripciones¹⁶: "... *Cuando los detentadores del poder independientes, gobierno y parlamento, permanecen separados, pero están obligados constitucionalmente a cooperar en la formación de la voluntad estatal, la interdependencia se lleva a cabo por la coordinación en lugar de la integración; cuando en esta conformación política va implicado un papel de liderazgo para el ejecutivo, este tipo se denominan "presidencialismo"*¹⁷. Przeworski ¹⁸brinda una definición de la democracia en la que hace hincapié sobre el significado que la misma posee desde el punto de vista del funcionamiento de un régimen, entiende a la democracia como el sistema particular de procesamiento y resolución de conflictos intergrupales, una forma de organización del poder político. La distribución de la probabilidad de satisfacer los intereses propios de cada grupo -que no es ni más ni menos que el poder político- depende tanto de la distribución de los recursos que los participantes utilizan en los conflictos, como de los arreglos institucionales específicos. Dada una cierta distribución de recursos, la probabilidad de que un grupo cualquiera promueva sus intereses a un grado u modo definido depende de la forma en que se organizan los conflictos. Los sistemas electorales, los procedimientos judiciales, los convenios colectivos, las leyes que regulan la producción o la distribución de bienes, el acceso a los medios de comunicación, son los mecanismos a partir de los cuales se canalizan las probabilidades previas para la satisfacción de los intereses específicos de cada grupo. Así, el establecimiento de la democracia puede ser visto como el proceso de institucionalización de la incertidumbre. Es decir, es un proceso en el que todos los intereses son sometidos a la incertidumbre; en contraposición con lo que sería en un régimen autoritario en que algunos grupos -los miembros de la coalición dominante-

¹⁶ Ibid., p. 30 y ss.

¹⁷ Loewenstein (1983): Ibid., p. 92.

¹⁸ Przeworski (1988): Algunos problemas en el estudio de la transición a la democracia, p. 79-104.

tienen un alto control sobre la situación¹⁹. En un sentido similar, Morlino²⁰ define a la democracia como un método o un conjunto de reglas de juego que sirven para permitir la participación y la competición de todos los ciudadanos. Una relativa certidumbre sobre las reglas de juego -determinadas a priori- se conjuga con una relativa incertidumbre sobre los resultados sustantivos, sobre el modo en que se resolverán los diferentes conflictos en el terreno parlamentario o en otras instancias.

El proceso de cambio de régimen político es definido como una estrategia de entrega y toma de poder, en la cual se configuran -antes y después del hecho asociado al cambio de régimen- coaliciones de intereses que se expresan en acuerdos y alianzas entre élites, sectores de élites y grupos de poder que realizan el cambio de poder²¹. La coalición dominante es entendida como el conjunto de actores que poseen la mayor parte de los cargos, de la influencia y de los recursos coercitivos existentes en el terreno de la toma de decisiones, y en el coercitivo está controlado por los actores que están aliados en el país en ese momento. Esta coalición tiene poder para reprimir a la oposición al régimen y para desmovilizar a la gente indecisa, manteniéndola en una situación apática. Además, tiene la posibilidad y la oportunidad de satisfacer a los actores dominantes mediante decisiones beneficiosas para ellos tomadas por el gobierno autoritario. El quiebre o la debilidad creciente de la coalición dominante, las contradicciones del régimen y otro conjunto de factores permiten explicar los tiempos y las modalidades de la crisis. Entre los tipos de cambio de régimen político se pueden distinguir los de “redemocratización”: el régimen político anterior al autoritario había sido democrático²², y los de *instauración*: el régimen precedente nunca había sido

¹⁹ En este sentido se expresaba Talmon (1958): *“La concepción liberal (de la democracia) acepta que la política sea materia en la que se pueda acertar y errar, y mira los sistemas políticos como tretas pragmáticas debidas al arbitrio y al ingenio humanos. También reconoce la existencia de variedad de planos, en los que las actividades colectivas y personales exceden del campo de la política (paréntesis propio). Por otra parte, la escuela totalitaria democrática está basada en la suposición de una verdad política única y exclusiva. Podría ser llamada mesianismo político, en el sentido de que postula esquemas de realidades perfectas, preordenadas y armoniosas, hacia las cuales los hombres son llevados irremisiblemente y a las que están obligados a llegar”*. (paréntesis propio). Los orígenes de la democracia totalitaria, p. 2.

²⁰ Morlino (1988): Consolidación democrática. definición, modelos, hipótesis, p. 311-377.

²¹ Huneus (1986): *Ibíd.*

²² Linz desarrolla una idea interesante sobre la relación entre el régimen político previo al autoritarismo y la forma que éste adquiere: *“Los regímenes autoritarios que surgen tras un periodo de participación democrática competitiva inductor de un conflicto irresoluble en la sociedad optan por la despolitización y la apatía, recibidas como alivio por un número determinado de ciudadanos a causa de las tensiones del período anterior. Al principio es la apatía de los derrotados por el nuevo régimen, pero en ausencia de un partido totalitario de masas disciplinado y de sus organizaciones de masa combinado con el terror, se*

democrático, en éstos *“no hay experiencia del funcionamiento de instituciones democráticas ni una memoria colectiva de las dificultades anteriores de esas instituciones que condujeron a su crisis y quiebra”*²³.

Desde otra perspectiva²⁴, la dinámica de un cambio de régimen político es el resultado de la conquista, mantenimiento y pérdida de legitimidad. Passerin D'Entrèves considera que la legitimidad puede ser entendida como el intento de encontrar una “razón” a la antigua cuestión de la “obligación política”²⁵. En perspectiva histórica todos los gobiernos, independientemente de la forma que llegaron al poder, intentan alcanzar la legitimidad, es decir, el reconocimiento y el consenso del pueblo sobre el que ejercen el poder, la creencia consolidada en torno de las “reglas de juego” y de los valores básicos que una sociedad evoca ser, en rigor, comunidad”.

Floria, inspirado en Passerin D'Entrèves, propone clasificar los sistemas políticos por la forma en que se distribuye el poder: entre uno, pocos o muchos. Comienza con la idea del Estado como fuerza, como instancia coercitiva, quienes así piensan atienden al tema de la eficacia, y suelen ser llamados como “realistas” de la política (“real politik”). Pero surge de inmediato la pregunta: ¿cualquier fuerza?, ¿es aceptable la idea del Estado como fuerza de la “ley de la selva”?, la respuesta es negativa, y emerge el segundo tipo

harán pocos esfuerzos para integrarles y hacer que participen en el sistema. Como las tensiones y los odios que generaban la movilización para el sistema disminuyen, es probable que sus partidarios caigan también en la apatía, que con frecuencia puede ser bien recibida por los gobernantes con el fin de evitar las presiones para que cumplan las promesas que hicieron durante el proceso de movilización.” Linz: Una interpretación de los regímenes autoritarios, p. 22. Como será analizado más adelante, el régimen militar optó por esta vía de despolitización y desmovilización social.

²³ Linz (1990): Transiciones a la democracia, p. 9.

²⁴ Linz, al referirse al cambio, presenta la definición de Tilly: *“...La múltiple soberanía es la característica distintiva de la revolución. Una revolución comienza cuando un gobierno anteriormente bajo el control de un solo sistema político soberano se convierte en objeto de pretensiones efectivas, en competencia mutuamente excluyentes por parte de dos sistemas políticos diferentes; termina cuando un solo sistema político soberano vuelve a obtener el control sobre el gobierno”*. Linz, Juan (1988): La quiebra de las democracias, p. 39. (La cita de Tilly pertenece a: “Revolutions and Collective Violence”, en Handbook of Political Science, dirigido por Greenstein y Polsby, Vol. 3, p. 519).

²⁵ Passerin D'Entrèves (1970): La noción de Estado, p 17-21. Ferrero planteó que *“Entre todas las desigualdades humanas, ninguna es tan importante por sus consecuencias, ni tiene tanta necesidad de justificarse ante la razón, como la establecida por el poder. Salvo raras excepciones, un hombre es igual a otro: ¿por qué, entonces, éstos tienen el derecho a mandar y los otros el de obedecer? Los principios de legitimidad son otras tantas respuestas a esta pregunta”*. Ferrero, G. (1943): El poder. Los genios invisibles de la ciudad, p. 35. En un sentido similar, para García Pelayo el trasfondo de la relación de mando y obediencia, inherente a una relación de poder propia de una unidad política, aquí subyace lo que denominó “transfiguración del poder”: *“El hombre ha tratado constantemente de eludir, de neutralizar o de sublimar el hecho radical y terrible de estar sometido a otro hombre ... no es solamente en la transfiguración del gobernante, sino también en la creencia del gobernado dónde radica la clave del problema”*. García Pelayo (1973): Los mitos políticos, p. 38 y 63.

de Estado: como gobierno por la fuerza de la ley, la cualidad distintiva es la legalidad, la ley protege al hombre de la opresión del príncipe, el ejercicio del gobierno tiene sus límites, esta segunda concepción del Estado es propia del "liberalismo político". Completando la secuencia, la tercera visión del Estado parte de la pregunta: ¿cualquier ley?, y la respuesta volverá a ser negativa, no cualquier ley, sino la ley consentida por la sociedad, una ley con autoridad, la cualidad distintiva es la legitimidad, en esta corriente de pensamiento, denominada democracia política, no hay mando efectivo que no tenga raíces o arraigo en el pueblo que gobierna. Así, las transiciones son entendidas como la evolución histórica de los estados nacionales desde la primera a la segunda y a la tercera concepción, y si ocurre el camino inverso es una involución ²⁶.

Para Linz²⁷: "... La legitimidad puede ser entendida -en una definición de mínima- como la creencia de que, a pesar de sus limitaciones y fallas, las instituciones políticas existentes son mejores que otras que pudieran haber sido establecidas, y que por tanto pueden exigir obediencia". En el mismo sentido, Seymour M. Lipset estableció -en la década del '60- la relación entre estabilidad de un régimen y la eficacia y legitimidad del sistema político: "La estabilidad de cualquier democracia dada depende no solamente del desarrollo económico, sino también de la eficacia y la legitimidad de un sistema político. ... Mientras la eficacia es fundamentalmente instrumental, la legitimidad es valorativa. ... La legitimidad, en y por sí misma, puede ser asociada con muchas formas de organización política, inclusive las opresivas"²⁸. Sin embargo, es conveniente tener presente que el apoyo al régimen democrático no implica necesariamente el respaldo al gobierno de turno, ni al contenido de alguna norma en particular sino, más bien, significa el reconocimiento del carácter vinculante que implica una norma y la autoridad constituida. La legitimidad del régimen político, o la de un gobierno en particular, está relacionada con su trayectoria, con el resultado de sus políticas, y de cómo éstas son percibidas por el resto de la sociedad. Así, se puede establecer una relación entre estabilidad de un régimen político con su legitimidad y su eficacia.

Autores como Morlino o Linz distinguen la eficacia de la efectividad. Consideran que la eficacia: "... se refiere a la capacidad de un régimen para encontrar soluciones a

²⁶ Floria (1986): Análisis introductorio de la política y del Estado, p. 62-65.

²⁷ Linz (1988): La quiebra de las democracias. p. 38.

²⁸ Lipset (1963): El hombre político. Buenos Aires, p. 57.

problemas básicos con los que se enfrenta todo régimen político (y los que cobran importancia en un momento histórico), que son percibidos más como satisfactorios que como insatisfactorios por los ciudadanos conscientes"²⁹. Mientras que la efectividad de un régimen es percibida como: "... la capacidad para poner realmente en práctica las medidas políticas formuladas con el resultado deseado. El hecho de que incluso las mejores leyes no valen sino se pueden hacer cumplir entra dentro de este concepto. ... La falta de efectividad debilita la autoridad del Estado, y como resultado, su legitimidad"³⁰. Pero la relación entre eficacia, efectividad y legitimidad lejos de ser simple y lineal puede ser analizada como una relación en que las dos dimensiones influyen y se ven influidas. En efecto, la percepción inicial que se tenga sobre la legitimidad del sistema, legitimidad de origen, puede afectar la visión de la eficacia y efectividad del régimen en funcionamiento. Es decir, las circunstancias relacionadas con la instauración de un gobierno y su posterior consolidación podrán influir cuando el régimen tenga que enfrentar una crisis. En este sentido Linz³¹ expone el caso de la República de Weimar, en la cual sus orígenes históricos específicos y sus fracasos iniciales pueden haber llegado a ser decisivos a la hora de la caída final a pesar de su éxito a mediados de la década del '20. Si bien la legitimidad de origen es importante, desaciertos sucesivos de los distintos gobiernos derivados de la pérdida de la eficacia y la efectividad de éstos pueden provocar una deslegitimación del régimen político y, con ello, afectar la estabilidad. Así, la legitimidad de medios (o de ejercicio) surge como consecuencia de las relaciones directas, indirectas y de retroalimentación entre la eficacia y la efectividad sobre la legitimidad y estabilidad del sistema³². Finalmente se puede presentar la tercera dimensión de la legitimidad: la legitimidad de fines. En el caso de los regímenes que nacen luego de la crisis de las democracias, suelen presentarse ante la sociedad como los restauradores del orden frente al caos, suelen definir como uno de sus objetivos centrales -al menos en sus enunciados- el restablecimiento de la democracia en un futuro. Son los regímenes "restauradores" que se presentan ante la sociedad con metas finales que le permitan apostar a la legitimidad

²⁹ Linz (1988): La quiebra de las democracias, p. 46

³⁰ *Ibíd.*, p. 49.

³¹ *Ibíd.*, p. 44

³² *Ibíd.*, p. 42 y 43.

de fines que le ayude a justificar su existencia. La dinámica del cambio de régimen político es el proceso de conquista, mantenimiento y pérdida de la legitimidad.

Ahora es necesario precisar los alcances que les daremos a los conceptos de transición, instauración y consolidación de un proceso democrático. Se considera transición³³ al proceso de cambio a través del cual un régimen es sustituido por otro. Los valores, las normas, las reglas del juego y las instituciones propias del autoritarismo son sustituidas por un conjunto diferente de valores, normas, instituciones y reglas que caracterizan a una democracia. En términos cronológicos la transición cubre el período de tiempo en que el antiguo régimen ha dejado de existir plenamente sin que el nuevo haya surgido en su totalidad. La transición comienza con la crisis de aquél y termina con la institucionalización de éste; aunque, desde luego, no excluye ciertos aspectos de continuidad entre ambos. Se puede asistir a transiciones *continuas*³⁴, en las que, de algún modo, el antiguo régimen diseña y ejecuta leyes y procedimientos para su salida del poder, de transiciones de *ruptura*, en las que, en general, un hecho externo precipita el cambio, abandonando las normas y procedimientos que tenían previstos para realizar la transición. Otro de los elementos de interés para caracterizar esta fase es la presencia de una oposición anti-régimen, cuya acción persistente y fuerza lidere y “empuje” el proceso de cambio. En estos casos, la existencia o no de esta oposición puede determinar que la caída del régimen se produzca “desde afuera”, por la acción de fuerzas ajenas al mismo o, en los casos de ausencia de fuerzas opositoras, la caída se produzca “desde adentro”, producto de la escasa efectividad en la resolución de problemas concretos, de la incapacidad para institucionalizar la continuidad de éste, el régimen pierde la legitimidad que deriva de la eficacia decisional. La presencia de este factor, unido a un quiebre o rotura de la coalición dominante, y ante la presencia de un evento acelerador del cambio, puede derivar en una situación en la cual sea el propio régimen el que “ofrezca”, desde adentro, la salida³⁵. También es importante precisar los

³³ Santamaría (1981): *Transición controlada y dificultades de la transición: el ejemplo español*, p. 371-418.

³⁴ Morlino (1981): *Del fascismo a la democracia débil. El cambio de régimen en Italia (1939-1948)*.

³⁵ Stepan define a la sociedad civil como: “... el escenario donde diversos movimientos sociales (asociaciones barriales, grupos de mujeres, agrupaciones religiosas, tendencias intelectuales) y organizaciones sociales de todas las clases sociales (abogados, periodistas, sindicatos, empresarios) tratan de construir un conjunto de acuerdos que les posibilite expresarse y promover sus intereses.” Por sociedad política considera al “... escenario en la cual la sociedad se organiza específicamente para la contienda política como forma de obtener el control sobre el poder público y el aparato estatal.” Y define al Estado como “... la continuidad administrativa, legal, burocrática del sistema coercitivo, que busca no sólo administrar el aparato estatal, sino también, estructurar las relaciones entre el poder civil y el poder

casos en los cuales la transición es manejada "desde arriba" por el antiguo régimen o, por el contrario, si se trata de transiciones *pactadas*, cuando las decisiones centrales del cambio son parte de la agenda de temas entre las viejas y las nuevas autoridades, entre los militares y la dirigencia política civil. En el estudio de las transiciones, como será ampliado en el capítulo 7, el factor internacional suele ser decisivo en dos perspectivas: la derrota en una guerra internacional se puede convertir en el evento acelerador del cambio. Por otro lado, los procesos de transición pueden ir acompañados de un apoyo internacional de tipo económico y/o político, que influirá sobre el contexto económico, social y político de la transición y consolidación del nuevo proceso democrático.

La instauración democrática significa el establecimiento de todos los derechos políticos y civiles prohibidos o restringidos por el régimen anterior. Se caracteriza por la aparición del pluralismo no limitado, por el funcionamiento de los partidos políticos, de las asociaciones gremiales, y de las organizaciones civiles sin restricciones. El período de instauración concluye cuando el nuevo régimen democrático ha logrado erigir todas las estructuras políticas principales que lo caracterizan. Aquí, retornamos a la definición de democracia de Przeworski para señalar que la coalición democrática será el resultado de un grupo de fuerzas políticas y sociales que deciden aceptar la forma democrática de resolver los problemas: participación política, elecciones, representación de las mayorías y minorías, pluralismo, división y control de los poderes, en un ambiente en el que las decisiones sean tomadas sin coerción o violencia.

Finalmente, la consolidación puede ser entendida como el proceso de transformación que no tiene por objeto la sustitución de un régimen por otro, sino el desarrollo, confirmación y asentamiento de un nuevo régimen³⁶. Al proceso de consolidación se lo puede considerar terminado una vez que el nuevo régimen está plenamente institucionalizado. En ese momento alcanza un nivel de autonomía suficiente para regirse con la lógica que le imponen sus principios de organización, según la dinámica que le imponen las fuerzas políticas que lo sustentan, sin ser desafiado por sectores o fuerzas anti-régimen. Se pueden distinguir algunos aspectos que hacen a la solidez de este proceso³⁷. El primer factor es el de la institucionalización de las estructuras de

público, así como varias relaciones dentro de la sociedad civil y política." Stepan (1988): Repensando a los militares en política. Cono Sur: un análisis comparado, p. 197.

³⁶ Morlino (1981): *Ibíd.*

³⁷ Santamaría (1981). *Ibíd.*

autoridad y de mediación del régimen democrático: los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, el funcionamiento independiente de los tres poderes del Estado³⁸. El segundo aspecto está referido a la elaboración de las políticas que tienen que implementar el nuevo gobierno para resolver los problemas heredados y los que emergen. En este sentido, el régimen en general, y el gobierno en particular, deberán resolver estos conflictos de modo de obtener la legitimidad que nace de la resolución de éstos, y que se convertirá en un pilar central para su estabilidad. Dada la escasez de recursos disponibles y las múltiples demandas existentes, el gobierno deberá optar estableciendo prioridades. Aquí vuelve a jugar un rol importante la formación de una coalición dominante que apoye al régimen democrático, así como de diferentes coaliciones menores o transitorias en torno a problemas específicos. Estas últimas tendrán un carácter dinámico que se ajustarán de acuerdo con la forma y consecuencia que adopte la toma de decisiones. Sin embargo, se debe enfatizar en la necesidad de que no existan sectores sistemáticamente excluidos de la coalición general de manera que los puedan inducir a abandonar la coalición que respalda al régimen, y convertirse en fuerzas neutrales que ya no lo apoyen o incluso intenten desafiarlo.

³⁸ Para Huntington, "... El nivel de comunidad política que alcanza una sociedad refleja la relación entre sus instituciones políticas y las fuerzas sociales que la integran. ... Pero cuanto más compleja y heterogénea es la sociedad, el logro y mantenimiento de la comunidad política dependen en mayor medida del funcionamiento de las instituciones específicas. ... La institucionalización es el proceso por el cual adquieren valor y estabilidad las organizaciones y procedimientos. Se podría definir el nivel de institucionalización de cualquier sistema político por la adaptabilidad, complejidad, autonomía y coherencia de sus organizaciones y procedimientos." Huntington (1971): El orden político en las sociedades en cambio, p. 404.

PARTE I: LA INTERVENCIÓN MILITAR DEL 24 DE MARZO DE 1976

Antes de comenzar el análisis, presentaremos los interrogantes que buscaremos responder para analizar el contexto previo al golpe militar del '76, su desarrollo, y la instauración de la democracia en 1983. La pregunta sobre el contexto es: ¿cuáles fueron los factores que deslegitimaron al gobierno peronista? En la fase de instauración las cuestiones son: ¿cuáles fueron las normas institucionales, la estructura de poder y los objetivos del régimen militar? En la fase de trayectoria los puntos son: ¿cuál fue la lógica del proceso de toma de decisiones de la Junta Militar?, ¿qué políticas diseñaron para alcanzar sus objetivos y cómo funcionaron) Los interrogantes para el examen de la crisis del régimen militar son³⁹: ¿cuáles fueron las principales condiciones que rompieron la coalición dominante?, ¿cuáles fueron los principales indicadores de la crisis del régimen?, y ¿cuál fue el punto de no retorno del "Proceso? Luego el análisis se centrará en identificar ¿cuáles son las características de la transición a la democracia en Argentina?, y ¿cómo éstas condicionarán la etapa de su consolidación?

2. Contexto político, institucional y económico:

El derrocamiento del gobierno justicialista en la madrugada del 24 de marzo de 1976 no tomó por sorpresa a, prácticamente, ninguno de los sectores de la sociedad argentina⁴⁰. Desde fines del año 1975 era un secreto a voces la decisión de las Fuerzas Armadas de poner fin al gobierno encabezado por la presidenta María Estela Martínez de Perón. El discurso del general Jorge R. Videla -comandante del Ejército- en la nochebuena de 1975, desde Tucumán, se constituyó en la señal definitiva de que las fuerzas Armadas habían decidido abandonar al régimen constitucional y anunciaban la decisión de modificar el orden institucional vigente⁴¹.

³⁹ Morlino (1981): Del fascismo a la democracia débil. El cambio de régimen en Italia (1939-1948), p. 93-150.

⁴⁰ Luna describía este comento: *"La noticia no sorprendió a nadie. Los rumores de un golpe miliar arreciaban desde diciembre del año anterior, y en el último mes se habían tornado incontenibles, en la medida que el descontrol sobre la situación aumentaba y la Argentina se iba convirtiendo en un caos. El derrocamiento de Martínez de Perón no causó sorpresa; generó, en cambio, un inmenso alivio en todos los sectores y acaso también en el peronismo, cada vez más confuso e impotente frente a la situación".* Luna (1983): El 'Proceso' (1976-1982), p148-149.

⁴¹ *"Soldados del Ejército Argentino: desde esta bendita tierra tucumana, testigo imperecedero de nuestra gesta emancipadora y perenne eco del grito de independencia, me dirijo a vosotros, en vísperas de la conmemoración del nacimiento de nuestro Redentor, ... Lucha nuestro Ejército, el Ejército de la Nación, contra delincuentes apátridas que pretenden, mediante el vil asesinato, quebrar el Estado y ocupar el*

La Argentina se encontraba inmersa en una profunda crisis política, institucional, económica, de seguridad interna⁴². Crisis que abarcaba al Estado, al gobierno y a los partidos políticos, éstos se mostraban "agotados" para generar alternativas frente a la inminente intervención militar.

El peronismo, en el análisis de Guido Di Tella, había ensayado tres giros políticos⁴³ que dislocaron la coalición de gobierno generando incertidumbre, desorganización y fallas en la eficacia gubernamental. El primero de ellos -bajo la presidencia del Héctor Cámpora- fue hacia la "izquierda", apoyándose en los sectores juveniles del movimiento. Las derivaciones más notables del mismo fueron las secuelas que dejó en el partido y en sectores de la sociedad desde el punto de vista de la unidad interna. En la corta gestión de gobierno de Cámpora tuvieron destacada participación sectores de la juventud, del movimiento obrero no peronista y de las "formaciones especiales" que Perón había aprobado -de manera explícita o implícita- desde el exilio en Madrid, durante el gobierno militar⁴⁴. La orientación tomada por el presidente Cámpora generó fuertes resistencias por parte del otro sector del movimiento peronista integrado por representantes de parte del sindicalismo, en especial el nucleado en la C.G.T. y la 62 Organizaciones, en la que la U.O.M. (Unión Obrera Metalúrgica) tenía un peso significativo. Cámpora renunció luego de dos meses en la presidencia, y convocó a nuevas elecciones. La fórmula Perón-Perón ocupó el Poder Ejecutivo de la Nación⁴⁵. La existencia de sectores internos en pugna venía caracterizando el desarrollo del movimiento peronista. En especial, el enfrentamiento se hizo visible entre el

poder para cambiar el sistema de vida nacional tan caro a los sentimientos profundamente cristianos de nuestro Pueblo. ... Frente a esta situación, es imprescindible que el pueblo argentino y sus Fuerzas Armadas tomen conciencia de la gravedad de las horas que vive la Patria. Téngalo presente el Ejército y comprenda la Nación: la delincuencia subversiva, si bien se nutre de una falsa ideología, actúa favorecida por el amparo que le brinda una pasividad cómplice. ... Frente a esta tiniebla, la hora de despertar del Pueblo argentino ha llegado. La paz no sólo se ruega, la felicidad no sólo se espera, sino que también se gana. ... La inmoralidad y la corrupción deben ser adecuadamente sancionadas. La especulación política, económica e ideológica, deben dejar de ser los medios utilizados por grupos de aventureros para lograr sus fines. El orden y la seguridad de los argentinos deben vencer al desorden. ... Ilumine (Dios, nuestro Señor) a aquellos que modificando los rumbos deban adoptar las decisiones que solucionen los problemas del país, y no ruego, pero si lo hago para que la ley de los hombres caiga con todo rigor sobre ellos". La Nación, 25 de diciembre de 1975. p. 1. Buenos Aires

⁴² Floria (1988): *La transición hacia la democracia pluralista*, p. 205 y ss.

⁴³ Di Tella (1986): *Perón-Perón. 1973-1976*, p. 111-148.

⁴⁴ Itzcovitz (1985): *Estilo de gobierno y crisis política. (1973-1976)*, p. 37-47.

⁴⁵ La fórmula Cámpora- Francisco Solano Lima (Héctor Cámpora y Solano Lima) habían ganado las elecciones con el 49,59% del electorado; mientras que la fórmula Perón-Perón (Juan D. Perón y María Estela Martínez de Perón) lo hizo con el 61.85%.

sindicalismo por un lado y los sectores juveniles vinculados o no a grupos armados por el otro. A partir de noviembre de 1973 Perón inició una política de marginación de este sector de la juventud peronista y se recostó en el sector del sindicalismo. Esta estrategia ahondó el enfrentamiento del grupo desplazado con el gobierno. El punto decisivo de la confrontación llegó cuando Perón tomó la decisión de expulsarlos de la Plaza de Mayo, bajo la denuncia de "infiltrados". Una consecuencia inmediata de esta nueva situación fue el aumento del nivel de violencia interna hasta niveles desconocidos. A partir de entonces, el grupo "Montoneros" decidió pasar a la clandestinidad y profundizar la lucha armada. El E.R.P. (Ejército Revolucionario del Pueblo) había sido declarado ilegal en 1973⁴⁶. Luego de la muerte del general Perón se produjo el segundo giro, ahora hacia la "derecha", encabezado por Martínez de Perón y el ministro de Bienestar Social José López Rega. Este cambio de políticas desencadenó serios enfrentamientos en el interior de la coalición de gobierno, en especial, en el movimiento sindical que se opuso a las políticas del Ejecutivo ahondando el caos económico y de seguridad interna. El resquebrajamiento interno del gobierno erosionaba la eficacia a la autoridad constitucional. Finalmente, tras el alejamiento forzado de López Rega, la presidenta Martínez de Perón tuvo que priorizar sus relaciones con el sindicalismo tradicional, pero en ese momento la propia organización de trabajadores se encontraba inmersa en una fuerte puja de ingresos para mantener o ganar posiciones. Durante los primeros 18 meses de gobierno Martínez de Perón tuvo 38 ministros, con un promedio de cuatro meses de permanencia en el cargo⁴⁷.

⁴⁶ Itzcovitz sugiere que: "... Pasados dos meses de constituido el gobierno, Perón creyó llegada la oportunidad de retornar el proceso a otros cauces. Establecido el gobierno constitucional, y alejadas las Fuerzas Armadas del poder político, la manipulación de que habían sido objeto los grupos radicalizados ya no tenía sentido de ser." Itzcovitz (1985): *Estilo de gobierno y crisis política. (1973-1976)*, p. 45.

⁴⁷ Vázquez señala los siguientes datos: Interior: Benito LLambí, Alberto Rocamora, Antonio Benítez, Vicente Damasco, Ángel Federico Robledo y Roberto Ares. Seis ministros, a un promedio de tres meses de gestión cada uno. Relaciones Exteriores: Alberto Juan Vignes, Ángel Federico Robledo, Manuel Aráuz Castex y Raúl Quijano. Cuatro ministros a un promedio de cuatro meses y fracción cada uno. Defensa: Ángel Federico Robledo, Adolfo Mario Savino, Jorge Garrido, Tomás Vottero, Ricardo Guardo y José Deheza. El mismo promedio que en Interior. Economía: José Ber Gelbard, Alfredo Gómez Morales, Celestino Rodrigo, Pedro Bonanni, Antonio Cafiero y Emilio Mondeli. Promedio similar a Interior y Defensa. Cultura y Educación: Jorge Taiana, Oscar Ivanissevich y Pedro Arrighi. Seis meses de gestión. Justicia: Antonio Benítez, Ernesto Corvalán Nanclares, José Alberto Deheza y Pedro Augusto Saffores. Trabajo: Ricardo Otero, Cecilio Condit, Carlos Ruckauf y Miguel Unamuno. Bienestar Social: José López Rega, Carlos María Villone, Rodolfo Roballos, Carlos Emery y Aníbal Demarco. Vázquez, Enrique (1985): *P.R.N. La Última. Origen, apogeo y caída de la dictadura militar*, p. 18. En el mismo sentido, Itzcovitz resalta que en los 1058 días de gobierno peronista se sucedieron 5 presidentes de la Nación: Héctor Cámpora, Raúl Lastiri, Juan D. Perón, María E. M. de Perón e Ítalo Luder.

La crisis llegaba también al Poder Legislativo. El bloque del partido gobernante se hallaba dividido entre moderados y verticalistas, y estas diferencias trababan el funcionamiento del Congreso⁴⁸. Los partidos de la oposición no lograban instrumentar una salida institucional a través de la cual se utilizasen recursos genuinos para superar la situación de bloqueo en que se encontraba el Ejecutivo⁴⁹. La tercera fuerza parlamentaria, el bloque de legisladores de la FUFEP (Fuerza Federalista Popular), había propuesto como remedio institucional la constitución de la Asamblea Parlamentaria para tratar sobre tablas la renuncia de la presidente por "*inmoralidad, inconstitucionalidad, ilegalidad e ineptitud en la gestión presidencial*"⁵⁰, con el apoyo del bloque radical, que era la segunda fuerza en el Congreso, pero no prosperó por la negativa del presidente de la Cámara de Senadores, y vicepresidente de la Nación, a llamar a la Asamblea para su tratamiento. En esa oportunidad, el Dr. Ítalo A. Luder fundamentó razones constitucionales para tomar su determinación, pero con esta decisión se cerraba la instancia legislativa que significaba el juicio político⁵¹.

Otro dato que reflejaba el alto grado de conflicto interno en la coalición de gobierno lo constituyó la relación del gobierno nacional con los gobiernos provinciales. La figura de la intervención nacional a las provincias fue utilizada en varias oportunidades, reemplazando a los gobiernos elegidos por la ciudadanía por funcionarios designados por el Ejecutivo Nacional, entre las que se destacó por su importancia la intervención en la provincia de Córdoba, y el enfrentamiento con la provincia de Buenos Aires a cargo de Victorio Calabró, expulsado del Partido Justicialista y del Movimiento Nacional Justicialista en noviembre de 1975, este conflicto se fue agudizando en la última fase del período de gobierno bajo la amenaza constante de la intervención, que nunca llegó a concretarse.

La situación económica era también grave⁵². Luego de los picos inflacionarios del mes de junio (21,3% mensual en los precios minoristas y 42,5% en mayoristas) y de julio (34,9% y 32,2% respectivamente), la economía argentina había entrado en una etapa de

⁴⁸ La Nación, 15 de diciembre de 1975, p. 3. Buenos Aires, Argentina.

⁴⁹ Criterio: La arrogancia del poder. N.º 1733-34, Año XLVIII, 26.II.76.

⁵⁰ Vázquez, Enrique (1985): *Ibíd.*, p. 22.

⁵¹ La Nación, 5 de marzo de 1976, p. 1. Buenos Aires

⁵² La información de esta sección ha sido extraída de: Di Tella (1986): Perón-Perón. 1973-1976, apéndice estadístico, p. 335-356, y Di Tella (1986): Argentina's Most Recent Inflationary Cycles, 1975-85, p. 167-205.

fuerte incertidumbre que se agudizaba a medida que aumentaba el clima de un probable golpe de estado hacia fines de 1975. La puja intersectorial de ingresos se hacía más violenta, reflejándose en las marcadas variaciones en los precios de la economía. El nivel de actividad económica se reducía, el PBI cayó en el III trimestre de 1975 3.2%, 6.3% en el IV, y 4.2% en el I trimestre de 1976. El producto industrial tuvo similar comportamiento: disminuyó 5.6% en el III trimestre de 1975, 8.9% en el IV, y 6.7% en el I de 1976. El índice de la construcción era más patético, disminuyó 11.3% en el III trimestre de 1975, 26.3% en el IV, y 26.7% en el I del '76. La inversión siguió esta tendencia, descendió 2.2% en el II trimestre de 1975, 8.1% en el III, 20.2 en el IV y 16.9% en el I de 1976. Los altos niveles inflacionarios hacían sentir sus efectos sobre indicadores como el grado de liquidez de la economía (moneda y depósitos a la vista como porcentaje del ingreso: M1/PBI): el promedio para el año 1974 había sido 13,5%, en el año 1975 fue 10,5%, y 7,9% en el primer trimestre del '76, que reflejaban la escasa disposición del público a mantener sus saldos monetarios en billetes (sujetos, en consecuencia, a la depreciación provocada por la inflación, llamado también impuesto inflacionario). La participación de los asalariados en el ingreso pasó de 46.9% del P.B.I. en el año 1973, a 46.7% en el '74, y a 44.8% en 1975. Los salarios, sujetos a variaciones constantes por la dinámica de la puja distributiva, se encontraban, en general, retrasados tomando como base el año 1973. La Argentina venía sufriendo desde fines de 1973 un sensible deterioro en sus términos del intercambio⁵³: el índice para el año 1973 fue de 108.9, 71.9% para 1974 y 71.2% para 1975. La deuda externa argentina había crecido a lo largo del gobierno justicialista: en 1973 era de U\$S 6.233 millones, en 1974: U\$S 7.968, en 1975: U\$S 9.149 millones. El nivel de reservas internacionales descendió en el último año de gobierno: en el I trimestre de 1975 fue de U\$S 1.057,6 millones, en el II trimestre U\$S 732,7 millones, en el III fue de 529,6 millones, en el cuarto trimestre U\$S 678 millones y en el primero del '76 fue de U\$S 725,7 millones. Finalmente, el déficit en las operaciones de la Tesorería del gobierno central se incrementó en los últimos meses de 1975: fue 7,1 % del PBI en el primer trimestre del año, 6,9% en el segundo, 9,7% en el tercero, 16,4% en el cuarto, y 12,9% en el primer trimestre de 1976.

⁵³ Precios de las exportaciones (X) respecto a precio de las importaciones (M): $TI = (Px/Pm)$.

El panorama general que se deriva de estos indicadores es por demás ilustrativo sobre el estado de la economía argentina hacia finales del primer lustro de los '70. El país se encontraba en una etapa de recesión económica, alta inflación, desmonetización, fuertes pujas de ingresos intersectoriales, endeudamiento externo creciente, deterioro en sus términos de intercambio, y caída en los niveles de reservas internacionales.

El sindicalismo también estaba en crisis, estuvo enfrentado a María Estela Martínez de Perón espacialmente a partir del año 1975, jugó un rol más reivindicativo que participativo en el gobierno. Utilizó un instrumento -la convención colectiva de trabajo- que agudizó la espiral inflacionaria y dificultó que el grupo centrista de la coalición de gobierno retomase una política más moderada⁵⁴. La C.G.T. ya en un rol opositor convocó a la huelga general el 7 y 8 de julio⁵⁵. El acuerdo entre el Estado, los sindicatos y los empresarios, creación del general Perón -llamado el Pacto Social- se había interrumpido con el abandono de la C.G.E. (Confederación General Económica), luego del desplazamiento del ministro de Economía José Ber Gelbard por José A. Gómez Morales el 21 de octubre de 1974.

Sin embargo, una de las causas más importantes de la crisis del gobierno del '73 fue la seguridad interna. Los enfrentamientos armados entre alas internas y extremas de la coalición gobernante llevaron los niveles de inseguridad a niveles desconocidos. Ante esta situación, el gobierno decidió instrumentar una política de seguridad interna basada en dos pilares: uno formal y el otro informal, uno legal y el otro ilegal. Por un lado, delegó en las Fuerzas Armadas, en forma gradual pero continua, la gestión de la lucha contra la violencia interna, incluido el manejo de las policías provinciales. Por otro lado, crearon desde organismos públicos, como el Ministerio de Bienestar Social, grupos paraestatales, entre los que se destacó la "triple A" (Alianza Anticomunista Argentina), para eliminar a los sectores guerrilleros o de otros opositores al gobierno. Las facciones "parapoliciales" utilizaron una violencia aún mayor que provocó un clima de inseguridad interna en toda la sociedad⁵⁶⁵⁷.

⁵⁴ Criterio: "¿Qué pensar?". N.º 1735, Año XLIX, 11.III.76. p. 100. Y Di Tella, Guido (1986): *Ibíd.*, cap. 3.

⁵⁵ Di Tella, Guido (1986): *Perón-Perón. 1973-1976*, p. 136 y 212.

⁵⁶ Di Tella señala que estos grupos fueron utilizados para "ajustes de cuentas internos" dentro del Partido Justicialista. Di Tella (1983): *Perón-Perón, 1973-1976*, p. 125, 131-137.

⁵⁷ Itzcovitz sostiene que: "*La gestión del general Perón al frente del gobierno, en relación con el modo de operar de la violencia ilegal o paraestatal se caracterizó por: a) la convocatoria a los trabajadores a hacer justicia con su propia mano, b) responder a las acusaciones inculcando al acusador, c) la inacción o la*

El examen de los instrumentos jurídicos propiciados desde el Ejecutivo en el intento de recuperar el orden interno permite entrever el grado de conflicto que caracterizó a este período de gobierno⁵⁸. En el mes de setiembre de 1974, bajo la presidencia de María Estela Martínez de Perón, se sancionó la Ley 20.840, que estableció las penalidades para las actividades subversivas en todas sus manifestaciones, e incluyó a *“a los que luego de declarado ilegal un conflicto laboral, por la autoridad competente, instiguen a incumplir las obligaciones impuestas por dicha decisión”*⁵⁹, el Ministerio de Trabajo prohibió las huelgas por motivos salariales, los paros y ocupaciones de plantas y *“comenzó a intimidar, amenazar y suspender personerías gremiales con más frecuencia que anteriormente”*⁶⁰. En noviembre, con la promulgación del Decreto 1368/74, se declaró el estado de sitio en todo el país⁶¹. El 5 de febrero de 1975 el Poder Ejecutivo sancionó el Decreto 261/75, que ordenó a las Fuerzas Armadas intervenir para *“neutralizar y/o aniquilar”* a la guerrilla que se había apostado en Tucumán, conocido como *“operativo independencia”*⁶². Posteriormente se creó la Subsecretaría de Seguridad Interna con la finalidad de centralizar la gestión antsubversiva. En el mes de setiembre de 1975 el Dr. Ítalo A. Luder, a cargo de la presidencia de la Nación, ante la licencia de María E. M. de Perón, sancionó tres decretos que institucionalizaron la forma que tendría esta política⁶³: se creó el Consejo de Defensa Nacional, integrado por la presidente, sus

negación de su existencia. Perón no otorgaba la misma importancia en sus discursos a los diferentes signos de la violencia; al referirse a la ‘ultraizquierda’ solía historiar su accionar, definir sus métodos y nombrar a los responsables; cuando mencionaba a la ‘ultraderecha’, en cambio, sólo lo hacía en términos generales y nunca responsabilizaba a sector alguno”. Itzcovitz (1985): Estilo de gobierno y crisis política. (1973-1976), p. 66.

⁵⁸ Ver Anexo: Legislación consultada.

⁵⁹ Ley 20.840, art. 5°.

⁶⁰ Jelin (1977): Conflictos laborales en Argentina, 1973-1976, p. 25.

⁶¹ Como se desarrollará más adelante, el gobierno militar prorrogaría el estado de sitio en el año 1976, y mantuvo su vigencia hasta el 1983, fueron nueve años de vigencia, el período más extenso de la historia argentina.

⁶² *“Visto Las actividades que elementos subversivos desarrollan en la provincia de TUCUMAN y la necesidad de adoptar medidas adecuadas para su erradicación: LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA en Acuerdo General de Ministros DECRETA: ARTICULO 1º.- El comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de TUCUMAN. ARTICULO 2º.- El Ministerio del Interior pondrá a disposición y bajo control operacional del Comando General del Ejército los efectivos y medios de la Policía Federal que le sean requeridos a través del Ministerio de Defensa, para su empleo en las operaciones a que se hace referencia en el Artículo 1º”.*

⁶³ A través del Decreto 2770/75 se creaba el Consejo de Seguridad Interna: *“Visto la necesidad de enfrentar la actividad de elementos subversivos que con su accionar vienen alterando la paz y la tranquilidad del país, cuya salvaguardia es responsabilidad del gobierno y de todos los sectores de la Nación, ...decreta: Art. 1º-- Constituyese el Consejo de Seguridad Interna que estará presidido por el Presidente de la Nación y será integrado por todos los ministros del Poder Ejecutivo nacional y los señores*

ministros y los comandantes de las Fuerzas Armadas para centralizar la lucha contra la subversión, y se subordinaron las fuerzas policiales y penitenciarias a las fuerzas militares. Días después, la presidente Martínez de Perón envió al Congreso el proyecto de "Ley de Defensa Nacional, que identificaba cinco organismos para centralizar el manejo de la seguridad interna: el Consejo de Defensa Nacional, el Consejo de Seguridad Interna, el Consejo Nacional de Seguridad, el Comité Nacional y la Central Nacional de Inteligencia, a través de este proyecto los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas ejercerían la autoridad en los comandos de las zonas de emergencia, con atributos para dictar bandos y crear tribunales militares para los civiles con aplicación de la pena de muerte, en el proyecto se establecía que las facultades e independencia del Poder Judicial regirían sólo en la medida que no se opusieran a las atribuciones de los comandos militares de dictar bandos y crear tribunales especiales⁶⁴. El territorio nacional fue convertido en escenario de la lucha contra la subversión y teatro de operaciones. El nivel de seguridad interna que alcanzó la Argentina en esos años pudo ser calificado por algunos como de "estado de guerra civil fría"⁶⁵.

El ejército tuvo el rol predominante dentro de las Fuerzas Armadas: a lo largo del año 1975 se fueron extendiendo sus competencias, en un primer momento a todo el territorio de la provincia de Tucumán, posteriormente a todo el territorio nacional, y en los últimos meses del gobierno justicialista la policía fue sometida a su mando^{66 67}. Las Fuerzas Armadas fueron asumiendo gran parte del poder real, y el Ejecutivo sentaba

comandantes generales de las Fuerzas Armadas. El presidente de la Nación adoptará, en todos los casos las resoluciones en los actos que originen su funcionamiento".

Mediante el Decreto 2771/75 el Gobierno Nacional suscribía con los gobiernos provinciales acuerdos que significaron la subordinación de las policías provinciales al Consejo de Defensa: "*Visto lo dispuesto por el decreto. 2770 del día de la fecha, y la necesidad de contar también con la participación de las fuerzas policiales y penitenciarias de las provincias en la lucha contra la subversión; ...decreta: Art. 1°-- El Consejo de Defensa, a través del Ministerio del Interior, suscribirá con los gobiernos de las provincias, convenios que coloquen bajo su control operacional al personal y a los medios policiales y penitenciarios provinciales que les sean requeridos por el citado Consejo para su empleo inmediato en la lucha contra la subversión* Por último, en el Decreto 2772/75 se establecía que: "*Vistos los decretos. 2770 y 2771 del día de la fecha y la necesidad de reglar la intervención de las Fuerzas Armadas en la ejecución de operaciones militares y de seguridad, a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país. ... decreta: Art. 1°-- Las Fuerzas Armadas bajo el Comando Superior del presidente de la Nación que será ejercido a través del Consejo de Defensa procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país*".

⁶⁴ Itzcovitz (1985): *Estilo de gobierno y crisis política. (1973-1976)*, p. 60-63.

⁶⁵ Criterio: "*El gobierno militar*". N.º 1376, Año XLIX, 8.IV.76, p. 166.

⁶⁶ Fraga (1988): *Ejército: del escarnio al poder. (1973-1976)*, p. 275-276.

⁶⁷ En diciembre de 1975, el Poder Ejecutivo designó al general Albano Harguindeguy al frente de la Policía Federal y al general Otto Paladino como secretario de Inteligencia del Estado Fraga (1988): *Ibíd.*, p. 236.

continuos precedentes que lo alejaban de las prescripciones constitucionales. Esta política tenía como una de sus principales consecuencias la pérdida del monopolio del uso de la fuerza legítima por parte de las autoridades elegidas democráticamente, y el gobierno peronista perdía legitimidad y eficacia en cada acto, y con ello la estabilidad del régimen político.

Aún antes del mensaje del general Videla de fin de año, que fue decisivo para fijar el límite a la continuidad del gobierno constitucional, ocurrió un nuevo hecho que reflejaba el grado de tensión interna. En diciembre de ese mismo año hubo un levantamiento militar, más específicamente, de un sector de la Fuerza Aérea que estuvo aparentemente desconectado de la intervención del 24 de marzo. Un grupo de la Fuerza Aérea se había sublevado el 18 de diciembre y proponía que el general Videla si hiciese cargo de la Presidencia de la Nación. Este levantamiento fue controlado el 23 de diciembre, y se reemplazó al comandante del arma Brigadier Héctor Luis Fautario por el Brigadier Orlando Ramón Agosti⁶⁸. El Ejército no mostró ninguna señal de apoyo visible a la iniciativa frustrada. Pero este episodio ayuda a describir el panorama de aguda inestabilidad en que se encontraba el régimen democrático hacia fines del año 1975. En el mismo sentido, se puede mencionar lo que fue el último gran operativo del E.R.P. al atacar el Batallón 601 de Monte Chingolo, entre el 23 y 24 de diciembre del mismo año. El ataque guerrillero tuvo por objetivo tomar el Comando donde se almacenaba material militar, pero el intento fue rechazado por las Fuerzas Armadas luego de una noche de enfrentamientos armados.

Una de las últimas acciones del gobierno constitucional para evitar la intervención militar fue el anuncio el 17 de diciembre del adelantamiento de las elecciones generales, que estaban previstas para marzo de 1977, para el 17 de octubre de 1976. Sin embargo, no tuvo efectos, el final del gobierno era visto para la mayoría de los actores de la sociedad civil y de la sociedad política como irreversible⁶⁹.

⁶⁸ Ver la crónica en: La Nación, 19 al 23 de diciembre de 1975. Buenos Aires, Argentina.

⁶⁹ De la revisión de los diarios y revistas de la época encontramos algunas voces (seguramente habrá habido otras) que promovían todavía una solución civil, y que cuestionario, de manera premonitoria, los peligros de la solución militar: la revista Criterio, en su editorial del 11 de marzo de 1976: "¿Cuándo llegaremos a la madurez?" decía "... Sobre algo parece haber consenso: el país no puede seguir siendo gobernado de esta forma, ya que la disolución del Estado, ya operada, sobrevendrá la disolución de la sociedad ... Pero las fuerzas que protagonizarían el eventual golpe de Estado, y la oposición, ¿están en condiciones de afirmar que han hecho todo lo posible para salvar a un régimen que es común a todos los argentinos? Tenemos dudas, entiéndase bien, Nadie a puesto trabas al ejercicio del gobierno, ya que pocos

De la descripción de este contexto, surge que la inseguridad interna y a la situación socioeconómica fueron dos de los principales factores que deterioraron la legitimidad del gobierno peronista, y que abriría las puertas, una vez más, a la intervención militar.

Se observa que las Fuerzas Armadas tomaron el gobierno de la Nación en el medio de una profunda crisis del Estado y de la sociedad, de la economía y de la política, de las instituciones y de los sistemas de partidos, en medio de una carencia de autoridad efectiva. Por el lado de la sociedad civil, Criterio señalaba que: "... es objetivo decir que la intervención militar produjo, al menos en las horas iniciales, un sentimiento generalizado de alivio frente a la presión ominosa de la inseguridad y el estado de guerra fría, para algunos caliente, que viene caracterizando la Argentina de esta década"⁷⁰, ver también la cita inicial en este capítulo del historiador Félix Luna. Potash sostenía de manera análoga que: "... En marzo de 1976, las Fuerzas Armadas volvieron a asumir el control directo del gobierno argentino. Esa fue una medida que todos preveían y que fue recibida con alivio por casi todos los sectores de opinión, inclusive los peronistas, ... Al producirse cada uno de los seis golpes militares, parte de la opinión pública -a veces una parte muy importante- alentó a las Fuerzas Armadas. Dirigentes de prácticamente todos los partidos políticos, sindicalistas y organizaciones empresariales, vieron con buenos ojos, al menos en una ocasión, la destitución de un presidente en ejercicio. La noción de que los partidos políticos argentinos u otros grupos civiles importantes se opusieron sin cesar a los levantamientos militares tiene poca relación con la realidad"⁷¹. Del mismo modo se expresaba Rouquié: "...Si bien la autoridad del ejército fue fuertemente cuestionada entre 1969 y 1974, tenemos la impresión en 1975-1976 de que diferentes grupos sociales y políticos esperan nuevamente la salvación por las armas y confían en

han contado con tanta buena voluntad de sus opositores como éste. Se trata más bien de saber si no habría que salvar al régimen democrático a pesar del peronismo. ... Nos resta explicar por qué la solución militar nos parece indeseable y cargada de peligros. ... 1) En la vida social el recurso a la fuerza debe ser siempre la última ratio. Para nosotros no se han agotado las posibilidades de cambio de régimen. ... 2) Al carecer de legitimidad de origen, la lucha política e ideológica contra la guerrilla se le hará terriblemente dificultosa a un gobierno militar. ... La experiencia enseña que una paz no se asienta sobre el recurso desnudo a la fuerza. 3) La experiencia también enseña que la incursión de las Fuerzas Armadas en política provoca disensiones en su seno. ... 4) Salvo pruebas en contrario, no existe en el país una creencia compartida en otro principio de legitimidad que el democrático, lo que llevará a la constitución de un gobierno, no de un régimen. El golpe es el típico expediente de corto plazo que desemboca a los dos o tres años en un callejón sin salida. ... 5) Dados los apoyos sociales y políticos previsibles del golpe militar, hay altas probabilidades de que en el gobierno prevalezca una mentalidad reaccionaria". Criterio: El peronismo gobernante y la guerra interna (1973-1976), p. 143-146.

⁷⁰ Criterio: El gobierno militar. Ibíd., p. 166.

⁷¹ Potash (1982): El Ejército y la política en la Argentina. 1945-1962. De Perón a Frondizi, p. 506-507.

los militares"⁷². O'Donnell en un trabajo de campo realizado entre los años 1977 y 1978, encontró entre los entrevistados el apoyo al "orden" que ofrecieron los militares frente al "caos" de los años previos: *"Pero no bastaba, no hubiera bastado jamás; ni aún con el pathos autoritario, éstos hubieran llegado a controlar tan capilar y prolija y detalladamente tantos comportamientos. Para que eso ocurriera hubo una sociedad que se patrulló a sí misma: más precisamente, hubo numerosas personas -no sé cuántas, pero con seguridad no fueron pocas, que, sin necesidad "oficial" alguna, simplemente porque querían, porque les parecía bien, porque aceptaban la propuesta de ese orden que el régimen -victoriosamente- proponía como única alternativa a la constantemente evocada imagen de "caos" pre-1976, se ocuparon activa y celosamente, de ejercer su propio pathos autoritario ... No es fácil ni simpático plantear esta cuestión, pero me parece que la cuestión de la democracia -en la Argentina, como en todo caso pasado y futuro donde semejante atrocidades han sido cometidas- también pasa por el doloroso momento de reconocer que no hubo solo un gobierno brutalmente despótico, sino también una sociedad que durante esos años fue mucho más autoritaria y represiva que nunca -y que no fueron pocos los que determinaron que así fuera. Igual que con los muertos y los desaparecidos, estos microhorrores sólo pueden ser ignorados pagando el precio -individual y colectivo- de toda negación: no poder mirarnos en el espejo de lo que somos y, por lo tanto, fugarnos de la posibilidad, dolorosa pero creativa, de reformular identidades y valores que eviten la repetición de nuestros lados más destructivos"*⁷³.

⁷² Rouquié (1986): Poder militar y sociedad política en la Argentina. Buenos Aires, p. 419.

⁷³ O'Donnell (1984): Democracia en Argentina. Micro y macro, p. 17.

Parte II.: LAS FASES DEL RÉGIMEN AUTORITARIO

Retornando a la definición de régimen autoritario de Linz, buscaremos identificar en el régimen militar argentino cuatro de los elementos teóricos expuestos por el autor: la estructura del régimen, los actores de coalición dominante, el rol de la movilización/desmovilización, y el tipo de mentalidad.

3. La instauración de los militares en el poder:

Las Fuerzas Armadas tomaron el gobierno de la Nación ocupando el Estado con una intensidad no registrada en experiencias anteriores.

A través del Comunicado Nº 1 la Junta Militar informaba: *“Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las FF.AA. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones”*⁷⁴.

Entre el 24 y el 31 de marzo se promulgaron los instrumentos normativos que establecieron el propósito y los objetivos de la intervención. Se reglamentó el funcionamiento de los distintos poderes del Estado. Se fijaron las jerarquías institucionales entre los distintos estamentos del gobierno, colocando a la Junta Militar en el poder supremo de la Nación, y manteniendo la institución presidencial con recorte en sus funciones.

En el momento de asumir, los militares decretaron la caducidad de los mandatos del presidente de la Nación y de los gobernadores de las provincias, determinaron el cese de las autoridades federales y municipales, destituyeron a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al procurador general, al procurador del Tesoro, declararon en “comisión” a todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, y de los poderes judiciales de todas las provincias. El gobierno militar decidió la suspensión de la actividad de los partidos políticos, la actividad gremial de los sindicatos, de los empresarios y de los profesionales. Oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas

⁷⁴ Comunicado Nº 1 de la Junta Militar, 24 de marzo de 1976.

-en actividad o en situación de retiro- ocuparon los distintos organismos del Estado: ministerios, secretarías, directorios de empresas públicas, cargos gerenciales. Militares y civiles fueron designados al frente de las gobernaciones provinciales y de las municipalidades en todo el país.

3.1. Las normas institucionales de gobierno:

Las Fuerzas Armadas hicieron conocer a la sociedad el conjunto de instrumentos jurídicos que constituyeron el esqueleto legal del nuevo régimen⁷⁵.

El primero de los documentos básicos fue la "Proclama" con los fundamentos la intervención: *"Agotadas todas las instancias del mecanismo constitucional, superadas las posibilidades de rectificaciones dentro del marco de las instituciones y demostrada en forma irrefutable la imposibilidad de la recuperación del proceso por sus vías naturales llega a su término una situación que agravia a la Nación y compromete su futuro. Nuestro pueblo ha sufrido una nueva frustración. Frente a un tremendo vacío de poder, capaz de sumirnos en la disolución y en la anarquía; a la falta de convocatoria que ha demostrado el gobierno nacional; a las reiteradas y sucesivas contradicciones evidenciadas en la adopción de medidas de toda índole; a la falta de una estrategia global que, conducida por el poder político, enfrentara a la subversión; a la carencia de soluciones para los problemas básicos de la nación, cuya resultante ha sido el incremento permanente de todos los extremismos; a la ausencia total de los ejemplos éticos y morales que deben dar quienes ejercen la conducción del Estado; a la manifiesta irresponsabilidad en el manejo de la economía, que ocasionara el agotamiento del aparato productivo; a la especulación y corrupción generalizadas; todo lo cual se traduce en una irreparable pérdida del sentido de grandeza y de fe; las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de una obligación irrenunciable, han asumido la conducción del Estado"*⁷⁶.

El segundo documento fue el "Acta para el Proceso de Reorganización Nacional", por medio de la cual los tres comandantes se hacían cargo del gobierno y resolvían: "1. Constituir la Junta Militar con los comandantes generales de las Fuerzas Armadas de la Nación, la que asume el poder político de la República. 2. Declarar caducos los mandatos del presidente de la Nación Argentina y de los gobernadores y vicegobernadores de las

⁷⁵ En el anexo se detalla la legislación consultada de los años 1974 a 1983.

⁷⁶ Proclama.

provincias. 3. *declarar el cese en sus funciones de los interventores federales en las provincias al presente intervenidas, del gobernador del territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y del intendente municipal de la ciudad de Buenos Aires.* 4. *Disolver el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, la Sala de Representantes de la ciudad de Buenos Aires y los consejos municipales de las provincias u organismos similares.* 5. *Remover a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al procurador general de la Nación y a los integrantes de los tribunales superiores provinciales.* 6. *Remover al Procurador del Tesoro.* 7. *Suspender la actividad política de los partidos políticos a nivel nacional, provincial y municipal.* 8. *Suspender las actividades gremiales de trabajadores, empresarios y de profesionales.* 9. *Notificar lo actuado a las representaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país y a los representantes argentinos en el exterior, a los efectos de asegurar la continuidad de las relaciones con los respectivos países.* 10. *Designar, una vez efectivizadas las medidas anteriormente señaladas, al ciudadano que ejercerá el cargo de presidente de la Nación.* 11. *Los interventores militares procederán en sus respectivas jurisdicciones por similitud a lo establecido para el ámbito nacional y a las instrucciones impartidas oportunamente por la Junta Militar*"⁷⁷.

El tercer documento fue el "Acta fijando el propósito y los objetivos básicos para el Proceso de Reorganización Nacional": *"...Restituir los valores esenciales que sirven de fundamento a la conducción integral del Estado, enfatizando el sentido de moralidad, idoneidad y eficiencia, imprescindibles para reconstruir el contenido y la imagen de la Nación, erradicar la subversión y promover el desarrollo económico de la vida nacional basado en el equilibrio y participación responsable de los distintos sectores a fin de asegurar la posterior instauración de una democracia republicana, representativa y federal, adecuada a la realidad y exigencias de solución y progreso del pueblo argentino*"⁷⁸.

El cuarto instrumento jurídico fue el "Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar, Poder Ejecutivo Nacional y Comisión de Asesoramiento Legislativo"⁷⁹, que establecía la integración de los órganos de gobierno, la forma de elección de sus

⁷⁷ Acta para el Proceso de Reorganización Nacional.

⁷⁸ Acta fijando el propósito y los objetivos básicos para el Proceso de Reorganización Nacional.

⁷⁹ Reglamento para el funcionamiento del Proceso de Reorganización Nacional.

titulares, el tiempo de mandato, los mecanismos de sucesión, las jerarquías. Y, adicionalmente, fijaba el procedimiento para la formación y sanción de las leyes.

El quinto documento fue el "Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional"⁸⁰, que fijaba: a) las facultades de la Junta Militar para la designación y remoción del presidente de la Nación, y sus atribuciones, b) las funciones para la Comisión de Asesoramiento Legislativo (C.A.L.), c) el mecanismo para la designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del procurador general de la Nación, del fiscal general de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, de los gobernadores provinciales, y de los jueces de los tribunales inferiores provinciales.

Los militares subordinaron la Constitución Nacional a los instrumentos jurídicos creados por el mismo régimen militar. El Estatuto establecía que: *"... Los gobiernos nacionales y provinciales ajustarán su acción a los objetivos básicos que fijó la Junta Militar, al presente Estatuto y a la Constitución Nacional y provinciales en tanto no se opongan a aquellos"*⁸¹, los primeros cumplieron la función de la norma condicionante, y la Constitución Nacional se convirtió en la norma condicionada al cumplimiento de los objetivos que se había trazado el Proceso de Reorganización Nacional⁸².

La arquitectura expuesta muestra la intención de las Fuerzas Armadas de fundar un verdadero régimen político, compuesto por un conjunto de reglas de organización, distribución y sucesión en el poder. Las Fuerzas Armadas profundizaron su participación institucional si se compara con experiencias anteriores⁸³; en estas últimas, los militares se limitaban al ejercicio del gobierno hasta que, por diversos mecanismos, buscaban encontrar una salida civil o a tutelar gobiernos democráticos.⁸⁴ Según el diagnóstico político de los militares, el país vivía en una situación de vacío de poder, la autoridad

⁸⁰ Boletín Oficial del 31 de marzo de 1976. Buenos Aires, Argentina.

⁸¹ Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional: *Ibíd.*, Artículo 14.

⁸² Groisman, Enrique (1983): Poder y derecho en el Proceso de Reorganización Nacional.

⁸³ Flóres hace la siguiente distinción: *"... El salto cualitativo entre gobierno y sistema militar suele estar dado por el modo como los militares ejercen el poder en un régimen militar: el grado en que el personal militar ocupa otras estructuras -empresas, burocracias, sindicatos- y hasta qué punto, en cuanto organismo corporativo, los militares dirigen los asuntos nacionales. ... Entre "sostén" militar y la ocupación del Estado hay grados, pero de pronto hay un cambio de naturaleza del régimen. si como quiere Huntington, poder civil quiere decir "gobierno efectivo sobre los militares", régimen militar implica control de la sociedad civil a través del gobierno militar del Estado"*. Flóres (1981): La subordinación militar y la "civilización del poder, p. 89-113.

⁸⁴ Flóres (1988): La transición hacia la democracia pluralista, p. 175-220. Cavarozzi (1983): Autoritarismo y democracia (1955-1983). Bertín y Moiso (1988): Elementos para la interpretación de lo militar en la sociedad argentina (1955-1983), p. 22-31.

constitucional era incapaz de controlar la subversión y, paralelamente, era acusada de irresponsable en el manejo de la economía, por la especulación, y por la corrupción generalizada que existía en esos tiempos. Las Fuerzas Armadas se presentaban a la sociedad como las portadoras del orden frente al caos, con una mentalidad (más que ideología) de restauración.

De la lectura de los documentos fundantes del régimen militar se puede distinguir la búsqueda de tres tipos de legitimidad⁸⁵: en primer lugar, pretendían erigir la legitimidad de origen a partir de la situación de emergencia existente al momento de la intervención, una legitimidad de tipo político-situacional, a través de la lucha contra la subversión. En segundo lugar, buscaban la legitimidad de medios restaurando el orden, poniendo fin al populismo, y desarticulando su matriz socioeconómica. Y aspiraban a la obtención de la legitimidad de fines con la consolidación de un nuevo régimen político democrático tutelado, sin plazos.

3.2. La estructura de poder:

La Junta Militar detentó el poder supremo de la Nación⁸⁶, sus funciones fueron la de supervisar el cumplimiento de los objetivos y las políticas del Proceso, nominar y remover al presidente de la Nación, "*... cuando por razones de Estado lo considere conveniente...*"⁸⁷. Se reservaron algunas funciones que la Constitución Nacional le confiere al Poder Ejecutivo, como son⁸⁸: la comandancia de todas las fuerzas armadas, su organización y disposición, la declaración de guerra, y la declaración del Estado de sitio. Retuvieron algunas de las atribuciones que la Constitución Nacional le concede al Poder Legislativo, como son⁸⁹: proveer la seguridad en las fronteras, establecer tribunales inferiores a la Suprema Corte de Justicia, concertar tratados internacionales. La Junta designaba a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,

⁸⁵ Floria y García Belsunce (1988): Historia política de la Argentina contemporánea. 1880-1983, Cap. III. Spitta (1983): El "Proceso de Reorganización Nacional" de 1976 a 1981: los objetivos básicos y su realización práctica, p.173-200.

⁸⁶ Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional: Ibíd., Artículo 1. La primera Junta Militar estuvo integrada por el teniente general Jorge R. Videla, el almirante Emilio E. Massera y el brigadier general Rolando R. Agosti.

⁸⁷ Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional: Ibíd. Artículo 2.

⁸⁸ Constitución de la Nación Argentina: Segunda parte (autoridades de la Nación); Título primero (Gobierno Federal); Sección segunda (Poder Ejecutivo); Capítulo III (Atribuciones del Poder Ejecutivo); Artículo 86; Incisos 15, 17, 18 y 19.

⁸⁹ Ibíd., Segunda parte (autoridades de la Nación); Título primero (Gobierno Federal); Sección primera (del Poder Legislativo); Capítulo IV (atribuciones del Congreso); Artículo 67; Incisos 21, 22, 23, 24, 25 y 26).

procurador general de la Nación, fiscal general de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, y se auto adjudicaron la facultad de proseguir juicio político a los magistrados⁹⁰.

Debajo de la Junta Militar, se encontraba el presidente de la Nación, designado por la Junta entre los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, en la práctica los cuatro presidentes del Proceso pertenecieron al Ejército. Si bien el presidente conservaba parte de las atribuciones que le confería la Constitución Nacional en el artículo 86⁹¹, la Junta Militar le impuso una restricción sutil pero importante, no era el Jefe Supremo de la Nación, su figura quedó restringida a la de administrador general del país. La Junta Militar delegó las facultades legislativas de la Constitución de la Nación⁹² en el Poder ejecutivo, que estuvo asistido por la Comisión de Asesoramiento Legislativo (C.A.L.), integrada por nueve oficiales, tres por cada arma⁹³. El presidente nombraba a los jueces de los tribunales inferiores de la nación, a los gobernadores de provincias⁹⁴, y éstos a los jueces provinciales⁹⁵. Respecto a los gobernadores el Estatuto establecía que: *"... El Poder Ejecutivo nacional proveerá lo concerniente a los gobiernos provinciales y designará a los gobernadores, quienes ejercerán sus facultades conforme a las instrucciones que imparta la Junta Militar"*⁹⁶.

3.3. La "división de poderes" dentro del régimen autoritario:

Los militares implementaron la "división de los poderes" dentro del régimen autoritario entre el ejército, la marina y la aeronáutica, y en los restantes organismos del Estado. La sesión de la Junta Militar requería la presencia de la totalidad de sus miembros (o los suplentes previstos legalmente). Las decisiones las adoptaban por simple mayoría, excepto cuando se tratase de la elección o remoción del presidente de la Nación para lo que se requería unanimidad⁹⁷. Sin embargo, en la práctica, sustituyeron el criterio de

⁹⁰ *Ibíd*: Segunda parte (autoridades de la Nación); Título primero (Gobierno Federal); Sección primera (del Poder Legislativo); Capítulo I; Artículo 45 y Capítulo II (del Senado); artículos 51 y 52.

⁹¹ Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional: *Ibíd.*, artículo 4.

⁹² *Ibíd.*, artículo 5.

⁹³ *Ibíd.*, artículo 5.

⁹⁴ *Ibíd.*, artículos 9 y 12.

⁹⁵ *Ibíd.*, artículo 13.

⁹⁶ *Ibíd.*, artículo 12.

⁹⁷ Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar: I. Junta Militar, 1.3. Funcionamiento, 1.3.6. Métodos de trabajo.

simple mayoría por el de unanimidad, y en los temas que no era posible alcanzarla se postergaba el tratamiento del tema o la resolución del problema⁹⁸.

La segunda característica para destacar es el establecimiento de la doble vía jerárquica para la toma de decisiones administrativa-burocrática⁹⁹¹⁰⁰: por un lado, los funcionarios militares dependían de su superior administrativo, que podía o no ser de su arma; por otro lado, existía la dependencia jerárquica en la cadena de mandos del arma respectiva. Por lo tanto, en el proceso de toma de decisiones se producía un hecho singular: la existencia simultánea dos instancias con lógicas diferentes¹⁰¹; en éstas se establecían acuerdos particulares, aislados y, a menudo, contrapuestos que aumentaron la fragmentación del poder y disminuyeron la eficacia decisional¹⁰².

El tercer elemento estuvo vinculo a la actividad de mediación con la sociedad civil. Como fue señalado, se suspendieron todas las actividades políticas partidaria, sindical, empresarial, de las asociaciones de profesionales, y se intervinieron las universidades nacionales¹⁰³. La eliminación de las distintas instancias de representación de los intereses sectoriales, y los mecanismos de negociación, coordinación y control que unen a la sociedad civil con el Estado, tuvo por objetivo la constitución de una comunidad sin lugar para el "contrato social"¹⁰⁴. Sin embargo, subsistieron algunos miembros y

⁹⁸ Fontana indica que: "... El pacto corporativo que entablaron las tres fuerzas armadas en 1975 implica en primer lugar el compromiso de subordinar tanto las diferencias política-ideológicas internas como la competencia institucional entre los miembros de la corporación militar al mantenimiento de la unidad del gobierno y la institución militar. En segundo término, el pacto implica que -para preservar la ansiada unidad interna- las tres fuerzas participan directa e igualitariamente en el ejercicio del poder político, supeditando las decisiones de mayor trascendencia al acuerdo unánime de aquéllas. Pero de este modo se establece una relación entre las tres fuerzas armadas y entre ésta y el gobierno que en la práctica lo que se subordina en favor de la preservación de la unidad interna no son los intereses y puntos de vista de cada uno de los miembros de la corporación militar, sino las decisiones de gobierno, sus tiempos decisionales y su relación con las demandas, necesidades y oportunidades de acción en el terreno de la vinculación entre Estado y sociedad civil." Fontana, Andrés (1986): De la crisis de Malvinas a la subordinación condicionada: conflictos intra militares y transición política en Argentina, p. 2-6. y Landi, Oscar (1982): Conjeturas políticas sobre la Argentina post-Malvinas, p. 1225-1231.

⁹⁹ Groisman, Enrique (1985): El sistema jurídico argentino frente a las secuelas del "Proceso de Reorganización Nacional", p. 213-225.

¹⁰⁰ García Delgado, Daniel y Stiletano, Marcelo (1988): La participación de los militares en los nuevos autoritarismos, p. 53-86.

¹⁰¹ Landi, Oscar (1988): La crisis del Proceso como colapso, p. 26-27.

¹⁰² Ver: Oszlak, Oscar (1984): Proceso, crisis y transición democrática /1, p. 31-35. Cavarozzi, Marcelo (1983): Autoritarismo y democracia (1955-1983), 60-68. Lechner, Norberto (1982): El proyecto neoconservador y la democracia, p. 21-28

¹⁰³ Acta para el Proceso de Reorganización Nacional, puntos 7 y 8. Ver en el apéndice las leyes dictadas a estos efectos.

¹⁰⁴ Oszlak señala que: "... En tales condiciones, Estado y ciudadanía se escinden. La sociedad pierde su capacidad de participación en la formación del poder, en la recreación de la escena política y en el control

sectores de la sociedad civil, como los movimientos en defensa de los derechos humanos, que lograron “cruzar el muro” levantado por el régimen militar y demandaron, desde el comienzo mismo del Proceso, por las consecuencias de la lucha contra la subversión en los ámbitos local e internacional.

El cuarto elemento fue el manejo de los tiempos “de lo político” o de la salida del régimen militar: “... *El Proceso se desarrollará mediante la ejecución de tres fases, sin solución de continuidad ni lapsos de duración preestablecidos, las que se concentrarán a través de la consecución de los respectivos objetivos.*”¹⁰⁵. Se decía, con frecuencia, que “*el Proceso tiene objetivos, pero no tiempos*”. Por ello, si bien en “la letra” el Proceso podía ser considerado como un régimen de transición, en la práctica tuvo la intención de constituir un verdadero régimen político de tipo autoritario¹⁰⁶. La “adaptación” de los tiempos decisionales a los intereses y a los proyectos personales influyó sobre el accionar militar, y sobre eficacia de la gestión de gobierno, base de la legitimidad de medios de cualquier régimen político.

Las características descritas permiten encuadrar a este régimen político en el tipo burocrático-autoritario, dirigido por militares no carismáticos y civiles subordinados, con adhesiones de una parte de la dirigencia de los sectores agropecuarios, industriales y financieros, de la jerarquía de la iglesia católica, con la exclusión de la dirigencia política y sindical, y con la oposición temprana de la parte de la sociedad civil nucleada en el movimiento de derechos humanos¹⁰⁷. Estuvieron orientados programáticamente dentro de los límites de la mentalidad burocrática-militar, sin disponer del entramado corporativo propio de los *corporativismos autoritarios*, ni de un partido político capaz de concitar movilizaciones de la sociedad civil como en los *regímenes autoritarios de movilizaciones de la sociedad posdemocrática*¹⁰⁸.

democrático del Estado. Y el Estado pierde su capacidad de regular las consecuencias potencialmente disruptivas del funcionamiento de una sociedad económicamente salvaje. El poder único se vuelve poder solitario, frente a una sociedad donde la ley de la selva y el “salvarse como fuere” se convierten en principios dominantes de conducta social.” Oszlak, Oscar (1984): Privatización autoritaria y recreación de la escena pública, p. 13-30.

¹⁰⁵ San Martino de Dromi, María Laura (1988): Historia política argentina. (1955-1988): Tomo II, p. 126.

¹⁰⁶ También fue definida como una autocracia colegiada: Flóres, Carlos y César García Belsunce (1988): *Ibíd.*, Cap. 3.

¹⁰⁷ O'Donnell (1972): Modernización y autoritarismo, p 100-117.

¹⁰⁸ O'Donnell (1972), *Ibíd.* Collier 1973 (1985): Visión general del modelo burocrático autoritario, p. 29-38. Morlino (1988): Los autoritarismos, p. 148-151.

4. La trayectoria del Proceso de Reorganización Nacional:

En el capítulo 3 hemos presentado las etapas o fases que tendría la intervención militar del '76, tal como fue definido en el Documento "Bases para la intervención por las Fuerzas Armadas"¹⁰⁹: asunción del control, reordenamiento institucional, y consolidación. En este sentido similar, el presidente Videla en sus discursos anunciaba las etapas a través de las cuales se transformaría la realidad nacional. La primera, denominada reordenamiento básico, la entendía como: *"... una etapa necesaria para superar el caos reinante. Fue la respuesta imperiosa y necesaria que las Fuerzas Armadas dieron ante una situación que requería ocupar el vacío de poder, promover urgentemente la lucha contra la subversión, ..., desterrar la corrupción reinante, poner en marcha el aparato productivo, restablecer la disciplina social y posibilitar un justo y adecuado equilibrio entre los sectores de nuestra comunidad"*¹¹⁰. Posteriormente, caracterizaba la segunda etapa que seguiría a la consolidación y creación, y la denominaba fundacional: *"... la que consistirá en la instalación de un régimen verdaderamente democrático, el cual, conservando sus esencias, deberá dar lugar a "un sistema institucional" dentro del cual el gobierno que sea su consecuencia refleje la presencia y aspiraciones conjugadas de las Fuerzas Armadas y de los sectores políticos y sociales"*¹¹¹. Finalmente, se fijaban el propósito y los objetivos de la intervención militar, y se distinguían las siguientes metas políticas: *"la de erradicar la subversión, la de promoción del desarrollo económico de la Nación, y de la de instauración de una democracia republicana, representativa y federal"*¹¹².

A partir de estos enunciados, podemos apreciar tres grandes líneas de política trazadas por la intervención militar¹¹³: la primera de ellas se refería a la política de seguridad interna, y tenía por objetivo el combate a la subversión. La segunda línea de acción estaba constituida por la política económico-social para transformar la estructura económica y social, reestablecer la disciplina social, y poner fin al populismo. La política

¹⁰⁹ San Martino de Dromi, María Laura (1988): *Ibíd.*, p. 196

¹¹⁰ "Clarín", enero de 1977, Buenos Aires, Argentina

¹¹¹ *Ibíd.*

¹¹² *Ibíd.*

¹¹³ La cronología de los principales acontecimientos durante los primeros tres años y medio del Proceso se puede seguir en los tres tomos de la obra de Troncoso: el primero abarca el primer año de marzo de 1976 a marzo de 1977, el segundo volumen se extiende desde abril de 1977 a junio de 1978, y el último cubre desde julio de 1978 a octubre de 1979. Troncoso: El Proceso de Reorganización Nacional/1 /2 y /3.

institucional consistió en diagramar, programar, ejecutar y controlar la salida del Proceso de Reorganización Nacional hacia una democracia tutelada por las Fuerzas Armadas, tal como se desprende del objetivo anunciado en la denominada etapa fundacional recién expuesto¹¹⁴.

El análisis la eficacia empírica de estas políticas la vincularemos con tres fases de la trayectoria del Proceso¹¹⁵: en la primera de ellas, denominada reactiva, el poder militar intentó eliminar a los adversarios del régimen anterior, desarticulando la sociedad precedente, y el elemento central fue la represión. La segunda, llamada fundacional, el régimen militar implementó un conjunto de políticas en las áreas económica, social, institucional y política para superar la matriz social e institucional del régimen precedente. En la tercera etapa buscaremos reflejar los factores y elementos que anunciaron la crisis del régimen y su salida.

4.1. La eliminación de la subversión:

La lucha contra la subversión fue uno de los pilares más importantes con que los militares concibieron la intervención para alcanzar el objetivo de restaurar el orden. Las Fuerzas Armadas dividieron sus responsabilidades operativas en zonas geográficas, en las que cada fuerza tenía autonomía respecto a las demás. Si bien la política de seguridad, según la Constitución Nacional, dependía del presidente de la Nación, a partir de marzo de 1976 quedó subordinada a la Junta Militar. El Ejército fue la fuerza que tuvo mayor influencia y responsabilidad en la lucha contra la subversión, seguido por la Marina y la Aeronáutica. Los problemas de coordinación y control que se derivaron de la fragmentación de la política de seguridad se vieron profundizados por una acentuada tendencia hacia la feudalización de los centros de represión y a su autonomía¹¹⁶. En este

¹¹⁴ Garretón reflexiona en un sentido similar: "... La primera de tipo reactiva o defensiva, cuyo núcleo es el rasgo represivo, busca desarticular la sociedad precedente, especialmente la matriz de constitución de los sujetos sociopolíticos en cada sociedad. La segunda de tipo transformadora o fundacional que aspira a la reorganización de la base material de la nación, la estructura institucional y la creación de un nuevo orden sociopolítico, todo ello a través de alguna forma de capitalismo "moderno" y reinsertó en el sistema internacional. Hay aquí la búsqueda de una nueva matriz de constitución de sujetos sociopolíticos". Garretón, Manuel (1984): Proyecto, trayectoria y fracaso de los regímenes militares en el Cono Sur: Un balance, p. 5-23.

¹¹⁵ Garretón, Manuel A. (1984): Proyecto, trayectoria y fracaso de los regímenes militares en el Cono Sur: un balance, p. 5-23.

¹¹⁶ Criterio mostraba su preocupación: "... la política de seguridad, según la vieja norma constitucional, debería estar subordinada al presidente. El poder reside en la Junta Militar de cuyos integrantes dependen varias "regiones de seguridad integradas por las fuerzas conjuntas de las tres armas y de la policía. Las manifestaciones de este sistema de seguridad son variadas y contradictorias. La opinión pública ignora

sentido, y como un reflejo de la existencia de centros de poder diferenciados, que actuaban simultáneamente, se pueden recordar distintos episodios que confirmaban la desconexión de la cúpula de episodios particulares^{117 118}. La intensidad de la represión militar fue otra de las características específicas del Proceso en comparación con las intervenciones militares previas¹¹⁹.

La respuesta desde la sociedad civil estuvo claramente liderada por las organizaciones defensoras de los derechos humanos¹²⁰, muchas veces en soledad. Las denuncias de estas organizaciones¹²¹ tuvieron escaso eco interno. La prensa local, en general, no tomó de manera constante el tema de las denuncias de violaciones a los derechos humanos en sus ediciones diarias con excepciones, como el diario "Buenos Aires Herald"¹²² o, a nivel individual, periodistas como Magdalena Ruiz Guiñazú, James Nielson y Rodolfo Walsh¹²³. El comportamiento de la jerarquía de la Iglesia Católica fue controversial, por

quién es la autoridad de aplicación; a quién corresponde intervenir para sancionar, proteger o prevenir; a quiénes hay que dirigirse solicitando amparo ante una detención, ausencia o desaparición. ... Parece claro que esta circunstancia podría configurar la imagen de un Estado fragmentado donde la política de seguridad se feudaliza, ... sin control y subordinación de la coacción a la autoridad política no hay fuerza pública sino violencia privada". Criterio: Ganar la paz, N.º 1742, Año XLIX, p. 324.

¹¹⁷ Ver: Floria y García Belsunce (1988): *Ibíd.*, p. 243. Y Criterio: La desmesura del odio, N.º 1744, Año XLIX, p. 390.

¹¹⁸ Criterio: Ganar la paz. *Ibíd.*, señalaba: "... Conviene tener presente que la dispersión del poder puede retrotraer una comunidad nacional hasta etapas previas a la constitución del Estado". p. 324.

¹¹⁹ Rouquié sostiene que el régimen militar "... instaura el terror descentralizado como sistema de gobierno o, al menos, instaura una represión política sin precedentes por su amplitud y técnicas ...". Rouquié (1982): El poder militar en la Argentina de hoy: cambio y continuidad, p. 65-76.

¹²⁰ En Argentina existían ocho organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos que tuvieron un rol activo, tanto en el ámbito nacional como internacional para difundir lo que estaba ocurriendo, para reclamar la aparición con vida de los desaparecidos, y para buscar el cese de las trágicas consecuencias de esta política de represión interna: la Liga Argentina por los derechos del hombre creada en 1937, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) fundado en 1975 (presidido por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) constituida en 1975, poco antes de la intervención militar, el Movimiento Ecuaménico por los Derechos Humanos fundado en febrero de 1976 con la participación de religiosos y laicos (Iglesia Católica, Obispado de Quilmes, Iglesia Valdense, Iglesia Evangélica Luterana Unida, Iglesia Evangélica Metodista Argentina, Iglesia Reformada Argentina, Iglesia Evangélica del Río de la Plata, Iglesia Evangélica Discípulos de Cristo e Iglesia de Dios), la Comisión Nacional de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas creada en 1976, las Madres de Plaza de Mayo nacida el 30 de abril de 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo, organizadas en octubre de 1977, el Centro de Estudios Legales y Sociales (C.E.L.S.) fundado por integrantes de la APDH en mayo de 1980. Ver: Leis (1989): El movimiento de los derechos humanos y la política argentina /1, p. 14-16.

¹²¹ Leis presente en el apéndice documentos emitidos por las organizaciones de derechos humanos durante el Proceso. Leis, (1989): *Ibíd.*, p. 75-124.

¹²² Nielson: ¿Es natural el asesinato?, 12 de octubre de 1976.

¹²³ Rodolfo Walsh distribuyó el 25 de marzo de 1977 en varios medios periodísticos, aunque no fue publicada, su Carta abierta, a un año de la intervención militar, en la que denunciaba las violaciones a los derechos humanos y las consecuencias sociales de la política económica: "Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los Derechos Humanos en que ustedes incurren. En la política

un lado apoyó abiertamente la intervención militar, participó en los actos públicos del gobierno militar, y sus capellanes castrenses estuvieron en los centros clandestinos del gobierno militar¹²⁴, tal como se reveló en el Informe Nunca Más, y en los testimonios de los juicios a las juntas militares durante los dos primeros años de la restauración de la democracia¹²⁵; por otro lado, en pronunciamientos públicos reflejaba la preocupación por las consecuencias de la política de seguridad interna del gobierno militar: en la Asamblea Episcopal realizada entre el 10 y 16 de mayo de 1976, sobre la necesidad de mantener la vigencia de los derechos humanos: "... *sin que ninguna emergencia por aguda que sea autorice a ignorarlos*"¹²⁶, y en mayo de 1977, la Iglesia insistía sobre este tema en la XXXV Asamblea Plenaria de obispos¹²⁷. Los pocos miembros de la jerarquía católica que criticaron abiertamente los abusos y crímenes sobre los derechos humanos durante el gobierno militar fueron: Jaime de Nevares, obispo de la diócesis de Neuquén desde 1961, fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y luego integrante de la CONADEP,

económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada". Walsh (1977): Carta abierta de un escritor a la Junta Militar.

¹²⁴ Floria y García Belsunce señalan que: "El testimonio episcopal no logró neutralizar hechos y metodologías ni tuvo el efecto buscado. Tampoco logró disciplinar comportamientos contradictorios de representantes de un clericalismo de derecha enfrentado a un clericalismo de izquierda que se potenciaron recíprocamente. Así como había capellanes militares los había de la guerrilla". Floria y García Belsunce (1988): Historia política de la argentina contemporánea, p. 244.

¹²⁵ Ver: Nunca más y Diario del Juicio.

¹²⁶ "... *la justificación histórica del proceso que vive nuestro país no sólo se fundamentará por el término que puso a una determinada situación de cosas, sino también por la implementación adecuada de su acción política en la prosecución del bien común de toda la Nación*". En el mismo sentido señala como pecados "... *arrinconar a otro (al hombre) contra el hombre para ganar descontroladamente; asesinar - con secuestro previo o sin él- cualquiera sea el bando del asesinado*". Además, se podría errar "... *si en el afán de obtener seguridades, que deseamos vivamente, se produjeran detenciones indiscriminadas, incomprensiblemente largas, ignorancia sobre el destino de los detenidos, comunicaciones de rara duración, negación de auxilios religiosos. Si con el fin mismo, se suprimiera alguna garantía constitucional, se limitara o postergara el derecho de defensa. ... Si, para evitar los culpables abusos de los medios de comunicación de masas, se optara por la solución simplista de impedirles que digan la verdad necesaria, aunque en algunos casos duela. Si, buscando una necesaria seguridad, se confundiera con la subversión política, con el marxismo o con la guerrilla, los esfuerzos generosos, de raíz frecuentemente cristiana, para defender la justicia, a los más pobres o a los que no tienen voz*". Troncoso (1984): *Ibid.*, p. 24 y 25.- (La frase entre paréntesis es propia).

¹²⁷ "... *ninguna teoría acerca de la seguridad colectiva, a pesar de la importancia de ésta, puede hacer naufragar los derechos de las personas ya que el orden social y el progreso, así como el orden de las cosas debe subordinarse al orden de las personas y no al contrario. ... así como un concepto equivocado de la seguridad personal o social ha llevado a muchas conciencias a tolerar y aún aceptar la violación de elementales derechos del hombre, creado a imagen de Dios y redimido por Cristo; así como ha llevado a admitir la licitud del asesinato del enemigo, la tortura moral o física, la privación ilegítima de la libertad o la eliminación de todo aquello que pueda presumirse que son agresores de la seguridad personal o colectiva, (así se contradice) el principios de Pablo VI: "si quieres la paz, defiende la vida"*". Floria y García Belsunce (1988): *Ibid.*, p. 237-269.

Jorge Novak, obispo de la diócesis de Quilmes desde 1976, también cofundadores del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, junto a Miguel Hesayne, obispo de la diócesis de Viedma desde 1975, a Vicente Faustino Zazpe, arzobispo de la diócesis de Rafaela en 1961, y posteriormente arzobispo adjunto en Santa Fe en 1968, a Enrique Angelelli, obispo de la diócesis de La Rioja desde 1968, asesinado el 4 de agosto de 1976, a Alberto Devoto, obispo de la diócesis de Goya desde 1961, y a Carlos Horacio Ponce de León, obispo de la diócesis de San Nicolás de los Arroyos desde 1966.

El accionar de las organizaciones en defensa de los derechos humanos encontró fuerte respaldo internacional, tanto de organismos como de gobiernos. Éstos, comenzaron una política de reclamo permanente al gobierno local por las violaciones cometidas en la lucha contra la subversión y por las desapariciones de los ciudadanos de sus países que, en ese momento, se encontraban en Argentina: Francia, Italia, Suecia, entre otros. También el gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración de Carter entre los años 1977 y 1981, tuvo una política frontal de denuncia a los excesos cometidos por los militares. El año 1977 marcó el inicio de la escalada de la presión internacional por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Argentina. El 23 de marzo Amnesty International publicó un informe sobre la situación de los detenidos como consecuencia de la lucha contra la subversión en el que se condenaba al gobierno argentino¹²⁸. El 29 de mayo la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) criticaba al gobierno argentino¹²⁹. El 8 de setiembre de 1977, el presidente Videla reconocía, en Washington que: *"... la guerra que libramos contra los delincuentes subversivos ha producido suciedades ... en una guerra "dispersa" como la que las Fuerzas Armadas desarrollaron en Argentina es difícil el control total desde los estratos más altos..."*¹³⁰. Días después, también desde los Estados Unidos, se admitía que: *"... Debemos aceptar como una realidad que en la Argentina hay personas desaparecidas. El problema no está en asegurar o negar esta realidad sino en saber las razones por las cuales esas personas han desaparecido ... Hay varias razones esenciales: han desaparecido para pasar a la clandestinidad y sumarse a la subversión; han desaparecido porque en un*

¹²⁸ Troncoso (1984): *El Proceso de Reorganización Nacional /2. Cronología y Documentación*, p. 101.

¹²⁹ La O.I.T. denunció las *"... detenciones de dirigentes obreros y las violaciones a la libertad sindical. ... Por primera vez se incorpora a la documentación oficial de la O.I.T. una completa lista de dirigentes sindicales detenidos, secuestrados, desaparecidos o a disposición del Poder Ejecutivo en la Argentina, suministradas por distintas centrales sindicales mundiales"*. Troncoso (1985): *Ibíd.*, p. 30.

¹³⁰ Troncoso (1985): *Ibíd.*, p. 61.

enfrentamiento donde ha habido incendios y explosivos, el cadáver fue mutilado hasta resultar irreconocible; y acepto que pueda haber desaparecidos por excesos cometidos en la represión. Esta es nuestra responsabilidad; las otras alternativas no las manejamos nosotros. Y es en esta última, de la que nos hacemos responsables, que el gobierno ha puesto su mayor empeño para evitar que estos casos puedan repetirse"¹³¹. Así, el propio presidente de la Nación fue el que reconocía, de manera implícita, la pérdida del monopolio para controlar la política de seguridad interna. El 21 de octubre, la XXXIII Asamblea General de la Asociación Internacional de Prensa (S.I.P.) se sumaba a las denuncias contra el gobierno argentino¹³². La presión internacional continuó en aumento, hacia fines del '77 el gobierno de los Estados Unidos resolvió la eliminación de los programas de ayuda militar directa a los gobiernos de Argentina, Brasil, Guatemala, El Salvador y el Uruguay, acusados de cometer graves violaciones a los derechos humanos¹³³. En febrero de 1978, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (O.E.A.) informó al gobierno argentino la intención de abrir una investigación sobre el terreno por las denuncias de sistemáticas violaciones a los derechos humanos¹³⁴. En mayo la relación de Argentina con los Estados Unidos se vuelve más compleja ante la decisión del gobierno estadounidense de condicionar los créditos a la Argentina a una mejora en la situación de los derechos humanos¹³⁵. En agosto, la subsecretaria de Estado para Asuntos Humanitarios del gobierno de los Estados Unidos, Patricia Derian, denunciaba ante la Cámara Baja del Congreso la violación a los derechos humanos en la Argentina¹³⁶. Durante el año 1978, entró en vigor la sección 620 B de la Ley de Ayuda Exterior que prohíbe la concesión de créditos vinculados con proyectos de defensa, la venta de casi todo tipo de armamentos y la participación en programas de entrenamiento y capacitación militar, en este caso hacia la Argentina, esta medida fue conocida como la "cláusula Humphrey-Kennedy"¹³⁷. En el año 1980 se conocieron las conclusiones de la Comisión de Derechos Humanos de la O.E.A., en las mismas se afirmó

¹³¹ Troncoso (1985): *Ibíd.*, p. 63.

¹³² La Sociedad Interamericana de Prensa (S.I.P.) afirmaba que: "... *Diarios y reporteros sufren atentados o son encarcelados sin juicio previo en la Argentina, Cuba, Uruguay, Perú, Guatemala y Panamá*". Troncoso (1985): *Ibíd.*, p. 74.

¹³³ Troncoso (1985): *Ibíd.* p. 93.

¹³⁴ Troncoso (1985): *Ibíd.* p. 100.

¹³⁵ Troncoso (1985): *Ibíd.* p. 121-122.

¹³⁶ Troncoso (1989): *El Proceso de Reorganización Nacional/3*, p. 23.

¹³⁷ Troncoso (1989): *Ibíd.* p. 31.

que: *"... por acción u omisión de las autoridades y de sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período que se contrae este informe (1975-1979) numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos"*. En particular, la Comisión consideraba que esas violaciones habían afectado: *"a. el derecho a la vida, debido a que personas pertenecientes o vinculadas a organismos de seguridad del Gobierno han dado muerte a numerosos hombres y mujeres después de su detención, preocupa especialmente a la Comisión la situación de los miles de detenidos desaparecidos, que por las razones expuestas en el informe se puede presumir fundadamente que han muerto. b. El derecho a la libertad personal, al haberse detenido y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a numerosas personas en forma indiscriminado y sin criterio de razonabilidad. c. el derecho a la seguridad e integridad personal, mediante el empleo sistemático de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, cuya práctica ha revestido el carácter de alarmantes. d. el derecho a la justicia y proceso regular, debido a las limitaciones que encuentra el Poder Judicial para el ejercicio de sus funciones, ..."*. En otro párrafo del informe la Comisión advertía sobre importantes limitaciones que existían en Argentina durante esos años sobre *"... a. el ejercicio pleno de la libertad de opinión ...; b. los derechos laborales ...; c. los derechos políticos se encuentran suspendidos; ...* La Comisión observa, asimismo, que, con posterioridad a su visita a la República Argentina, en el mes de setiembre de 1979, habían disminuido las violaciones a los derechos humanos a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personal y al derecho de justicia y que, particularmente, desde el mes de ese año no habían registrado denuncias por nuevas desapariciones de personas."¹³⁸. La Comisión recomendó, por otra parte, investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables de las muertes, informar sobre la situación de los desaparecidos. Sugería la posibilidad de considerar la derogación del estado de sitio, el restablecimiento de los derechos de opinión, expresión e información. A la vez que proponía que el gobierno argentino garantizase los derechos laborales, los derechos políticos de los ciudadanos y restableciese la actividad partidaria. Respecto a la política que tenían los militares con las organizaciones de derechos humanos, la comisión señalaba que: *"... en lo que respecta a las entidades de defensa de los derechos humanos dar garantía y facilidades necesarias para que puedan contribuir a la promoción y observancia de los*

¹³⁸ Para la lectura completa de las conclusiones y recomendaciones del Informe ver su Anexo.

derechos humanos en la Argentina"¹³⁹. El régimen militar reaccionó rechazando el informe y prohibió su difusión completa. En el mismo año 1980, otro hecho de orden internacional contribuía a la denuncia de la situación en la Argentina. Fue la nominación del Premio Nobel de la Paz en favor del arquitecto Adolfo Pérez Esquivel, titular de uno de los organismos defensores de los derechos humanos, el SERPAJ.

Esta situación trágica era, a su vez, ambivalente: en el frente interno el gobierno militar conseguía -en términos generales- mantener oculto el tema de los derechos humanos frente a la opinión pública, y aislaba a las organizaciones locales y a sus políticas. En el orden externo, la situación se invertía, las denuncias de estos mismos organismos fueron acompañada de manera solidaria por gobiernos y centros internacionales que fueron aislando al "Proceso". Sin embargo, el accionar permanente del conjunto de organizaciones nucleadas en torno a la defensa de los derechos humanos y el apoyo internacional recibido impidió que las Fuerzas Armadas pudiesen exhibir los resultados de los enfrentamientos contra la subversión como un logro indiscutido. A medida que el Proceso avanzaba, los partidos políticos y los demás sectores sociales empezaron a tomar como propias las reivindicaciones por las violaciones cometidas. En consecuencia, así como la lucha contra la subversión fue uno de los pilares con el que se pretendió erigir la legitimidad de origen del régimen militar, la metodología empleada y la oposición nacional e internacional contribuyeron a corroerla¹⁴⁰. Como veremos en secciones posteriores, el legado de la lucha contra la subversión se convirtió en uno de los temas no resueltos que heredaría el nuevo régimen democrático.

4.2. La fase fundacional de un nuevo sistema:

En el momento de instalarse en el poder, el gobierno militar tenía dos problemas básicos para resolver: por un lado, debía definir un modelo de crecimiento económico a partir de la transformación de la nueva estructura de relaciones sociales que se proponía

¹³⁹ Ver anexo.

¹⁴⁰ Leis señala que: "... el tema de los derechos humanos no introduce una dificultad sino una discusión sobre la legitimidad del régimen. La lucha antsubversiva fue el fundamento de la legitimidad. Cuestionar los principios éticos que habían orientado la lucha suponía deslegitimizar el régimen". Leis, Héctor (1989): *Ibid.*, p. 10. En sentido similar: Floria (1988): La transición hacia la democracia pluralista. Sonderéguer también considera que el movimiento de derechos humanos buscó siempre corroer el fundamento del accionar del régimen militar en su "guerra" contra el "enemigo interno", apuntando de este modo a cuestionar y descalificar el fenómeno represivo, socavando la legitimidad del gobierno. Sonderéguer (1985): Aparición con vida. El movimiento de los derechos humanos en la Argentina, p. 7-32.

realizar. Por el otro, tenía que elaborar un modelo político a futuro que le permitiese perfilar el sucesor del "Proceso", como régimen político.

El grado de autonomía para realizar estos proyectos fue mayor en las primeras etapas del "Proceso", antes que el desgaste propio del ejercicio del poder condicionase su ejecución. Pero para gobernar o, más específicamente, para resolver los desafíos planteados los militares debían tener definidos los miembros de la coalición dominante cuyo apoyo activo les permitiese llevar adelante las reformas proyectadas. Esta coalición gobernante debía estar integrada por un conjunto de actores que poseyeran la mayoría de los cargos, la influencia y los recursos coercitivos. La coalición de gobierno debía tener, además, el poder para controlar a la oposición interior y exterior al régimen, y mantener desmovilizados a los indecisos. Adicionalmente, tendría la oportunidad de satisfacer a los actores dominantes mediante decisiones beneficiosas que se tomaran en el interior del régimen¹⁴¹.

Ahora bien, ¿es posible definir la coalición de gobierno con que los militares gobernaron la Argentina de esos años? En una primera aproximación, se podría decir que la misma cambió a lo largo de las distintas administraciones. Los miembros más representativos de la coalición de gobierno fueron las propias Fuerzas Armadas. Si bien las Fuerzas Armadas no gobernaron solas, fueron las principales conductoras del "Proceso", y sus decisiones se privilegiaron por sobre las de cualquier otra institución¹⁴². Los militares gobernaron sin los partidos políticos cuya actividad fue expresamente prohibida¹⁴³. Tampoco permitieron la actividad de los sindicatos. En realidad, fueron más allá ya intervinieron la Confederación General del Trabajo (C.G.T.), bloquearon sus fondos, las cuentas bancarias y los bienes patrimoniales¹⁴⁴. Los militares contaron, en cambio, con el apoyo de sectores agremiados del empresariado -financiero, industrial y agropecuario- aunque, con el paso del tiempo, y las consecuencias de las medidas implementadas, las solidaridades se fueron desdibujando. Se trató entonces de

¹⁴¹ Morlino (1981): Del fascismo a una democracia débil. El cambio de régimen en Italia. (1939-1948), p. 93-150.

¹⁴² García Delgado y Stiletano (1988): La participación de los militares en los nuevos autoritarismos, p. 53-86.

¹⁴³ Decreto N.º 6/76. Boletín Oficial del 29 de marzo de 1976.

¹⁴⁴ Ley 21.270/76. Boletín Oficial del 26 de marzo de 1976.

coalición militar con el apoyo del ámbito empresarial, especialmente, el vinculado al capital financiero¹⁴⁵.

En el plano económico, las autoridades del ministerio de Economía -que se autodefinían como liberales- partieron de un diagnóstico que definía a los males de la economía argentina como el resultado de las distorsiones de los precios relativos que introdujo la política de industrialización basada en la sustitución de importaciones, y por el sobredimensionamiento del Estado¹⁴⁶. El objetivo del plan económico del ministro Martínez de Hoz fue transformar la estructura económica, buscando romper la “alianza populista” entre sectores obreros y pequeños y medianos empresarios, que eran en su diagnóstico la columna vertebral del peronismo, y que se constituía en un paso necesario para la transformación completa de la sociedad, evitando el retorno al populismo¹⁴⁷. La estrategia fue abrir la economía mediante la reducción de los aranceles a la importación y la liberalizar el mercado de capitales para permitir el ingreso de capitales desde el exterior. Sin embargo, considerando los instrumentos usados, la apertura de la economía fue entendida como la posibilidad para que productos del exterior pudiesen competir en el mercado interno, y no como la expansión de la producción local hacia los mercados externos¹⁴⁸. El instrumento utilizado fue la política arancelaria, en particular, el descenso en los niveles arancelarios sobre la importación de bienes, el retraso del tipo de cambio, que actuaba a su vez como instrumento estabilizador de precios, y la entrada de capitales financieros de corto plazo, que usufructuaron la diferencia entre la tasa de interés doméstica y la internacional, con el beneficio de un “cuasi” seguro cambiario. Pero, en el corto plazo, pese al poder que tuvo el equipo económico apoyado por el presidente Videla, y con el beneficio que representaba la inexistencia de una oposición sindical que condicionase su proyecto, los problemas persistieron. La inflación fue en todo momento la principal preocupación de las autoridades económicas. El aumento de precios no conseguía eliminarse, lo que motivó que la conducción económica cambiase reiteradamente la estrategia para combatirla, y consumiese gran parte del tiempo disponible. La reforma financiera de 1977 combinó,

¹⁴⁵ Floria (1988): *La transición hacia la democracia pluralista*, p. 175-220.

¹⁴⁶ Canitrot (1981): *La disciplina como objetivo de la política económica. Un ensayo sobre el programa de económico del gobierno argentino desde 1976*, p. 460-462.

¹⁴⁷ La tesis de Canitrot fue que: *“el plan económico aparece como dependiente del proyecto político, pero a la vez como su condicionante”*. Canitrot: *Ibíd.*, p. 464.

¹⁴⁸ Canitrot (1981): *Ibíd.*, p. 468.

al menos, tres políticas: a) liberalización financiera: con la libertad para la fijación de la tasa de interés, con la garantía oficial sobre los depósitos bancarios y la remuneración de los encajes bancarios, conocida como la cuenta de regulación monetaria, más la libertad sobre el movimiento de capitales. b) Política cambiaria: con tipo de cambio preanunciado ("tablita cambiaria"), a niveles inferiores a la inflación real. c) Política de precios: con controles parciales de precios (la "tregua de 120 días anunciada en el mes de marzo, con escaso resultado). La idea de las autoridades era la de "desindexar" la economía, producir la convergencia de precios de los bienes transables locales con los precios internacionales, y de la tasa de interés doméstica con la internacional¹⁴⁹. La "tablita cambiaria" actuaba como instrumento de una política de estabilización de precios porque la devaluación del tipo de cambio era menor que la inflación, pero también como un "seguro" de cambio para los capitales de corto plazo que ingresaban aprovechando el diferencial de tasas de interés domésticas e internacionales, ya que así se "conocía" el precio del tipo de cambio a la hora de "entrar" y a la hora de "salir". En este contexto hubo ingreso de capitales especulativos que retrasó aún más el tipo de cambio, favorecido por la liquidez financiera internacional de esos años¹⁵⁰. El sector financiero fue el más dinámico (beneficiado) en los primeros años del "Proceso", y contrastó con el desempeño del sector agropecuario y, en especial, del industrial, todos ellos habían apoyado la intervención militar¹⁵¹. Sobre la industria local convergieron el impacto de estos instrumentos con consecuencias particularmente negativas: la reducción de los aranceles a la importación de bienes competitivos combinada con el retraso cambiario desalentaban las exportaciones industriales y favorecía las importaciones sustitutivas de los bienes producidos por la industria local, y la elevación de la tasa de interés, que posibilitaba la entrada de capitales especulativos, y retrasaba aún más el tipo de cambio, significó para las empresas nacionales, sin capacidad de autofinanciamiento o de acceso al crédito internacional, costos financieros que en algunos casos determinaron el cierre de los establecimientos. Como consecuencia de estas políticas, las industrias que carecieron de autofinanciamiento se convirtieron en deudoras netas del sector financiero, y en algunos casos fueron los propios grupos

¹⁴⁹ Canitrot (1981): *Ibíd.*, p. 470.

¹⁵⁰ Feldman y Sommer (1986): *Crisis y endeudamiento externo en la Argentina*, p. 65-71..

¹⁵¹ Spitta presenta los siguientes datos: "... en el quinquenio 1976/1980 el sector financiero fue el que registró un mayor crecimiento en el Producto Bruto Interno (P.B.I.) con una tasa de 44.5%, mientras que la industria mostraba un comportamiento negativo y el agro crecía apenas el 5.4% ...". Spitta (1983): *Ibíd.*

financieros los que fueron absorbiendo a grupos industriales¹⁵². En el año 1980, durante la segunda presidencia del general Videla, los elementos latentes de la crisis económica se precipitaron. En marzo quebró el Banco de Intercambio Regional (B.I.R.), con una importante cartera de depósitos en dólares. En abril el Banco Central se hizo cargo del Banco de los Andes (uno de los bancos privados más importantes), intervino al Banco Oddone y al Banco Internacional. También se dispuso la intervención del holding industrial SASETRU. Entre los años 1977 y 1982 el Banco Central de la República Argentina liquidó 103 entidades financieras¹⁵³. Ya en la última etapa del mandato de Videla se hacía evidente el fracaso del programa económico; quizás, paradójicamente, la oposición más grande provenía del seno mismo de la coalición de gobierno¹⁵⁴, el esquema del equipo económico necesitaba de un gasto público menor al que resultó de las decisiones de la conducción militar.

En la figura siguiente se presenta la evolución de las principales variables macroeconómicas durante el Proceso de Reorganización Nacional para confrontarlas con las metas iniciales de transformar la estructura económica, eliminar la inflación y reducir el tamaño del Estado. La gestión económica durante el Proceso no alcanzó ninguno de sus objetivos: el crecimiento económico osciló entre años de aumento del producto bruto interno con años de caída hasta el final del período, su composición interna se destaca la caída del consumo y el aumento de las importaciones. El sector industrial fue el más afectado, en los años 1970 a 1975 había crecido 3,4% promedio por año, y en los años 1975 a 1982 disminuyó 3,3% promedio anual¹⁵⁵. La inflación no logró

¹⁵² Canitrot (1981): *Ibíd.*

¹⁵³ Feldman y Sommer advierten que: *"Corresponde también destacar en este período la gran preponderancia de casos originados en graves irregularidades e ilícitos operativos detectados por los inspectores del Banco Central. Se trataba de los famosos casos en los que los directivos de las entidades colocaban los fondos captados del público con garantía estatal ... en empresas inexistentes, apropiándose de esos fondos a través de la adquisición de bienes no identificables o activos financieros locales o externos"*. Feldman y Sommer (1986): *Crisis y endeudamiento externo en la Argentina*, p. 136 y 142.

¹⁵⁴ Spitta señala que: *"... No es aventurado pensar entonces que la conducta de los altos rangos militares tuvo un efecto paralizante sobre eventuales propósitos de racionalización y privatización de mayor envergadura. Pero hay otro motivo, más de fondo, que probablemente haya influido la pugna entre los "liberales" del ministerio de Economía, partidarios de "achicar el Estado" mediante privatizaciones, y los grupos "nacionalistas" en las Fuerzas Armadas; que se oponían a esos intentos de dismantelar el poderío económico-industrial del Estado. ... Parecía entonces que tendencias antagónicas en el seno del "Proceso de Reorganización Nacional" impedía seguir una política coherente y definida en este ámbito, dejando a la población en la incertidumbre ante los objetivos preconizados en 1976 y una puesta en práctica contradictoria ..."*. Spitta (1983): *El "Proceso de Reorganización Nacional" de 1976 a 1981: los objetivos básicos y su realización práctica*, p. 77-100.

¹⁵⁵ Feldman y Sommer (1986): *Crisis y endeudamiento externo en la Argentina*, p. 117.

ser eliminada, la disminución hacia el año 1980 fue resultado del atraso del tipo de cambio, la liberalización financiera y la disminución de los aranceles a la importación, pero a partir del año 1981 volvió a aumentar terminando en niveles más altos que en sus inicios. Los escenarios de alta inflación de esos años (210% promedio anual entre 1976 y 1983) tuvo como correlato los bajos niveles de “monetización” en moneda local de la economía, el coeficiente M1/PIB fluctuó por debajo del 7% del PIB, y M2/PIB¹⁵⁶ varió en torno a 19% del PIB, ambos con caída en los últimos años del Proceso. El déficit fiscal aumento en forma ininterrumpida desde el año 1977 alcanzando “picos” superiores al 18% del PIB aún antes de la guerra en Malvinas. La variación de los términos de intercambio (precios de las exportaciones respecto al precio de las importaciones) no fueron particularmente adverso, tomando como referencia el nivel del año 1980. El comportamiento de la deuda externa fue explosivo, prácticamente se quintuplicó entre los años 1975 a 1983.

Figura 1. Comportamiento de variables macroeconómicas: 1976-1983

	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Crecimiento (Δ PIB)	-0,5	6,4	-3,4	6,7	0,7	-6,2	-4,6	2,8
Inflación (IPC)	347,5	160,4	169,8	139,7	87,6	131,3	209,7	433,7
Salario real (1974 = 100)	57	62,8	66,4	77,7	96,2	83,2	61,5	81,4
Ocupación (1974 = 100)	100,4	94,3	85,2	83,3	76,8	67,2	63,5	65,7
Déficit fiscal (%PIB)	10,6	5,0	6,7	6,7	8,6	18,0	18,9	17,8
M1/PIB	8,5	7,2	7,7	7,2	7,6	6,1	6,0	5,5
M2/PIB	15,4	17,4	19,5	22,6	22,4	21,0	15,5	16,8
Cuenta corriente (neta intereses) (%PIB)	2,9	3,9	4,9	-0,1	-6,1	-2,7	3,3	3,9
Deuda Externa (miles millones usd)	7,8	9,7	12,5	19,0	27,2	35,6	43,6	45,1
Tipo de cambio (1980 = 100)	46,4	50,7	64,7	83,4	100,0	69,5	48,9	58,5
Término de intercambio (1980 = 100)	95,8	92,7	83,5	88,4	100,0	113,8	98,5	94,1

En suma, la nueva democracia heredaría una situación socioeconómica particularmente adversa: inflación, déficit fiscal, desmonetización, desindustrialización, y la pesada deuda externa.

En el plano político, las indefiniciones en la nominación del sucesor del presidente Videla, así como el inexplicable plazo fijado entre la designación del general Viola en el

¹⁵⁶ M1/PIB billetes y depósitos en cuenta corriente como porcentaje del PIB, M2 = (M1 + depósitos a plazo) / PIB

mes de setiembre de 1980 y la asunción efectiva de la presidencia de la Nación en el mes de marzo de 1981, generó la aparición de un factor de inestabilidad adicional en la economía de esos meses: la incertidumbre. El presidente Viola se hizo cargo de la administración general del país con escaso apoyo de la Junta Militar, característica que se profundizaría a lo largo de su gestión. Sin embargo, su estrategia fue la de buscar un acercamiento con la clase política y el sector industrial nucleado en la Unión Industrial Argentina, pero la falta de apoyo desde el seno de la coalición de gobierno restó credibilidad a este intento. Hacia fines del año 1981 fue desplazado de la presidencia de la Nación por el general Galtieri. El nuevo presidente pretendió hacer retornar al Proceso en "sus" fuentes. En lo económico con la designación del Dr. Roberto Alemán en el ministerio de Economía, y la puesta en marcha de un severo plan de ajuste fiscal. En el ámbito de las relaciones internacionales propiciando una relación más estrecha con el gobierno de los Estados Unidos, particularmente, por medio del apoyo activo a la política del presidente Reagan en Centroamérica. Y en lo político, abandonando la estrategia de su antecesor de acercamiento a los partidos políticos tradicionales, reemplazándola con un intento de impulsar la formación de un partido político que heredase al "Proceso": el Movimiento de Opinión Nacional (M.O.N.). La guerra de Malvinas transformó, completamente, esta situación.

Otro de los problemas que reflejó las numerosas divergencias en el interior de la Junta Militar lo constituyó el frente externo. En especial el conflicto limítrofe que tenía la Argentina con Chile en la zona del Canal de Beagle. El proceso arbitral había comenzado en el gobierno del general Agustín Lanusse y su canciller Pablo Pardo. El 2 de mayo de 1977 la Corte Arbitral de Justicia de La Haya hizo conocer su decisión -unánime- otorgando las islas Picton, Nueva y Lennox a Chile. En el mismo fallo, se limitaba la jurisdicción del Canal de Beagle y con ello la Argentina tuvo aguas navegables propias y acceso libre a Ushuaia. El canciller argentino, César Guzzetti, hizo conocer las reservas con que la Argentina recibía el laudo, dejando constancia que *"ningún compromiso obliga a cumplir aquello que afecte a intereses vitales de la Nación o perjudique directamente la soberanía"*¹⁵⁷. El fallo arbitral fue mal recibido por los militares argentinos; sin embargo se iniciaron contactos con militares chilenos en búsqueda de una solución. El 25 de enero de 1978 el canciller argentino, Oscar Montes, anunció la

¹⁵⁷ San Martino de Dromi: *Ibíd.* p. 261.

decisión del gobierno de declarar su nulidad. El 20 de febrero se reunieron los presidentes de ambos países y se firmó el Acta de Puerto Montt, por la cual se comprometían a mantener conversaciones y no recurrir a la fuerza.

Pero la tensión militar crecía en el frente argentino, particularmente en la Armada bajo la Comandancia de Massera, y en el Ejército impulsada por el ala "dura" de los generales Luciano B. Menéndez y Guillermo Suárez Mason. Las negociaciones no avanzan durante el año 1978, al finalizar el mismo los militares argentinos culminan los aprestos de movilización en las tres fuerzas. San Martino de Dromi señala que una misión secreta de la Cancillería argentina viajó a Estados Unidos, Moscú, el Vaticano y las Naciones Unidas para auscultar la posición internacional sobre el conflicto, y las consecuencias de una posible solución armada. Como resultado de gestiones, y ante la inminencia de un conflicto bélico, el Vaticano designó al Cardenal Agostino Casaroli, que estaba a cargo de los temas internacionales del Vaticano, para iniciar una mediación entre ambos países. El 21 de diciembre el representante papal reunió a los embajadores de Argentina y Chile con el objetivo inmediato de detener todas las acciones prebélicas y recomenzar las conversaciones. El 23 de diciembre la Santa Sede designó al Cardenal Antonio Samoré para esta misión. Si bien las negociaciones avanzaron lentamente, esta nueva instancia permitió que la decisión del inicio del conflicto bélico fuese sacada del seno de la Junta Militar, en la que los "duros" tenían peso propio. A partir de ese momento comenzó una nueva mediación internacional, esta vez con sede en el Vaticano, ámbito difícilmente desafiante por los militares argentinos. El 12 de diciembre de 1980 Juan Pablo II entregó a los cancilleres de los dos países su propuesta de mediación. El gobierno chileno la aceptó el 8 de enero de 1982, mientras que el argentino hizo conocer sus objeciones el 17 de marzo. Las negociaciones continuaron hasta el 18 de octubre de 1984 en que el Vaticano comunicó lo que sería la solución final¹⁵⁸.

En el orden interno, el año 1980 fue el escenario de uno de los enfrentamientos más visibles dentro de las Fuerzas Armadas. En setiembre el general Luciano B. Menéndez se sublevó contra el comandante del Ejército el general Viola esgrimiendo fuertes diferencias en el manejo de la lucha contra la subversión. El "putch" de Menéndez¹⁵⁹

¹⁵⁸ San Martino de Dromi: *Ibíd.*, p. 260-268.

¹⁵⁹ El general Menéndez hizo conocer el mensaje dirigido al titular del Ejército, en el que afirmaba que *"2º) No se ha cumplido el compromiso de erradicar definitivamente la subversión cerrando el camino al surgimiento futuro del marxismo en el país. En cambio, hemos pasado a una situación de condescendencia*

terminó con su relevo y el pase a retiro del general Eduardo Viola, a éste lo reemplazó el general Leopoldo F. Galtieri.

4.3. El modelo institucional "a futuro" de las Fuerzas Armadas:

La realización y puesta en práctica de un modelo político que institucionase la continuidad del "Proceso" hubiese determinado un mayor grado de estabilidad y consistencia a la intervención del 24 de marzo. La existencia de un proyecto institucional real, así como su modo de ejecución deberían haberse convertido en elementos decisivos para su éxito¹⁶⁰.

Ahora bien, ¿tenían las Fuerzas Armadas proyecto institucional concreto? Todo parece indicar que si bien se promulgó un documento oficial con lineamientos para la salida del régimen militar, nunca hubo homogeneidad de criterios para su implementación efectiva¹⁶¹ porque cada miembro de la Junta Militar tenía sus propias aspiraciones de poder, más que proyectos político-institucionales elaborados para una transición a la democracia efectiva¹⁶².

Con respecto a la vida política de la sociedad civil, la Junta Militar fijó una posición que, luego, tendría consecuencias sobre la estabilidad misma del régimen. Como señaláramos anteriormente, entre sus primeras medidas, dispuso la suspensión de la "*... actividad política y de los partidos políticos, en jurisdicción nacional, provincial y municipal, mientras se desarrolle el proceso de recuperación del Estado en todos los*

inadmisibles. 3º) Consideramos que este accionar desvirtúa las razones que impulsaron a nuestros hombres de armas a asumir la responsabilidad de encauzar a la Nación y que hicieron que toda la ciudadanía aplaudiera el proceso que se inauguró el 24 de marzo de 1976. A ese pueblo que nos dio su aval para actuar con energía y firmeza le estamos provocando ahora confusión, desaliento y pérdida de confianza. 4º) Todos estos aspectos son de exclusiva responsabilidad del comandante en jefe ante la Fuerza, constituyendo mi deber como comandante del III Cuerpo de Ejército exigir que esta situación finalice mediante el inmediato alejamiento del cargo del señor teniente general Viola. En caso contrario, el general Viola será el único responsable". El documento completo es presentado en Verbitsky (1987): Medio siglo de proclamas militares, p. 150-151.

¹⁶⁰ Vanossi, advertía en 1977: "*... al analizar intervenciones militares anteriores, que la postergación de las definiciones institucionales fue mellando al propio régimen que las eludía, ... los regímenes de facto argentinos no alcanzaron exitosamente la meta ansiada de la instauración, resolviendo sus expectativas en más o menos disfrazadas restauraciones*". Vanossi (1977): La Constitución de transición, p. 133-166.

¹⁶¹ Vázquez, Enrique (1985): *Ibíd.*, p. 16.

¹⁶² En el mismo sentido, Landi considera que los militares "*... imaginaron la salida de la pendularidad cívico-militar a través de la constitución de una "democracia gobernada" en contraste con una "democracia gobernante". Se trataba de hacer emerger una fórmula institucional que contuviera una serie de centros de decisión ejercida por élites no dependiente de resultados electorales y que dejaran un margen no decisivo para la presencia de representantes del electorado*". Landi (1982): Conjeturas políticas sobre la Argentina post-Malvinas, p. 1225-1247.

niveles y funciones, con el objeto de asegurar la paz interior y la unidad nacional"¹⁶³. También se prohibió todas las actividades del Partido Comunista Revolucionario, Partido Socialista de los Trabajadores, Partido Político Obrero, Partido Obrero Trotskista y Partido Comunista Marxista Leninista; por considerar que *"... la actividad de organizaciones políticas cuyos objetivos son incompatibles con las disposiciones constitucionales que autorizan su existencia"*¹⁶⁴. Posteriormente, esta Ley es derogada con la Ley 21.324/76, y reemplazada con la Ley 21.327/76, que, directamente, declara disueltas a éstas y a otras organizaciones políticas¹⁶⁵. En diciembre de 1977 se sancionó la Ley 21.699/77, que mantuvo la suspensión de la actividad política partidaria dispuesta en el Decreto 6/76, y prorrogó el mandato de las autoridades que hubiesen estado en funciones al 24 de marzo de 1976¹⁶⁶. La actividad de los partidos políticos hasta el año 1978 estuvo reducida a reuniones entre los dirigentes en las que se buscaba más bien la defensa de la supervivencia física de sus miembros o la estructura de los aparatos organizacionales, y la toma de posición sobre temas de la realidad económica y social se hacía de manera aislada¹⁶⁷. El gobierno del general Videla no realizó contactos formales con la dirigencia de los partidos políticos mayoritarios durante el transcurso de su primer período de gobierno. Recién a fines del año 1979, las Fuerzas Armadas presentaron un documento en el que fijaron los contenidos, formas y tiempos que tomaría el proceso de normalización político-institucional del país¹⁶⁸. El documento denominado "Bases políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional" estaba dividido en tres partes centrales: bases doctrinarias, bases programáticas y bases instrumentales. En la introducción se sostenía que: *"El Proceso de Reorganización Nacional carecería de proyecciones históricas y desconocería el propósito al que solememente se comprometió si no iniciara, como lo hace ahora, la etapa de normalización político-institucional..."*. Ya en la parte referida a las Bases Doctrinarias los militares argentinos afirmaban que: *"... Será preciso impulsar simultáneamente un nuevo ciclo de*

¹⁶³ Decreto 6/76, *Ibíd.*

¹⁶⁴ Ley 21.269/76. Boletín Oficial del 26 de marzo de 1976.

¹⁶⁵ Ley 21.324/76, Ley 21.325/76, Boletín Oficial del 9 de junio de 1976.

¹⁶⁶ Ley 21.699/77, boletín Oficial del 13 de diciembre de 1977.

¹⁶⁷ Ver Troncoso: *El Proceso de Reorganización Nacional*/2, p. 13-91.

¹⁶⁸ Sanmartino de Dromi señala que en este documento confluyeron trabajos de cada una de las fuerzas. El primero perteneció a la Armada y se denominó "Consideraciones"; el Ejército, por su parte, elaboró las "Primeras bases para la propuesta de Unidad Nacional"; y, finalmente, la Fuerza Aérea aportó en julio de 1978 las "Bases políticas para la reorganización nacional". Sanmartino de Dromi (1988): *Ibíd.* p. 414.

desarrollo integral, político, social, económico sustentado en dos pilares incommovibles de nuestra nacionalidad. La concepción cristiana de la vida y las tradiciones de nuestra cultura"¹⁶⁹. En el desarrollo de las Bases Programáticas, la Junta Militar consideraba que: *"... Estas bases programáticas, a partir de las bases doctrinarias ya expresadas, concretarán ideas para cada esfera de gobierno, con la finalidad de delinear los rasgos salientes de la Argentina deseada, y fijar las pautas esenciales de coincidencia a partir de las cuales se podrán estructurar los programas de las distintas corrientes políticas. De modo que estas bases "nos proporcionan conceptos iniciales alrededor de los cuales el país deberá aunar criterios para que la sociedad argentina pueda desarrollar y desenvolverse como tal"*¹⁷⁰. Finalmente, en la tercera sección, Bases Instrumentales para la acción política, se afirmaba que: *"... el diálogo se orientará a lograr una participación responsable, amplia y continua, para que, partiendo de las coincidencias en las ideas básicas se afiancen las condiciones cívicas y el acceso creciente de la ciudadanía a la actividad partidaria y a la dirección política"*¹⁷¹. Posteriormente, los militares argentinos fijaban los límites para el consenso a la sociedad: *"... Las ideologías totalitarias estarán completamente excluidas y se considera inaceptable el propósito de fomentar la lucha de clases, la propiedad colectiva de los medios de producción, la exaltación desmedida de la personalidad de los dirigentes, la politización partidaria de las grandes instituciones del Estado y de las organizaciones intermedias y la utilización de posiciones públicas en beneficio personal"*¹⁷². Complementariamente, definieron al diálogo político como el instrumento a partir del cual se iniciaría la etapa de normalización político institucional del país. Sin embargo, el diálogo quedó caracterizado por los múltiples condicionantes que le impusieron los militares, restando efectividad a esta propuesta¹⁷³, la propuesta que surgió de las Bases Políticas no se llevó a la práctica.

¹⁶⁹ Bases políticas de las Fuerzas Armadas. Buenos Aires (Ver anexo).

¹⁷⁰ Bases políticas de las fuerzas Armadas, Ibíd.

¹⁷¹ Bases políticas de las fuerzas Armadas, Ibíd.

¹⁷² Bases políticas de las fuerzas Armadas, Ibíd. Criterio, al analizar este documento, observaba que "... la Junta Militar marcaba los límites al totalitarismo, en su definición de extrema izquierda; sin embargo, pese a la larga lista de exclusiones, "... nada se dice con respecto al racismo, signo distintivo del totalitarismo de extrema derecha". Criterio: La propuesta política N.º 1827-1828, Año LII, 24 de enero de 1980.

¹⁷³ Sigal y Santi citan declaraciones del presidente Videla del 8 de agosto de 1977: *"... El intercambio de opiniones se efectuará con todos aquellos que, además de las virtudes de honestidad, aptitud y representatividad, compartan los objetivos del Proceso. Y estén dispuestos a concebir una democracia auténtica. Tales hombres podrán provenir, por ejemplo, de sectores de la producción agrícola e industrial, del comercio, de sectores del trabajo, del movimiento cooperativo, de las entidades culturales, científicas, etc. ... pero debe reconocerse la importancia de dialogar con hombres que hacen al pensamiento político;*

Bajo la presidencia del general Viola se dieron otras señales de acercamiento a los sectores sociales y políticos. Se desagregó el ministerio de Economía en varias carteras, incorporando a dirigentes del agro y la industria al frente de las mismas. En lo político propició el inicio del diálogo directo con los partidos políticos tradicionales, alejándose, de este modo, de lo que venía realizando su antecesor. En este nuevo marco se creó en Julio de 1981 la Multipartidaria¹⁷⁴, como un polo de articulación política que permitía sacar, implícitamente, a la actividad política de la ilegalidad, y fue el inicio de la estructuración de una corriente de opinión en favor de la demanda de un cambio de régimen político. En el mes de agosto publicó el documento "Convocatoria al país" con siete puntos¹⁷⁵: 1) retorno al estado de derecho y remoción de las restricciones a los derechos humanos, 2) normalización inmediata de la actividad política, sindical y estudiantil, 3) cronograma preciso para realizar las elecciones, 4) programa de emergencia económica, 5) recuperación del salario real y libre funcionamiento de las convenciones colectivas, 6) mejoramiento de la educación, y 7) libre acceso a los medios de comunicación del Estado. En diciembre del mismo año emitió el denominado "Antes que sea tarde", con críticas a la represión y *"desconocimiento de los derechos humanos en las acciones regresivas y por la justicia nunca satisfecha de miles de desaparecidos cuyos destinos se ignoran"*, y realizaba una extensa crítica de la política económica, social y cultural¹⁷⁶. La apertura política ensayada por el presidente Viola duró unos pocos meses hasta que el presidente Viola fue relevado de la presidencia, y el diálogo político fue dejado de lado. En su lugar, se pretendió articular un partido político que se convirtiera en el sucesor del "Proceso". Esta nueva estrategia fue conocida con el nombre de "Movimiento de Opinión Nacional" (M.O.N.). A partir de ese momento, la Multipartidaria pasó a ejercer una oposición más abierta al gobierno militar. En 1982 la Multipartidaria, en acuerdo con la Confederación General del Trabajo (CGT), que venía realizando actos contra el gobierno militar desde el año anterior, y las organizaciones de derechos humanos y estudiantiles, realizaron el 30 de marzo la movilización política más importante hasta entonces de protesta abierta al Proceso.

y las personalidades eminentes". (Subrayado de los autores). Sigal y Santi (1985): El discurso en el régimen autoritario. Un estudio comparativo, p. 161.

¹⁷⁴ La Multipartidaria reunió el 14 de julio de 1981, bajo la iniciativa del dirigente radical Ricardo Balbín, al Partido Justicialista, a la Unión Cívica Radical, al Partido Intransigente, al Movimiento de Integración y Desarrollo y a la Democracia Cristiana.

¹⁷⁵ Multipartidaria (1981): Convocatoria al país.

¹⁷⁶ Multipartidaria (1981): Antes que sea tarde.

Posteriormente, las derivaciones del conflicto de Malvinas modificarían, nuevamente, la relación del gobierno militar con los partidos políticos. El accionar de la Multipartidaria fue importante en esos años, tanto de denuncia como de resistencia, pero en ningún momento desafió de manera abierta al régimen militar. Malvinas sorprendió a los militares sin un modelo político concreto para seguir "interviniendo" en la vida política argentina en la nueva etapa institucional, la derrota militar repercutió en la fase de transición a la democracia que se abrió entonces.

5. La crisis política del Proceso de Reorganización Nacional:

Si bien es difícil y polémico establecer el momento en que el régimen militar comienza su declinación, nuestra hipótesis es que a partir del año 1980 existen elementos que nos permiten considerar que el Proceso de Reorganización Nacional entró en un período de crisis del que no pudo salir. En clave política los factores que distinguiremos en nuestro análisis son: el problema de la sucesión presidencial en el régimen militar, las consecuencias de la violación de derechos humanos en la lucha contra la subversión, y la sucesión del propio régimen militar.

5.1. La sucesión presidencial en el régimen militar:

En julio de 1978 la Junta Militar decidió modificar el esquema institucional de poder previsto originalmente creando el Comité Militar. El Comité estuvo integrado por los tres comandantes en jefe y el presidente de la Nación. A partir de ese momento, el presidente de la Nación no podía ser simultáneamente comandante en jefe de una de las fuerzas. Como consecuencia de esta decisión, el general Videla pasó a situación de retiro, y comenzó el segundo período como presidente de la Nación. Se puede considerar que esta alternancia fue la única sucesión presidencial en el régimen militar que se realizó sin que las diferencias internas traspasasen los muros militares e influyeran en la legitimidad del nuevo mandatario¹⁷⁷. Ya en el segundo cambio de gobierno del "Proceso", la designación del sucesor de Videla fue traumática. Eran visiblemente manifiestas las profundas diferencias que existían en el pensamiento y en los proyectos personales de los miembros de las Fuerzas Armadas. El 29 de setiembre de 1980 la Junta Militar debía designar al nuevo presidente de la Nación. Sin embargo, pasó el día sin conocerse la resolución militar¹⁷⁸. Posteriormente, por medio de un

¹⁷⁷ Fontana considera que "... Uno de los rasgos que caracterizó la coyuntura anterior al derrocamiento del general Viola es la vigencia de un conflicto interno de las Fuerzas Armadas, que comienza a gestarse muy tempranamente. Durante los primeros tramos del Proceso de Reorganización Nacional ese conflicto se manifiesta en los cuestionamientos de la Armada a que el general Videla desempeñe simultáneamente los cargos de presidente de la Nación, Comandante en Jefe del Ejército y, como consecuencia de esto último, miembro de la Junta Militar. ... Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo en el seno de la Junta Militar -que para la designación del presidente debe resolverse por unanimidad- los comandantes deciden crear un mecanismo ad hoc compuesto por los diez jefes más antiguos de cada fuerza. En este caso, la decisión se toma por mayoría y no por unanimidad. El resultado de la votación para que se designe a Videla como presidente es de veinte a favor, correspondientes al Ejército y la Aeronáutica, y diez en contra, correspondientes a la Armada." Fontana (1986): De la crisis de Malvinas a la subordinación condicionada: conflictos intramilitares y transición política en Argentina, p. 3, 4 y 37.

¹⁷⁸ Baloyra indica que "... Un breve y confuso comunicado oficial sobre el nuevo presidente se haría en diez días, pero, en efecto, se produjo 72 horas más tarde. la proclamación oficial eludió el término

comunicado de prensa, se informaba que: *"La Junta Militar, en su carácter de órgano supremo del Estado y en ejercicio de facultades que le son propias, ha resultado designa al señor Teniente General (RE) don Roberto Eduardo Viola para ejercer el cargo de presidente de la Nación Argentina durante el período comprendido entre el 29 de marzo de 1981 y el 29 de marzo de 1984"*¹⁷⁹. En esa oportunidad, y en el medio de un clima enrarecido, la Junta Militar estableció un período de seis meses entre la designación y la asunción del nuevo mandatario. Ese intervalo de tiempo, inexplicablemente largo, creó un vacío de autoridad entre Videla que dejaba la presidencia, y Viola que no la podía asumir. La incertidumbre agravó los efectos de la crisis económica¹⁸⁰. Viola se instaló en el gobierno sin el apoyo pleno de la Junta Militar, e impactó en la legitimidad de su gobierno, su gestión transcurrió bajo el "asedio" de la propia Junta. Sobre fines del mismo año 1981, a menos de 9 meses de haber asumido, Viola fue derrocado y reemplazado el general Galtieri. Se trató de un verdadero "golpe" dentro del "golpe"¹⁸¹. El general Galtieri retuvo el cargo de Comandante en Jefe del Ejército, miembro de la Junta Militar y presidente de la Nación, en evidente oposición a otra de las reglas que habían sancionado poco tiempo atrás. El régimen militar había entrado en una crisis

"unanimidad" al describir la decisión que lo designó para el cargo". Baloyra (1987): Argentina transición o disolución, p. 37.

¹⁷⁹ Fontana afirma que "... Los factores decisivos para la resolución de estos conflictos de manera favorable a los generales Videla y Viola respectivamente son, por una parte, la prioridad otorgada por el conjunto de los jefes militares al mantenimiento de la unidad interna de las Fuerzas Armadas y, por otra, al rol desempeñado por un grupo de generales jóvenes, en su mayor parte pertenecientes a la promoción N.º 76, que mantiene estrechos vínculos con Viola y Videla desde principios de la década de 1970". Fontana (1986): *Ibíd.*, p. 37.

¹⁸⁰ Criterio advertía, en el momento en que Viola se hace cargo de la presidencia de la Nación, que "Los primeros tramos del tercer gobierno del sistema militar inaugurado en 1976 producen, como era previsible, impresiones contradictorias. En primer lugar, es notorio que el nuevo gobierno no ha terminado de pagar el precio de una transición interna poco feliz, para decir lo menos, según las reflexiones que apuntamos en su momento relativas a una "transición inexperta". Para algunos, en efecto, el gobierno del general Viola entró "con la sien herida en la batalla" y para otros, aun así, dista de haber perdido la guerra". Criterio: ¿Progreso o reversión política?, N.º 1858, año LIV, 23 de abril de 1981.

¹⁸¹ El 9 de noviembre el general Liendo -ministro del Interior- reemplaza a Viola que había solicitado una licencia por enfermedad. Pero dadas las continuas versiones sobre el probable derrocamiento de Viola el general Liendo se niega a continuar este reemplazo; la Junta Militar designa -como presidente provisional- el contraalmirante Carlos Alberto Lacoste. El 12 de diciembre se emite un comunicado en el que se informa que: Artículo 1.- "Cese como Presidente de la Nación Argentina el Señor Teniente General (R) D. Roberto Eduardo Viola". Artículo 2.- "Designese Presidente de la Nación Argentina para el período 22 de diciembre de 1981 - 29 de marzo de 1984, al Señor Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri, quien, con carácter de excepción a lo determinado por el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, retendrá el cargo de Comandante en Jefe del Ejército hasta completar el lapso fijado en el número 1.3.2. del Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar, Poder Ejecutivo Nacional y Comisión Nacional de Asesoramiento Legislativo". Este comunicado fue transcrito en: La Nación, 12 de diciembre de 1981, p. 1 (Ver Anexo).

institucional interna. Estas desavenencias condujeron a los militares a violar las propias reglas de organización del poder a pocos años de haberse instalado en el gobierno. La violación de las propias normas era una causa y una consecuencia de las diferencias en los proyectos y ambiciones personales de los principales integrantes de la cúpula militar.

5.2. Las secuelas de la lucha contra la subversión:

El segundo de los elementos considerados para evaluar el grado de crisis institucional-política del Proceso de Reorganización Nacional fue el legado que dejó la lucha contra la subversión. Las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares en los enfrentamientos del último lustro de la década del '70, aislaron al "Proceso" en su relación con el orden internacional¹⁸². Las posiciones de rechazo a estas metodologías por parte de los gobiernos de los Estados Unidos, Francia, Suecia, España, Italia, y de organizaciones de derechos humanos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (C.I.D.H.-O.E.A.), de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), la Asociación Internacional de Prensa, Amnesty International, horadaron, decididamente, la posición de los militares. En el orden interno, fueron las organizaciones de defensa de los derechos humanos las que opusieron un rechazo similar dentro de las fronteras del país. En mayo de 1981 el Episcopado Argentino -que venía reiterando la preocupación por los métodos utilizados desde los inicios de la lucha contra la subversión- presentó un documento que marcó, decididamente, la visión general sobre la marcha del régimen militar. El trabajo, denominado "Iglesia y comunidad nacional", constituyó una toma de posición de los obispos de la Iglesia Católica sobre diversos temas de singular trascendencia. En relación con la lucha antisubversiva los obispos argentinos señalaron que *"... se debe discernir entre la justificación de la lucha contra la guerrilla y la de los métodos empleados en esa*

¹⁸² Ver el informe los testimonios en el juicio a las juntas militares y el informe de la CONADEP. En el inicio de la democracia, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada a través del Decreto 187/83, e integrada por: Ricardo Colombres, René Favalaro, Hilario Fernández Long, Carlos Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Jaime F. de Nevares, Eduardo Rabossi, Magdalena Ruiz Guiñazú, Ernesto Sábató (Presidente), y tres diputados: Horacio Hugo Huarte, Santiago Marcelino López y Hugo Piucill en representación del Congreso de la Nación, recogería los desgarradores testimonios de los desaparecidos durante el Proceso de Reorganización Nacional, que fueron presentados en el libro: Nunca más. En el mismo sentido, en los juicios a los nueve comandantes de las juntas militares del Proceso, Jorge R. Videla, Emilio E. Massera, Orlando R. Agosti, Roberto E. Viola, Armando Lambruschini, Omar D. Graffigna, Leopoldo F. Galtieri, Jorge I. Anaya y Basilio Lami Dozo, dispuesto por el Decreto 158/83, surgieron múltiples testimonios dolorosos, cuyas versiones taquigráficas fueron recogidas por la publicación El diario del juicio, ver: números 1 del 27 de mayo de 1985 al número 36 del 28 de enero de 1986.

*lucha. La represión ilegítima también enlutó la patria. Si bien en casos de emergencia pueden verse restringidos los derechos humanos, éstos jamás caducan y es misión de las autoridades, reconociendo el fundamento de todo derecho, no escatimar esfuerzos para devolverles la plena vigencia. ... Se ha olvidado que el acatamiento que se debe a la ley obliga a todos por igual, a quienes poseen la fuerza política, económica, militar, social, como a los que nada poseen, ... los responsables de la autoridad no pueden justificar, en virtud del estado de excepción, un proceder que no se ajustara a elementales criterios éticos, ... Aún en situaciones excepcionales no se puede jamás justificar violación alguna de la dignidad fundamental de la persona humana. ... La teoría de la llamada "guerra sucia" no puede suspender normas éticas fundamentales que nos obligan a un mínimo respeto del hombre, incluido el enemigo"*¹⁸³.

Dado que la erradicación de la subversión había sido una de las políticas por medio de las cuales las Fuerzas Armadas buscaron erigir los pilares de su legitimidad de origen, los cuestionamientos internos y externos a la misma contribuyeron a corroer tanto esa legitimidad como la legitimidad de ejercicio¹⁸⁴.

5.3. La regulación sucesoria del régimen militar:

Pero quizás una de la cuestión más relevante que no pudo resolver el régimen autoritario fue la de prever y guiar su propia salida, hacia una democracia "tutelada". Como hemos señalado, los militares argentinos organizaron un régimen de gobierno integrando elementos institucionales y personales. Las Fuerzas Armadas, en tanto institución, ocuparon un lugar central en el proceso político. Ellas fueron las que condujeron al "Proceso". Sus decisiones fueron atendidas siempre por sobre las de cualquier otra institución. Y fueron los propios militares los que ocuparon la totalidad del Estado constituyendo, de esta manera, un verdadero régimen político distinto a las experiencias anteriores. Sin embargo, no resolvieron un problema determinante: el de la regulación sucesoria. No elaboraron ni aplicaron un régimen político a futuro en los

¹⁸³ Iglesia y Comunidad Nacional. p. 22, mayo de 1981.

¹⁸⁴ En la introducción a las Bases Políticas de las fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional se afirmaba que "... Restituir los valores esenciales que sirven de fundamento a la conducción integral del Estado, enfatizando el sentido de moralidad, idoneidad y eficiencia, imprescindible para reconstruir el contenido de imagen de la Nación, erradicar la subversión y promover el desarrollo económico de la vida nacional basado en el equilibrio y la participación responsable de los distintos sectores a fin de asegurar la posterior instauración de una democracia republicana, representativa y federal, adecuada a la realidad y exigencia de evolución y progreso del pueblo argentino. Este es el fundamento de su legitimidad de origen y de finalidad".

primeros años del "Proceso", cuando tuvieron mayor consenso, bajo nivel de movilización política y social, y pluralismo político inexistente. Tampoco lo construyeron después. El tema de la regulación sucesoria¹⁸⁵ se tornó complejo y conflictivo para los militares argentinos por las divergencias de criterios y proyectos personales existentes en el seno de la coalición gobernante. El deterioro que sufría el régimen militar con el transcurso del tiempo en la esfera económica, en la política internacional, en el ámbito de los derechos humanos, y la ausencia de resolución de la salida institucional paralizó la acción del gobierno y ahondó la crisis. Se aplica la idea de Sartori¹⁸⁶, que afirma que el problema de la regulación sucesoria es el *Talón de Aquiles* del autoritarismo.

Del análisis de los elementos expuestos hasta aquí podemos considerar que el "Proceso", en tanto régimen político, estaba en una profunda crisis, aún antes de Malvinas; sin embargo, falta aún encontrar el elemento acelerador¹⁸⁷ que condujo al cambio de régimen político.

¹⁸⁵ Siguiendo a Huneeus, por regulación sucesoria se entiende a la manera en que se distribuirá el poder en el futuro, teniendo que definir previamente cómo participará la actual coalición de gobierno en el nuevo orden político. Huneeus (1986): Autoritarismo, cuestión sucesoria y la transición a la democracia: España, Brasil y Chile.

¹⁸⁶ Sartori (1987): Notas para una teoría general de la dictadura.

¹⁸⁷ Morlino (1981): Ibíd. p. 93-150. Y Morlino (1987): Las instauraciones democráticas en Europa Mediterránea. Algunas hipótesis comparativas, p. 221-256.

6. El punto de no retorno: Malvinas.

El pluralismo político limitado, impuesto por las Fuerzas Armadas, cedía ante la presencia de la Multipartidaria en la escena política. Este nucleamiento aumentaba la agenda de temas políticos, económicos y sociales con los que se enfrentaba al gobierno militar. Sin embargo, no tenía una estrategia decidida para desafiar al "Proceso". En lo institucional, los reclamos se dirigían a la búsqueda de la normalización de la actividad partidaria. Por otro lado, se comenzaba a percibir en la sociedad civil las consecuencias de la política económica de las distintas administraciones. Los efectos de la lucha contra la subversión habían traspasado la férrea censura que los militares habían impuesto para evitar que llegase a la opinión pública. El grado de movilización interna de las organizaciones civiles y de los gremios era creciente. Estas movilizaciones adquirirían la forma de actos, reuniones, marchas, peticiones, solicitadas, como el paro general de actividades impulsado por la C.G.T. el 30 de marzo de 1982. Si bien fue reprimido por el gobierno, dejó traslucir la impotencia creciente del régimen militar para mantener desmovilizada a la oposición. De todas formas, en marzo de 1982, la distancia entre el autoritarismo militar y la democracia era, aún, marcada.

En este contexto fue la derrota de la guerra de Malvinas el elemento acelerador que llevó al gobierno militar a su caída y posibilitó el cambio de régimen político.

En relación con Malvinas, Cardozo, Kirschbaum y Van der Kooy advierten una relación directa entre el ascenso de Galtieri a la presidencia de la Nación y la decisión de reconquistar el territorio insular¹⁸⁸: para producir el "golpe dentro del golpe", que terminó con la presidencia de Viola, fue decisivo el apoyo de la Marina. En particular, de su comandante en jefe el almirante Jorge I. Anaya. Los autores sostienen que esta "solidaridad" estuvo condicionado al cumplimiento de una vieja aspiración de las Armada: la recuperación de las Malvinas. Cada uno de los "socios" tenía su propio objetivo: para Galtieri el desplazamiento de Viola y su ascenso a la presidencia de la Nación, para Anaya la reconquista de las Islas¹⁸⁹. Fontana considera que la decisión del desembarco en Malvinas no fue una consecuencia del aumento de la oposición al

¹⁸⁸ Cardozo, Kirschbaum y Van der Kooy (1983): *Malvinas: la trama secreta*, p. 19-22.

¹⁸⁹ Los autores consideran que "... los dos Comandantes en Jefe tuvieron varias reuniones para tratar "ambos" temas: ... Galtieri seducido por la idea de poder, se limitó a asentir en cada oportunidad. ¿No es imprescindible acaso el consentimiento de la Armada en la Junta Militar para lograr el desplazamiento de Viola?". Cardozo, Kirschbaum y Van der Kooy (1983): *Ibíd.*, p. 21.

gobierno militar, sino que respondió a la "lógica interna del régimen"¹⁹⁰. Se trató de un intento por mantener la estabilidad de éste que peligraba, no tanto por las presiones externas al régimen, sino por los movimientos que se iniciaban en sus interiores¹⁹¹. El gobierno buscaba recuperar el espacio en el frente político interno. De manera consciente o no la Junta Militar estaba realizando una apuesta que colocaba la suerte propia del régimen en función de los resultados de esta "movida".

La oposición civil fue sorprendida por este giro político y, en general, aunque no de manera unánime, aprobó y apoyó esta decisión. La Multipartidaria expresó en un documento su respaldo a la iniciativa del gobierno y a toda otra medida que consolidara la soberanía argentina. Diversos dirigentes iniciaron giras internacionales en búsqueda de apoyo al reclamo argentino. El rechazo a la decisión de la Junta Militar fue la excepción en la dirigencia política¹⁹². El movimiento sindical, que horas antes había sido reprimido por el gobierno militar en la manifestación de la Plaza de Mayo, expresó su consentimiento por medio de un documento llamado "Primero la Patria". A través de éste, se decidió suspender el plan de acción previamente concebido, y apoyar la decisión de la Junta Militar. La posición del movimiento de defensa de los derechos humanos puede ser resumida en la siguiente frase: "Las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también": apoyo, pero conservaron su posición crítica frente al gobierno

¹⁹⁰ Fontana considera que: "... El estrechamiento progresivo de los márgenes de la relación entre el gobierno y frente interno fue producto de la dinámica desarrollada por el régimen militar a partir de la crisis que se inició durante la transición de Videla a Viola y se agudizó durante la Presidencia de este último. A partir de entonces, la dinámica interna del régimen condujo a que el jefe militar que accediera a la conducción política creara detrás de sí el espacio para que otros jefes asuman el rol de representantes del frente interno desde posiciones duras. De este modo, la otrora "unidad monolítica" de las Fuerzas Armadas quedó subordinada a la lucha interna por el poder y a la toma de posiciones con respecto a las condiciones de perdurabilidad del régimen militar". Fontana (1984): Fuerzas Armadas, partidos políticos y transición a la democracia, p. 29-30.

¹⁹¹ "... En consecuencia, la decisión de ocupar militarmente las Islas Malvinas en ese momento no resultó directamente de las tensiones que se habían generado entre el gobierno y la sociedad civil. Tal decisión estuvo también determinada por la lógica interna del régimen militar que, ante las tensiones entre gobierno y sociedad civil, presagiaba una mayor fragmentación de las Fuerzas Armadas y prontas desestabilizaciones de las autoridades gubernamentales, provocada una vez más "desde adentro" de la corporación militar". Fontana, Andrés (1984): *Ibíd.*, p. 30.

¹⁹² De esa forma se expresaron: el entonces presidente del Movimiento de Integración y Desarrollo (M.I.D.) y expresidente de la Nación Arturo Frondizi, Rogelio Frigerio también del M.I.D., el dirigente radical Raúl Alfonsín, a pesar de que la Convención de su partido aprobó esta política, Horacio Sueldo del Partido Demócrata Cristiano, el dirigente Álvaro Alsogaray, el excanciller (1970-72) Luis María de Pablo Pardo. Jaime Potenze desde la Revista Criterio, Magdalena Ruíz Guiñazú, James Nielson del Buenos Aires Herald, Esteban Palakovic en la Revista Papiro. Los obispos Jorge Novak y Jaime de Nevares.

militar¹⁹³. La sorpresa también se extendió a la ciudadanía: poblaciones de diversas ciudades y pueblos se volcaron a las calles en apoyo de la reconquista de Malvinas. Sin embargo, era apenas perceptible, pero sí se podía distinguir, que el respaldo a esta decisión no se extendía a la reivindicación del gobierno militar. La derrota militar del 14 de junio de 1982 es conocida. Las consecuencias, mediatas e inmediatas, fueron múltiples. El régimen militar llegaba a un punto de no retorno¹⁹⁴.

El fracaso de esta operación, y la destitución del presidente Galtieri, generó una nueva crisis en la Junta Militar sobre la designación del nuevo presidente. Los enfrentamientos internos en la Junta Militar llegaron a un nivel que no conocía precedentes, lejos se estaba de las proclamas y objetivos iniciales que fundaron su accionar en la unidad. La divergencia de criterios entre las tres fuerzas culminó con la decisión del Ejército de imponer como presidente al general (R) Reynaldo B. Bignone, sin la unanimidad establecida en las propias regulaciones sucesorias. La consecuencia inmediata fue la disolución de la Junta Militar como órgano superior de gobierno del Proceso¹⁹⁵, e ilustra el quiebre definitivo en la cohesión interna de los militares en el poder.

El Proceso, en tanto régimen, no pudo sostener la máxima instancia de gobierno que había creado, tampoco supo respetar los mecanismos de sucesión interna, ni pudo construir una salida institucional que heredase al régimen militar. Así, se aprecia cómo los principales elementos que contribuyeron a deteriorar la legitimidad de ejercicio emergieron desde "adentro" mismo del régimen.

¹⁹³ Leis y Sondéreguer coinciden en indicar que el movimiento de derechos humanos intentó distinguir entre el "hecho" de la ocupación y el "actor" que la llevó adelante. Leis (1989): El movimiento de los derechos humanos y la política argentina/1, p. 13-36. y Sondéreguer (1985): Aparición con vida, p. 7-32.

¹⁹⁴ Floria advierte que "... La guerra no aparece como factor privilegiado en la mayoría de los análisis de los científicos sociales que examinan el caso argentino. La guerra interna es factor relevante en el cambio político ocurrido en el régimen militar de 1966/73 y en el último gobierno peronista. La guerra internacional es factor decisivo en el cambio político que ocurre en 1983". Floria (1986): Argentina: algunas claves políticas, p. 6-12.

¹⁹⁵ Ver anexo del comunicado del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

PARTE III: LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA

7. La transición a la democracia en la Argentina:

En el Capítulo 1 se definió “transición” al proceso de cambio entre regímenes políticos de naturaleza diversa¹⁹⁶. A partir del año 1983, las normas, las reglas del juego y las instituciones específicas de un régimen autoritario fueron sustituidas por un conjunto diferente propios de un régimen democrático. En términos cronológicos la transición cubre el período de tiempo en que el antiguo régimen ha dejado de existir plenamente sin que el nuevo haya surgido en su totalidad. La transición comienza con la crisis del régimen que cae y termina con la instalación del régimen que lo sustituye¹⁹⁷, luego se abre el período de consolidación, cuando la nueva coalición política se instala en el control del Estado, y de sus poderes¹⁹⁸. Las diferencias que caracterizan cada una de las fases institucionales conviven con elementos (o estructuras) de continuidad entre ambas, ejemplos de ello son: la burocracia, las instituciones como las Fuerzas Armadas, los integrantes de los distintos niveles del Poder Judicial, éstos suelen tener solo cambios en las cúpulas y continuidades en los restantes niveles, quedando la “trama operativa” intacta¹⁹⁹. La distinción entre las etapas de crisis, transición, instauración y consolidación permite resaltar aspectos específicos de un proceso que en realidad es continuo.

7.1. La salida del autoritarismo:

Luego de la derrota militar de Malvinas se renovó toda la Junta Militar²⁰⁰. En el mes de setiembre los tres nuevos Comandantes en Jefe decidieron reconstituir la Junta Militar como poder supremo de la Nación. El problema central para los militares, que ya tenían decidido la salida del poder, era la manera de concertar con la dirigencia política los términos de su retirada. La Junta Militar presentó, a través del presidente Bignone, una lista de temas a incluir en una futura concertación con los sectores políticos y sociales, entre los que se destacaban: el legado de la lucha antisubversiva, la investigación en

¹⁹⁶ Santamaría (1981): Transición controlada y dificultades de consolidación: el ejemplo español, p. 371-418.

¹⁹⁷ Morlino (1988): Los autoritarismos, p. 157.

¹⁹⁸ Morlino (1988): Ibíd., p. 181.

¹⁹⁹ Catterberg (1989): Los argentinos y la política, p. 159.

²⁰⁰ El general Galtieri fue inmediatamente destituido de la Comandancia en Jefe del Ejército y de la presidencia de la Nación. El brigadier Basilio A. Lami Dozo pasa a retiro y es sustituido por el brigadier Augusto Hughes el 5 de agosto de 1982. Y en el mes de setiembre el almirante Anaya es reemplazado por el almirante Rubén Oscar Franco.

relación con la guerra de Malvinas, la cuestión limítrofe con el gobierno de Chile con relación al Canal de Beagle, las secuelas de la política económica, y el régimen electoral con vistas a la elección de las futuras autoridades de la nación²⁰¹. La estrategia de los militares apuntaba a acordar con la dirigencia política los temas que consideraban de mayor trascendencia de modo de "cerrar" la revisión de lo actuado en el Proceso de Reorganización Nacional. A pesar de la amplitud de la agenda, los militares argentinos centralizaron su atención en el legado de la lucha contra la subversión, intentando con ello una solución cívico-militar.

Desde el lado de la dirigencia política y, en particular, desde la Multipartidaria, no se daba la menor señal de adherir a una concertación. Los reclamos de este nucleamiento estaban dirigidos al restablecimiento del estado de derecho, al retorno completo de la legalidad de la actividad política y sindical, y la definición de la agenda electoral. La estrategia de los políticos apuntaba, en realidad, a que los militares se encargasen de la solución de todos estos problemas sin que la clase política participase en las decisiones²⁰². La Iglesia Católica, a través del documento del Episcopado denominado "Camino de reconciliación", intentó el acercamiento cívico-militar sin resultados positivos²⁰³. En consecuencia, los militares se vieron obligados a reducir la agenda de los

²⁰¹ Fontana (1986): De la crisis de Malvinas a la subordinación condicionada: conflictos intramilitares y transición a la democracia en Argentina, p. 21.

²⁰² San Martino de Dromi presenta un documento elaborado por la Multipartidaria en oportunidad de la Marcha de la Civilidad o Marcha de la Multipartidaria convocada para el 16 de setiembre de 1982 a Plaza de Mayo, en el mismo se afirmaba que "... El gobierno militar debe fijar en forma precisa el calendario para la normalización definitiva del país, que determine la transferencia del poder no más allá del 12 de octubre de 1983; dar solución justa y valedera al drama de los desaparecidos; esclarecer las responsabilidades por la guerra de Malvinas; liberar la totalidad de los detenidos sin proceso; levantar el estado de sitio; derogar las actas institucionales; dismantelar el aparato represivo; regularizar las conducciones de los gremios y de las obras sociales; efectivizar la prescindencia de los funcionarios públicos; suprimir la censura ideológica y las llamadas "listas negras"; el régimen debe abstener su continuismo en áreas de vital importancia como los medios de comunicación social y las cátedras universitarias; y debe producir una rápida rectificación de la política económica y social, que necesariamente estará fundada en la recomposición urgente del salario real, en el pleno empleo y en la reactivación del aparato productivo". Sanmartino de Dromi (1988): *Ibíd.* p. 425.

²⁰³ En este sentido, es interesante observar como el Papa Juan Pablo II abordaba el tema de los derechos humanos en Argentina, en oportunidad de la misa celebrada en la plaza de San Pedro el 4 de mayo de 1983: "... En estos días la opinión pública mundial, centra su atención con nueva y comprensible sensibilidad en el doloroso drama de los desaparecidos en la Argentina, manifestando solidaridad para los familiares de las víctimas de tan angustioso caso. El problema apremiante de los desaparecidos siempre estuvo y todavía está, más ahora, en mi ánimo. Deseo renovar a las familias, que tienen en el corazón una espina tan aguda por la suerte de los seres queridos, mi sentida participación en sus sufrimientos, en un momento en el cual parece que se ha roto la esperanza que todavía nutrían. Imploro de todo corazón a María Santísima, Mater Dolorosa, para que obtenga el consuelo para que toda la familia que ha tenido que enfrentar tanto dolor y para que la ayude en esta hora de amargo consuelo. Invito a todo el mundo a unirse en esta sentida y ferviente oración". San Martino de Dromi (1988): *Ibíd.*, p. 426.

temas de la concertación, y la centralizaron en el problema que para ellos adquiriría prioridad: las consecuencias de la lucha contra la subversión.

La transición pactada entre el "antiguo" y el "nuevo" régimen no fue posible, y ello modeló la transición política argentina, distinta a otras de la región, como por ejemplo la chilena en el año 1989. Luego del anuncio de la fecha de las elecciones generales para el 30 de octubre de 1983, la Junta Militar decidió impulsar "su" solución a las secuelas de los enfrentamientos de la década anterior. El 28 de abril de 1983 publicaron el denominado "Documento final de la Junta Militar", dividido en cinco secciones: 1) introducción, 2) los hechos, 3) los principios y los procedimientos, 4) las secuelas del conflicto, y 5) consideraciones finales. En particular, sobre el tema de la lucha contra la subversión afirmaban que: *"... se consideran muertas ... aquellas personas que figuran en nómina de desaparecidos y no se encuentren exiliados o en la clandestinidad". Complementariamente, negaban la existencia de centros clandestinos de detención*²⁰⁴. El documento fue rechazado por la dirigencia política, y por los movimientos de los derechos humanos, éstos convocaron a una masiva marcha de repudio. Si bien las Fuerzas Armadas debieron enfrentar a la sociedad civil en la solución de este problema, internamente las mismas se hallaban encolumnadas sin fisuras detrás de la posición fijada por el documento²⁰⁵. En consecuencia, las Fuerzas Armadas giraron hacia su interior e intentaron cristalizar la propia solución sobre este tema. El 23 de setiembre de 1983 el gobierno militar promulgó la Ley 22.924, llamada "de Pacificación Nacional", por medio de la cual se amnistiaba a las personas intervinientes en actividades subversivas y "excesos" en la represión desde el 25 de mayo de 1973 al 17 de junio de 1982. Se sancionó la ley 22.928, "de Enjuiciamiento de actividades terroristas y subversivas", delegando en las "fuerzas de seguridad" amplias facultades para actuar en allanamientos, detenciones, intervenciones de comunicaciones. Con estos instrumentos se pretendía "asegurar" un rol privilegiado para las Fuerzas Armadas en la etapa institucional que estaba por comenzar. Ambas iniciativas también fueron rechazadas explícitamente por la mayoría de la sociedad civil.

²⁰⁴ Ver San Martino de Dromi (1988): *Ibíd.*, p. 361. Leis (1989): El movimiento de derechos humanos y la política argentina/1, p. 29. y Sondéreguer (1985): *Ibíd.*, p. 24.

²⁰⁵ Fontana advierte que, según entrevistas realizadas, si bien los militares no coincidían en todos los aspectos del Proceso de Reorganización Nacional, la opinión y la posición sobre el tema de los desaparecidos era monolítica y solidaria con la expresada en el documento. Fontana (1986) *Ibíd.*

7.2. Elementos teóricos para identificar la transición hacia la democracia:

El período de transición en la Argentina iniciado a partir de la derrota militar de Malvinas tuvo características propias que lo distinguen de otras experiencias internacionales²⁰⁶.

La individualización de sus aspectos más importantes adquiere relevancia analítica por la influencia que ejercieron sobre la nueva etapa de la democracia argentina. En esta tarea seguiremos la tipología presentada por Stepan²⁰⁷, el autor distingue tres grandes vías de acceso desde un gobierno autoritario hacia un gobierno democrático: la primera se caracteriza por la presencia de dos factores: una guerra internacional y la intervención de potencias extranjeras sobre el país. En la segunda vía el proceso de cambio es guiado por el régimen autoritario que viabiliza la entrada en la democracia. Finalmente, en el tercer tipo de transiciones son las fuerzas de la oposición anti-régimen las que desafían y conquistan la nueva democracia²⁰⁸. En cada una de las experiencias nacionales se entrelazan una variedad de causas: económicas, políticas, sociales, históricas, internacionales, entre otras.

En la figura siguiente se expone la tipología con sus subtipos:

Figura 2. Tipos de transición desde el autoritarismo a la democracia.

²⁰⁶ No forma parte del objeto de estudio del presente trabajo, el análisis de política comparada de los procesos de transición a la democracia abiertos en los países del Sur de Europa (Italia, España, Portugal, Grecia, Turquía) y de América Latina (Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú, Venezuela). En este sentido, la bibliografía de casos individuales y experiencias comparadas es abundante; algunos de los estudios figuran en la bibliografía adjunta.

²⁰⁷ Stepan (1988): Caminos hacia la redemocratización: consideraciones teóricas y análisis comparativos, p. 105-136.

²⁰⁸ *Ibíd.*, p. 106.

I. Rol decisivo de una guerra y conquista:
I.a. Restauración interna luego de una reconquista externa.
I.b. Reformulación interna.
I.c. Instauración democrática controlada desde el exterior.
II. Redemocratización iniciada desde el régimen autoritario:
II.a. Proviene de la dirigencia política civil.
II.b. Proviene de los gobiernos militares.
II.c. Proviene de las fuerzas armadas como institución contra los
gobiernos militares o contra los dirigentes políticos civiles.
III. Las fuerzas opositoras promueven la transición:
III.a. Supresión del régimen autoritario conducido por la sociedad.
III.b. Pacto partidario con o sin elementos conasociativo.
III.c. Rebelión violenta organizada y coordinada por partidos democráticos.
III.d. Guerra revolucionaria conducida por marxistas.
Fuente: Stepan (1988), p. 107-135.

Rol decisivo de una guerra con ocupación del territorio nacional por otros países: el primero de los caminos hacia la redemocratización se produce cuando el conquistador es derrotado por una fuerza extranjera, y el régimen democrático que había sido suprimido se “restaura”, con plena continuidad legal entre el antiguo y el nuevo régimen democrático, y con pocas presiones para que haya cambios socioeconómicos. Los ejemplos que cita son los de los Países Bajos y Noruega: sus monarquías y gabinetes se habían tenido exiliar durante la ocupación en el exterior, convirtiéndose en símbolos de la unidad nacional y de la resistencia, y cuando regresaron restauraron completamente el régimen político previo. Con algunas complicaciones se encuadran también las restauraciones en Bélgica y Dinamarca.

El segundo subtipo es definido como de "reformulación interna": la democracia se instala luego de que potencias extranjeras liberan a la nación del enemigo invasor, pero el régimen democrático anterior no se recupera porque pudo haber sido culpado de la invasión o fue considerado colaboracionista con los ocupadores o porque no participó activamente de la reconquista democrática. Los tres ejemplos que menciona son: Francia y Grecia luego de la liberalización de los alemanes y, en alguna medida también, el caso de Italia entre los años 1943 y 1946, aunque aquí se encuentran también elementos de control externo al proceso de cambio de régimen.

El tercer camino es la "instauración controlada externamente", como ejemplo típico identifica el caso de Alemania: los aliados luego de desmilitarizar al país controlaron totalmente el proceso político y económico que se abrió a partir de la derrota en la segunda guerra mundial.

Redemocratización desde el régimen autoritario: en estas experiencias hay un intento de controlar la transición a través de reglas formales e informales para garantizar derechos al antiguo régimen (o a su aparato de seguridad), generando, al menos al inicio, una democracia limitada, y vulnerable a la reversión.

En el primer subtipo los dirigentes políticos civiles son los que abren el camino del cambio, y durante los primeros momentos de éste, las fuerzas armadas, como institución, conservan una cuota importante de poder; en la transición es necesario que haya cooperación y flexibilidad entre el nuevo gobierno y la oposición, alternando exigencias con transacciones, de modo de disminuir la probabilidad de reacción militar. El ejemplo que presenta Stepan es España luego de la muerte de Franco.

La "redemocratización" puede ser iniciada, también, por las propias autoridades militares del régimen autoritario, sin embargo, si la liberalización propuesta por ellos no es completada por la acción decidida del resto de las fuerzas sociales y políticas para ocupar el poder o, por diversos motivos, termina habiendo una resistencia institucional de los militares a entregar el poder, no se instaurará el nuevo régimen, el autor señala el caso de Brasil en el año 1974.

En el tercer subtipo el acceso a la democracia es guiado por las fuerzas armadas como institución, los militares promueven la transición porque consideran que con el cambio podrán proteger mejor los intereses corporativos, y porque perciben presiones internas o externas. Los ejemplos son Grecia en 1973, Portugal en 1974, y Perú en 1980.

Las fuerzas opositoras promueven la transición: Stepan distingue cuatro subtipos.

En un primer caso la transformación es "conducida por la sociedad", no por un partido político o una coalición de partidos o un movimiento revolucionario; sin embargo, los levantamientos sociales de este tipo *por sí solos* no podrían culminar un proceso de transformación, son más bien fuerzas imprescindibles para provocar el desenlace de la transición política. Si las fuerzas armadas abandonan el gobierno, posteriormente

dependerá de las fortalezas y debilidades de la sociedad civil, políticamente organizada, para que establezcan barreras que se opongan al retorno de los militares al poder.

La conquista de la democracia puede surgir de un pacto partidario de las fuerzas opositoras, con o sin elementos consociativos²⁰⁹, el ejemplo citado es el de Austria, que combinó el consociativismo con la derrota militar a manos de las potencias extranjeras.

Los dos subtipos restantes se distinguen por la presencia de la violencia como elemento precipitador del cambio, sea porque nace de una rebelión organizada y coordinada por partidos democráticos reformistas, o porque proviene de una guerra revolucionaria.

A este punto, parece útil insistir que la propuesta de Stepan debe ser aprehendida como se hace con otras tipologías de las ciencias sociales: es una simplificación analítica que pretende reflejar una realidad más compleja. Los elementos que caracterizan a cada uno de los "tipos" teóricos se presentan en las experiencias históricas concretas entremezclados, y podrían llegar a producir categorizaciones diversas según como se los pondere.

7.3. La transición a la democracia en Argentina:

La transición a la democracia en nuestro país presenta ciertas singularidades que dificultan el encuadramiento dentro de alguno de los subtipos recién presentados, más bien combina elementos individuales de varios de ellos. Considerando las características teóricas de las transiciones entre regímenes políticos analizados en el Capítulo 1, procederemos a identificar el caso argentino.

En primer lugar, el proceso de cambio de régimen político nació luego de la derrota militar en una *guerra internacional*: Malvinas determinó que la transición argentina fuese *abrupta*. Se ubicaría en el primero de los tres subtipos de Stepan por el rol decisivo del resultado del conflicto bélico, hubo *restauración* del régimen democrático, pero no

²⁰⁹ El consociativismo o consociacionalismo es una forma de gobierno que toman los sistemas políticos democráticos en las sociedades profundamente divididas, cuando un reparto del poder político logra operarse entre las elites más allá de cualquier lógica de mayoría, a pesar de las divisiones religiosas, lingüísticas o étnicas que puedan existir entre los grupos socioculturales. De esta forma, las elites se aseguran una representación en el gobierno. Se percibe a veces al consociativismo como sinónimo de compartir el poder, aunque técnicamente sólo es una forma de compartirlo.¹ Muchas veces, se encuentran afinidades entre el consociativismo y el corporativismo; algunos lo consideran una forma de corporativismo y otros argumentan que el corporativismo económico está diseñado para regular los conflictos de clase, mientras que el consociativismo se desarrolla sobre la base de la reconciliación de la fragmentación social por motivos étnicos o religiosos.

del gobierno peronista, sino el llamado a elecciones generales. La transición, como se analizará más adelante se realizó sin el apoyo financiero internacional, como el ocurrido en varios países europeos luego de la segunda guerra mundial.

El segundo elemento para destacar es que el cambio fue *discontinuo*, no siguió el cronograma del *viejo* régimen.

La transición no fue el resultado de la *acción persistente y tenaz de la oposición* anti-régimen, se trató en realidad de una caída "*desde adentro*" del régimen militar.

En cuarto lugar, si bien los militares argentinos no pudieron manejar "*desde arriba*" el proceso de transición, sí lo tuvieron que hacer en soledad, fue una transición *no pactada*. La dirigencia política se negó, sistemáticamente, a cogobernar en esta fase o colaborar con la agenda para que los militares pudiesen dejar "cerrados" varios problemas pendientes. La salida *no concertada* dejó para el nuevo gobierno democrático una multiplicidad de conflictos abiertos en las distintas áreas²¹⁰.

En resumen, la transición argentina fue *abrupta*, si bien antes de la guerra el régimen autoritario ya mostraba signos de agotamiento, luego de ésta se desfondó. El cambio no resultó de la *conquista de la oposición* al régimen. El proceso se realizó *sin pactos* con la dirigencia política, *sin* la presencia de alguna institución, a la manera de la monarquía española, que actuase como *garante*, y *sin el apoyo financiero internacional* al nuevo régimen político²¹¹.

El contexto socioeconómico doméstico fue de crisis, concomitante con la crisis de la deuda externa internacional, desatada en México en el año 1982, que se expandió en la

²¹⁰ Fontana observa que "... el proceso de transición fue conducido unilateralmente por las Fuerzas Armadas ... (la conducta de los partidos políticos) por una parte, resto espacio a regresiones autoritarias basadas en las supuestas amenazas de "caos" y "desborde social"; por otra parte, bloqueó la viabilidad política de una transición concertada o por etapas". Fontana: Fuerzas Armadas, partidos políticos y transición a la democracia, p. 34.

²¹¹ Escudé, por ejemplo, presenta dos elementos centrales de la ayuda de Estados Unidos a Italia, cuando está salía del fascismo de la postguerra: "... por un lado, la percepción americana de la importancia estratégica crucial de Italia dentro de la órbita occidental en esos años frente al avance del comunismo; por el otro, la oportuna adaptación de Italia -pueblo y gobierno- a los objetivos norteamericanos. Al analizar la posición argentina frente al gobierno de los Estados Unidos se advierte la conjunción de varios elementos: por un lado, la situación de extrema vulnerabilidad en que se encuentra el país; la escasa importancia estratégica que presenta; la conducta de desafío al orden internacional de facto; la violación de los derechos humanos en el período 1976-1983; en este contexto, la joven democracia si bien es imprescindible para conseguir una buena inserción internacional, pero en el marco de las restricciones recién enumeradas". Escudé (1987): Condicionantes externos de la democracia argentina, p. 145-164.

región, y que agregó otro elemento que complicó aún más la gestión en los primeros años del nuevo régimen²¹².

La retirada militar del poder fue desordenada, pero no total; este factor tendría sus efectos sobre la forma que adquirió el proceso de reestructuración de la institución militar en la nueva organización del Estado de la joven democracia, y sobre la solución jurídica a las violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar. Luego de años en el poder, los militares conservaron autonomía organizacional, recursos institucionales y de fuerza como para mantener una capacidad de presión sobre los gobiernos civiles, pero con un fuerte deterioro de la unidad interna, por competentes etarios²¹³. La principal fuerza, el ejército, arribó a la transición en medio de una crisis profunda que "horizontalizó" al arma, separando a los oficiales superiores de los oficiales jefes y subalternos²¹⁴. Los temas de este conflicto giraron alrededor de las denuncias de ilícitos cometidos por funcionarios militares durante su gestión, por la función operativa que le cupo a cada uno en los enfrentamientos con la subversión y en la guerra de Malvinas²¹⁵. La relación entre la institución militar y el gobierno fue de una *subordinación condicionada* a la resolución de temas específicos²¹⁶.

El evidente, entonces, que el proceso de transición a la democracia en Argentina fue complejo, con fuertes restricciones institucionales, económicas, sociales, y externas. La

²¹² Griffith-Jones y Sunkel señalan que, entre otras consecuencias, el impago mexicano originó una restricción de crédito hacia América Latina, que forzó la masiva reestructuración de la deuda externa de varios países. La crisis de la deuda tuvo orígenes y causas comunes, tanto en el rol de los países desarrollados y del sistema financiero internacional, como en las estrategias nacionales que tornaron vulnerables a los países en desarrollo. Griffith-Jones y Sunkel (1986): Debt and Development Crises in Latin America: The End of An Illusion, 96-119.

²¹³ Garretón (1984): Proyecto, trayectoria y fracaso de los regímenes militares en el Cono Sur: un balance, p. 5-23.

²¹⁴ La clasificación que rige en esta institución castrense agrupa a los grados de subteniente a capitán en el rango de oficiales subalternos, a los mayores y a los tenientes coroneles como jefes, y a los coroneles y generales en el de oficiales superiores.

²¹⁵ Criterio al analizar la complejidad de la crisis militar, apuntaba que, "... La crisis militar, presupuesto de las anarquías, condición de las guerras interiores, existe. El "repliegue" de la Fuerza Aérea y de la Armada puede ser un gesto válido para distinguir responsabilidades futuras en el ámbito del poder militar. No lo es para la sociedad civil. ... Para la sociedad civil la responsabilidad del llamado Proceso, de su desarrollo y de su desenlace es de las Fuerzas Armadas en su conjunto. No hay repliegue que rompa para la sociedad aquella responsabilidad solidaria. ... en términos corporativos, amenaza con desprender la cúpula de la base, porque hay una sensación de división horizontal que hiere la autoridad de los que mandan. ... Hay, asimismo, una división vertical, ..., entre halcones y palomas". Criterio: La crisis militar. N.º 1884, año LV, 8 de julio de 1982.

²¹⁶ Fontana considera que "... la subordinación de las Fuerzas Armadas al gobierno constitucional quedó, entonces, subordinada al modo en que este último y el conjunto de la sociedad resuelvan dar respuesta a esta gran pregunta". Fontana (1986): *Ibíd.*, p. 35.

democracia se instaló con una pesada herencia de problemas a resolver en múltiples áreas del gobierno y del Estado. El difícil contexto descrito estuvo agravado, en la práctica, como ocurrió en otras experiencias de transiciones políticas, porque los factores que fueron necesarios y suficientes para provocar el derrumbe del régimen autoritario no fueron los mismos que permitiesen asegurar la consolidación del nuevo régimen. Este hecho ha sido bautizado por O'Donnell y Schmitter como "Principio de Stern"²¹⁷: se trata de ciertos factores que fueron determinantes en la caída de los gobiernos autoritarios (conflictos internos en el seno de la coalición dominante, decadencia institucional de los militares, etc.) pero que dejan de ser relevantes cuando comienzan a modificarse las reglas en el nuevo régimen o cuando surgen nuevos actores. A partir de aquí, algunos problemas que permanecían disimulados bajo la supuesta "paz social" del antiguo régimen se convirtieron en cuestiones fundamentales a las que se debió enfrentar y solucionar las autoridades del gobierno naciente²¹⁸.

Si bien, la clase política del nuevo régimen alcanzó la legitimidad de origen, inmediatamente tuvo por delante un desafío de grandes proporciones: la conquista de la legitimidad de medios.

²¹⁷ Los autores se refieren a Fritz Stern quién lo presentó -en sentido inverso- al distinguir la caída de la República de Weimar y el advenimiento del nacionalsocialismo en Alemania. O'Donnell y Schmitter (1988): Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre democracias inciertas, 4, p. 126. (la obra citada es: Stern, Fritz (1966): *The path to dictatorship: 1918-1933*. New York, Anchor).

²¹⁸ O'Donnell y Schmitter (1988): *Ibíd.*, p. 105-115.

8. La instauración de la democracia en Argentina:

Durante el año 1983 se realizó la campaña electoral en todo el país. El 30 de octubre se realizaron elecciones generales para la designación de las autoridades de los poderes ejecutivo y legislativo a nivel nacional, provincial y municipal. El triunfo radical en las elecciones presidenciales fue un acontecimiento novedoso. El antecedente más cercano de un triunfo radical en elecciones sin proscripciones se remontaba a la década del '20. Fue la primera vez que el peronismo era derrotado en elecciones sin restricciones. El resultado fue respetado por el conjunto de las fuerzas políticas y sociales²¹⁹.

El proceso de instauración democrática implicó la instalación en el poder de la nueva coalición de actores políticos y el establecimiento progresivo de todos los derechos políticos y civiles²²⁰. El comienzo se caracterizó por la aparición del pluralismo político no limitado, el funcionamiento del sistema de partidos políticos sin proscripciones ni exclusiones, la libre organización y representación de los intereses sindicales, empresariales y profesionales. Retornando a la definición de democracia presentada por Przeworski²²¹, la instauración dio lugar a la formación de una coalición democrática amplia, que se constituyó como resultado de la decisión de un grupo de fuerzas políticas y sociales que decidieron aceptar la forma democrática de resolver los problemas, sin coerción o violencia. La elección del Dr. Raúl R. Alfonsín como presidente de Argentina el 30 de octubre de 1983, la de los miembros del Congreso de la Nación, los gobernadores e intendentes, y los legisladores provinciales y municipales, poseyeron una clara legitimidad de origen. Pero, como se ha señalado, el nuevo régimen político

²¹⁹ La importancia de los resultados electorales es mostrada por Catterberg: "... Las elecciones generales de octubre de 1983 marcan un hito en la historia política argentina. El peronismo, fuerza hegemónica durante casi cuarenta años, fue derrotado por un margen considerable de votos en comicios sin proscripciones. La Unión Cívica Radical obtuvo el 52,9% de los votos (7.725.173) y el partido justicialista el 39% (5.994.406). ... La pronunciada diferencia de votos en favor de la U.C.R., particularmente en las áreas más urbanizadas e industrializadas, fue logrado mediante la concurrencia simultánea de sectores medios y altos, pero también con la decisiva participación de sectores bajos. Esta circunstancia fundamental y su complemento -la pérdida del peronismo del monopolio de los votos provenientes de los segmentos populares- marcó la expansión vertical de las bases sociales tradicionales del radicalismo y, con ello, la constitución de una "configuración" electoral ganadora". El autor destaca, también, el comportamiento de los sectores bajos estructurados (obreros especializados, técnicos y supervisores, empleados, vendedores y trabajadores semiespecializados de servicios) integrados plenamente a la sociedad, que se volcaron al radicalismo; del comportamiento electoral de los obreros sin calificación y trabajadores no especializados, que manifestaron sus preferencias por el justicialismo". Catterberg (1985): Las elecciones del 30 de octubre de 1983. El surgimiento de una nueva convergencia electoral, p. 259-265.

²²⁰ Morlino (1981): *Ibíd.*, p. 93-150.

²²¹ Przeworski (1988): Algunos problemas en el estudio de las transiciones a la democracia, p. 79-104.

heredó una pesada carga de problemas sin resolver que configuraron una situación de crisis multidimensional a la que se tuvo que enfrentar. A partir de entonces la fase de instauración democrática dejó su paso a la de su consolidación en la etapa infante.

EPÍLOGO:

Si bien la fase de la consolidación de la democracia queda fuera del objeto de estudio del presente trabajo, realizaremos las siguientes consideraciones: la consolidación puede ser analizada como la etapa de la transformación que no tiene por objeto la sustitución de un régimen por otro sino el desarrollo, confirmación y asentamiento del nuevo régimen²²². Es el proceso a través del cual el nuevo régimen adquiere coherencia, firmeza, arraigo y solidez. Hay varios aspectos que hacen a la solidez de este proceso²²³. El primer de ellos es la institucionalización de las estructuras de autoridad y de mediación del régimen democrático: partidos políticos, gremios, asociaciones empresariales, profesionales. La segunda cuestión está referido a la necesidad que tiene el gobierno de elaborar un conjunto de políticas para resolver los problemas heredados del antiguo régimen, así como los que vayan surgiendo en la propia gestión, aquí uno de los elementos clave es no dejar a ningún sector excluido, que pueda ser tentado a desafiar al régimen. El tercer elemento para la solidez del sistema es el asentamiento de los mecanismos de división y control de poderes, propios de una democracia republicana. La cuarta dimensión está vinculada con la ilusión *de y por* la democracia, que debe viajar con una mochila ligera de promesas para esquivar la desilusión. En un sentido análogo, en la consolidación hay una tarea cotidiana para asentar el *valor* de la democracia para la convivencia cívica y política entre todos los ciudadanos, avisando, con insistencia, la crucial distinción entre la agenda de problemas a resolver, en el marco de las restricciones existentes, respecto a la democracia como régimen político. Desde la perspectiva del diseño de este régimen político surge la cuestión de qué tipo de democracia es más propicia para su consolidación: presidencialista o parlamentaria²²⁴.

En el examen de la viabilidad para alcanzar la legitimidad de medios del nuevo régimen es importante detenerse en la fase del inicio del proceso de consolidación, y evaluar cuál es el programa inicial o plataforma partidaria u orden de prioridades esbozado por el partido ganador durante la campaña electoral que lo condujo al poder. Estos programas suelen crear expectativas que luego no pueden satisfacerse dentro del marco

²²² Morlino (1981): *Ibíd.*, p. 93-150.

²²³ Santamaría (1981): *Ibíd.*, p. 371-418.

²²⁴ Ver: Linz (1990): Democracia: Presidencialismo o parlamentarismo. ¿Hace alguna diferencia?, p. 41-108. Lijphart, Arendt (1990): Presidencialismo y democracia de mayoría, p. 109-128. Mainwaring (1990): Presidentialism in Latin América, p. 157-179

de los recursos existentes y, en consecuencia, pronto se convierten en un problema adicional para el nuevo régimen. Existe la tentación de incluir en la agenda preelectoral problemas complejos, no resueltos durante largos períodos. La magnitud y la simultaneidad de éstos puede desbordar a los recursos de un liderazgo político con poca o nula experiencia administrativa, información y escasos recursos financieros y económicos para atender a las diversas demandas insatisfechas²²⁵. Dada la escasez de recursos, el gobierno deberá optar estableciendo prioridades. Aquí juega un rol importante la formación de coaliciones políticas y sociales que apoyen al régimen, y de diferentes coaliciones parciales en torno a los puntos en discordia²²⁶. La coalición general apunta a estabilizar y consolidar el régimen democrático, más allá de las diferencias sobre el diagnóstico y las políticas respecto a cuestiones concretas. Los actores deben considerar a este régimen político como un verdadero sistema de procesamiento y resolución de conflictos intergrupales. Es decir, un proceso en el que todos los intereses son sometidos a la incertidumbre, en clara contraposición con lo que ocurre en regímenes autoritarios, en los que coalición gobernante tienen un alto grado de control formal, no necesariamente real, sobre la situación²²⁷. Las coaliciones parciales son de naturaleza dinámica, y se ajustan de acuerdo con el estado "circunstancial" de los problemas. En este punto es prudente insistir sobre la necesidad de que no existan sectores o grupos sistemáticamente excluidos para que no sean inducidos a abandonar el respaldo al régimen político o, en casos extremos, a desafiarlo. La fortaleza o debilidad de la consolidación democrática dependerá, entonces, de varios factores: del grado de legitimidad de origen, de la eficacia de las decisiones, de la efectividad de las estructuras de autoridad y de mediación del régimen, del funcionamiento pleno de la división de los poderes y de los mecanismos de control existentes²²⁸. La consolidación es la fase de fragua de las normas, de los valores, de las reglas de juego, de los comportamientos, y de las instituciones propias de la democracia²²⁹.

²²⁵ Linz señala, en este sentido, que "... Puede ganarse mucho seleccionando un número limitado de problemas e introduciendo a un número relativamente rápido de reformas que puedan beneficiar a pequeños y a veces muy visibles minorías". Linz (1987): El quiebre de las democracias, p. 82.

²²⁶ Flóres (1988): *Ibíd.*, p. 212 y ss.

²²⁷ Przeworski (1988): *Ibíd.*

²²⁸ Morlino (1981): *Ibíd.*

²²⁹ Loewenstein: *Ibíd.* p. 30 y ss.

Retornando al inicio de este trabajo, y recostando el análisis en la dimensión teleológica de la política, parece oportuno pensar que la democracia debe perseguir la utopía del bien común²³⁰. Es una empresa que necesita de tiempo, de diálogo, de amistad política, de tolerancia y de contención. No es un proceso lineal, puede presentar momentos de aparentes retrocesos, de turbulencias, de confusiones, de tensiones, de fricciones, pero en caso de arribar a buen puerto terminará fraguando la estructura democrática de convivencia de la sociedad. Al proceso de consolidación puede considerárselo terminado una vez que el nuevo régimen este plenamente institucionalizado, alcanzando un nivel de autonomía suficiente para regir su funcionamiento de acuerdo con la lógica que le imponen sus principios de organización. A partir de aquí, comienza la difícil tarea de conservación del edificio democrático, tal cual nos advierte Jouvenel²³¹.

Nos propusimos estudiar el cambio de régimen político ocurrido en la Argentina en el período 1976-1983, en consecuencia, el proceso de consolidación democrática surgido a partir del 10 de diciembre de 1983 escapa al mismo. El proceso de cambio de régimen político en la Argentina abrió la posibilidad de consolidar un nuevo modelo político. El desafío de la presente década es, precisamente, complementar el proceso de cambio y forjar el nuevo sistema. En términos de legitimidad de origen, las autoridades electas en 1983 recibieron un claro apoyo popular como resultado de elecciones libres y sin proscripciones; su consolidación dependerá de alcanzar la legitimidad de ejercicio, de la forma en que se ejerza el poder, y de la percepción que se formen los ciudadanos sobre los resultados de las políticas de los gobiernos democráticos.

Las instituciones, los actores de la sociedad civil, de la sociedad política, y del Estado tiene un rol decisivo en la prosecución de la legitimidad de medios. En clave institucional, la función primordial del gobierno democrático es garantizar el piso de los derechos sociales para ejercer los derechos civiles y políticos. El Estado en las democracias

²³⁰ Según la expresión de Bobbio: *"Sobre todo es lícito hablar del orden como fin mínimo de la política porque éste es, o debería ser, el resultado directo de la organización del poder coactivo, porque, en otras palabras, este fin (el orden) se unifica con el medio (el monopolio de la fuerza): en una sociedad compleja, basada en la división del trabajo, en la estratificación de clases, en algunos casos incluso en la superposición de gentes y razas diferentes, sólo el recurso en última instancia a la fuerza impide la disgregación del grupo, el retorno, como habrían dicho los antiguos, al estado de naturaleza"*. *Política*, p. 1219.

²³¹ *"...Los problemas planteados son propiamente políticos, y los cuidados que exigen, cuidados políticos también ... (Ello lo lleva a) ... definir la actividad política pura como la actividad constructiva, que consolida y conserva agregados humanos"*. López, Mario Justo (1987): *Ibíd.* p. 9.

pluralistas tiene funciones indelegables como son: la justicia, la educación, la salud, la seguridad, la defensa, aunque pueda compartir alguna de ellas con los sectores privados. En clave económica, la gestión del gobierno debe crear entornos propicios para el funcionamiento de los mercados competitivos, controlar el funcionamiento de los mercados imperfectos, promover y aplicar un conjunto coherente de políticas macroeconómicas y sectoriales, atender la desigualdad social, y evitar la exclusión social.

La democracia, en perspectiva propositiva más que prescriptiva, es una apuesta a la conquista de la legitimidad de fines, hacia el gobierno representativo que nos describiera Stuart Mill²³². En este sentido, es oportuno recordar lo que Tocqueville llamaba el arte de asociación necesario para una democracia: *"... En los pueblos democráticos la ciencia de la asociación es la fundamental, el progreso de todas las demás depende del suyo. Entre las leyes que rigen a las sociedades humanas, hay una que parece mucho más precisa y clara. Para que los hombres conserven su civilización o la adquieran, es preciso que la práctica asociativa se desarrolle y perfeccione en la misma proporción que aumenta la igualdad en las condiciones humanas"*²³³. Este arte debe ser practicado por los ciudadanos, algunos de los cuales son dirigentes, ninguna delegación del poder lo reemplaza.

²³² Stuart Mill: Del Gobierno representativo.

²³³ Tocqueville: La Democracia en América II, p.99.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:

- AAVV (1983): *1943-1982. Historia política de Argentina*. Editorial de Belgrano.
- AAVV (1985): *Los límites de la democracia I y II*. Buenos Aires, CLACSO.
- AAVV (1986): *Democracia y desarrollo en América Latina*. Buenos Aires, Grupo Editor de América Latina (G.E.L.).
- AAVV (1987): *Lecciones para demócratas en transición*. Buenos Aires, Editorial de Belgrano.
- AAVV (1987): *Sobre la consolidación de la democracia*. Buenos Aires, Editorial de Belgrano.
- AAVV (1989): *"Relaciones cívico-militares: la experiencia argentina". Santo Domingo, Informe de la Conferencia Internacional*. National Democratic Institute for International Affairs.
- Acuña, Carlos (1980): "El diálogo del gobierno". *Revista CIAS*. XXIV (295-296): 19-52.
- Aftalión, Marcelo (1979): "Argentina 1980: cambio y recambio". *Criterio*. LII (1810): 200-208. Buenos Aires.
- Alberti, Jorge y Franco Castiglioni (1985): "Política e ideología en la industrialización argentina". *Boletín Informativo Techint*. 239: 7-20, octubre-diciembre. Buenos Aires.
- Aldmond, Gabriel y Bingham Powell (1978): *Política comparada. Una concepción evolutiva*. Buenos Aires, Paidós.
- Alfonsín, Ricardo (1980): *La cuestión argentina*. Buenos Aires, Torres Agüero Editor.
- Alfonsín, Ricardo (1983): *Ahora. Mi propuesta política*. Buenos Aires, Sudamericana-Planeta.
- Alfonsín, Ricardo (1983): "Dilemas de la transición". En: Alfonsín, Ricardo: *Ahora. Mi propuesta política*: 77-85.
- Amnesty International (1980): "Testimony on Secret Detention Camps in Argentina". Febrero. Londres, Amnesty International Publications.
- Arnaudo, Aldo y Rafael Conejero (1985): "Anatomía de las quiebras bancarias de 1980." *Desarrollo Económico*. 24 (96): 605-616, enero-marzo. Buenos Aires.
- Arriazu, Ricardo (1981): "Aislacionismo: ¿opción o utopía". *Criterio*. LIV (1873-1874): 777-783. Buenos Aires.
- Azpiazú, Daniel, Eduardo Basualdo y Mario Khavisse (1986): *El nuevo poder económico en la Argentina de los años '80*. Buenos Aires Legasa.
- Baliño, Tomás (1988): "La crisis bancaria argentina de 1980". Mimeo. Banco Central de la República Argentina. Buenos Aires.
- Baloyra, Enrique (1981): "la transición del autoritarismo a la democracia en el Sur de Europa y América Latina: problemas teóricos y bases de comparación". En: Santamaría, Julián (Compilador): *Transición a la democracia en el Sur de Europa y América Latina*: 287-346.

- Baloyra, Enrique (1987): "Argentina: transición o disolución." En: AAVV: *Lecciones para demócratas en transición*: 7-61.
- Bañón, Rafael y José Olmeda (Compiladores) (1984): *La institución militar en el estado contemporáneo*. Buenos Aires, Alianza.
- Barros, Alexandre de y Edmund Campos (1980): "The politics of military intervention and withdrawal in South America". Instituto Universitario de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ). Octubre. Rio de Janeiro.
- Beltrán, Virgilio (compilador) (1978): *El futuro político argentino*. Buenos Aires, Editorial del Instituto.
- Beltrán, Virgilio R. (1978): "El futuro político de la argentina: una apreciación crítica general". En: Beltrán, Virgilio (compilador): *El futuro político en Argentina*: 210-227.
- Beltrán, Virgilio R. (1987): "Political Transition in Argentina: 1982 to 1985". *Armed Forces and Society*. 13: 215-233. Invierno.
- Bertín, Hugo y Adriana Moiso (1988): "Elementos para la interpretación de lo militar en la sociedad argentina". Universidad Nacional de La Plata. Mimeo.
- Bidart Campos, Germán: (1980): "El Estado argentino y su constitución". *Criterio*. LIII (1849-1850): 756-763. Buenos Aires.
- Bobbio, Norberto (1985): "¿Podrá sobrevivir la democracia?" En: AAVV: *Los límites de la democracia I*: 59-70.
- Bobbio, Norberto (1991): "Política". En: Bobbio, Norberto, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino: *Diccionario de política*. México DF, Siglo XXI Editores: 1215-1225.
- Borón, Atilio A. (1986): "De la política a la guerra. Notas sobre los orígenes de la militarización de la cultura política en Argentina". *EURAL*, Documento de trabajo 14, Buenos Aires.
- Botana, Natalio R., Rafael Braun y Carlos Floria A. (1973): *El régimen militar 1966-1970*. Buenos Aires, Astrea.
- Botana, Natalio R. (1980): "La república representativa. A propósito de la mediación política en Argentina". *Criterio*. LIII (1849-1850): 792-798. Buenos Aires.
- Botana, Natalio R. (1987): "Dos dilemas internos". En: AAVV (1987): *Sobre la consolidación de la democracia*: 177-182.
- Botana, Natalio R. (1988): "La tradición política en la argentina moderna". En: Pinto, Julio (Compilador): *Ensayos sobre la crisis política Argentina/2*: 105-122.
- Botana, Natalio R: (1988): "Tradiciones e instituciones en la democracia argentina". En: Garzón Valdés, Ernesto, Manfred Mols y Arnold Spitta (Compiladores): *La nueva democracia argentina (1983-1986)*: 29-47. Buenos Aires, Editorial Sudamericana.
- Braun, Rafael y Carlos Floria (1978): "La educación política". *Criterio*. LI (1801-1802): 780-787. Buenos Aires.
- Braun, Rafael (1980): "Los valores básicos". *Criterio*. LIII (1849/1850): 739/749. Buenos Aires.

- Brodersohn, Mario (1973): "Sobre 'Modernización y autoritarismo' y el estancamiento inflacionario argentino". *Desarrollo Económico*. 13 (51): 591-605, octubre-diciembre. Buenos Aires.
- Bruno, Ángel, Marcelo Cavarozzi y Vicente Palermo (Compiladores) (1985): *Los derechos humanos en la democracia*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. Colección Biblioteca Política Argentina, 92.
- Bustamante, Jorge E. (1988): *La república corporativa*. Buenos Aires, EMECE.
- CADHU (1977): "Argentina: proceso al genocidio". Comisión Argentina por los Derechos Humanos. Madrid.
- Canitrot, Adolfo (1981): "La disciplina como objetivo de la política económica. Un ensayo sobre el programa económico del gobierno argentino desde 1976". *Desarrollo Económico*. 83 (21): 453-475, octubre-diciembre. Buenos Aires
- Canitrot, Adolfo (1982): "Teoría y práctica del liberalismo. política antiinflacionaria y apertura económica en la Argentina, 1976-1981". *Desarrollo Económico*. 21 (82): 131-189, julio-setiembre. Buenos Aires.
- Canitrot, Adolfo (1983): *Orden social y monetarismo*. Buenos Aires, CEDES.
- Caputo, Dante (1983): "Balance provisorio". En: Waldman, Peter y Garzón Valdés, Ernesto (compiladores) (1982): *El poder militar en Argentina (1976-1981)*: 123-136.
- Carballal, Teresa y Russell, Roberto (1985): "Democracia y autoritarismo en Argentina". En: Orrego Vicuña (Compilador): *Transición a la democracia en América Latina*. Buenos Aires, Grupo Editor de América Latina (G.E.L.).
- Cardoso, Osca, Raúl Kirschbaum y Eduardo Van der Kooy, Eduardo (1983): *Malvinas: la trama secreta*. Buenos Aires, Sudamericana.
- Cardoso, Fernando E. (1985): "¿Transición política en América Latina?" En: AAVV (1985): *Los límites de la democracia II*: 129-142.
- Cavallo, Domingo (1982): *La reforma financiera*. Buenos Aires, Banco Central de la República Argentina.
- Catterberg, Edgardo (1985): "Las elecciones del 30 de octubre de 1983. El surgimiento de una nueva convergencia electoral". *Desarrollo Económico*. 98 (25): 259-267, julio-setiembre. Buenos Aires.
- Catterberg, Edgardo (1987): "La cultura política y la opinión pública en la transición a la democracia: el caso argentino." En: AAVV: *Lecciones para demócratas en transición*: 63-98.
- Catterberg, Edgardo (1989): *Los argentinos y la política*. Buenos Aires, Planeta.
- Catterberg, Edgardo (1990): "The Balance of transition. Perceptions of Governmental Efficacy in the Southern Cone." IPSA. Buenos Aires.
- Cavarozzi, Marcelo (1982): "The recurrence of Authoritarianism and prospects of Democracy in Argentina. Mimeo. Buenos Aires
- Cavarozzi, Marcelo (1983): *Autoritarismo y democracia (1955-1983)*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. Colección Biblioteca Política Argentina, 21.

- Cavarozzi, Marcelo (1985): "Derechos humanos y cultura política: blandos y maximalistas". En: Bruno, A., et al. (Compiladores): *Los derechos humanos en la democracia*. Buenos Aires: 15-18.
- Cavarozzi, Marcelo (1988): "Peronismo y radicalismo: transiciones y perspectivas". *Conflictos y proceso en la historia argentina*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. Colección Biblioteca Política Argentina, 6.
- Cheresky, Isidoro y Jacques Chonchol (compiladores) (1985): *Crisis y transformación de los regímenes autoritarios*. Buenos Aires, EUDEBA.
- Cheresky, Isidoro (1985): "Hacia la argentina postautoritaria". En: Cheresky, Isidoro y Chonchol, Jacques: *Crisis y transformación de los regímenes autoritarios*: 21-31.
- Colabella, Santos (1987): "La crisis argentina". En: García Delgado, Daniel (Compilador): *Los cambios en la sociedad política*: 74-138.
- Collier, David (compilador) (1985): *El nuevo autoritarismo en América Latina*. México, Fondo de Cultura Económica.
- Collier, David (1985): "Visión general del modelo burocrático autoritario". En: Collier, David (compilador): *El nuevo autoritarismo en América Latina*: 29-38.
- CONADEP (1984): *Nunca más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas*. Buenos Aires, EUDEBA.
- Conferencia Episcopal Argentina (1981): *Iglesia y comunidad Nacional*. Asamblea Plenaria 42, 4 al 9 de mayo. Buenos Aires.
- Cortés Conde, Roberto (1981): "El ámbito de lo público y de lo privado." En: Floria, Carlos (Compilador) (1981): *Reflexiones sobre la argentina política*: 1-15.
- Corradi, Juan (1985): "La cultura del miedo en la sociedad civil: reflexiones y propuestas. En: Cheresky, Isidoro y Jacques Chonchol (compiladores) (1985): *Crisis y transformación de los regímenes autoritarios*: 171-188.
- Costa Pinto, L. A. (1981): "Transición de regímenes autoritarios a democráticos y viceversa". En: Santamaría, Julián (compilador): *Transición a la democracia en el Sur de Europa y América Latina*: 347-370.
- Criterio (1976): "La arrogancia del poder". Editorial. *Criterio*. XLVIII (1733-1734): 76, 26 de febrero. Buenos Aires.
- Criterio (1976): "¿Qué pensar?" Editorial. *Criterio*. XLIX (1735): 100, 11 de marzo. Buenos Aires.
- Criterio (1976): "El gobierno militar" Editorial. *Criterio*. XLIX (1376): 166, 8 de abril. Buenos Aires.
- Criterio (1976): "Ganar la paz?" Editorial. *Criterio*. XLIX (1742): 324. Buenos Aires.
- Criterio (1976): "La desmesura del odio?" Editorial. *Criterio*. XLIX (1744): 390. Buenos Aires.
- Criterio (1980): "La propuesta política?" Editorial. *Criterio*. LII (1827-1828), 24 de enero. Buenos Aires.
- Criterio (1981): "¿Progreso o reversión política?" Editorial. *Criterio*. LIV (1858), 23 de abril de 1981. Buenos Aires.

- Criterio (1982): "La crisis militar". Editorial. Criterio. LV (1884), 8 de julio. Buenos Aires.
- Criterio (1983): "El peronismo gobernante y la guerra interna (1973-1976)". En: En: AAVV (1983): *1943-1982. Historia política de Argentina*. 104-147.
- Dagnino Pastore, José M. (1988): *Crónicas económicas. Argentina, 1969-1988*. Buenos Aires, Crespillo.
- Dagnino Pastore, José M. (1988): "Evaluación de un experimento antiinflacionario en Argentina, 1979-1981". En: Dagnino Pastore, José M. (1988): *Crónicas económicas. Argentina, 1969-1988*: 77-115.
- Dagnino Pastore, José M. (1988): "Progreso y perspectivas del programa de ajuste en la Argentina". En: Dagnino Pastore, José M. (1988): *Crónicas económicas. Argentina, 1969-1988*: 168-182.
- Dahl, Robert (1971): *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven, Yale University.
- Dahl, Robert (1983): *Análisis político actual*. Buenos Aires, EUDEBA.
- Dahl, Robert (1989): *Un prefacio a la teoría democrática*. Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, G.E.L.
- Delich, Francisco (1983): "Desmovilización social, reestructuración obrera y cambio sindical". En: Waldman, Peter y Garzón Valdés, Ernesto (compiladores) (1982): *El poder militar en Argentina (1976-1981)*: 101-122
- Delich, Francisco (1983): "La construcción social de la legitimidad política en procesos de transición a la democracia". *Crítica & Utopía*, 9, Buenos Aires.
- De Riz, Liliana (1981): *Retorno y derrumbe: el último gobierno peronista*. México, Ediciones Folios.
- De Riz, Liliana (1984): "Argentina: ni democracia estable ni régimen militar". En: Oszlak, Oscar (Compilador): *Proceso", crisis y transición democrática/2*: 7-28.
- Diamandouros, P. Nikiforos (1981): "La transición de 1974 de un régimen autoritario a un régimen democrático en Grecia: datos básicos e interpretación desde una perspectiva europea". En: Santamaria, Julián (compilador): *Transición a la democracia en el Sur de Europa y América Latina*: 199-242.
- Diario del Juicio: números 1 a 36, 27 de mayo de 1985 al 28 de enero de 1986. Diario Perfil. Buenos Aires.
- Di Tella, Guido (1986a): "Argentina's Most Recent Inflationary Cycles, 1975-85". In: Thorp, Rosemary and Lawrence Whitehead (compiladores): *Latin America Debt and the Adjustment Crisis*: 162-207. Oxford, The Macmillan Pres.
- Di Tella, Guido (1986b): *Perón-Perón. 1973-1976*. Buenos Aires Hyspamérica.
- Di Tella, Torcuato (1981): "Working-class organization and politics in Argentina". *Latin América Research Review*. 16 (2): 33-56.
- Di Tella, Torcuato (1985): "La democracia: ¿será posible?" En: AAVV (1985): *Los límites de la democracia I*: 187-202.
- Díaz Alejandro, Carlos (1970): *Essays on the Economic History of the Argentine Republic*. New Haven, Yale University Press.

- Dornbusch, Rudiger y Juan Carlos de Pablo (1988): *Deuda externa e inestabilidad macroeconómica en Argentina*. Buenos Aires, Sudamericana.
- Dornbusch, Rudiger (1989): "Argentina after Martínez de Hoz, 1981-3". In: Di Tella, Guido and Rudiger Dornbusch (compiladores): *The Political Economy of Argentina, 1946-83*: 286-315. London, The Macmillan Press.
- Dos Santos, Mario R. y María Grossi (1984): "La concertación social: una perspectiva sobre instrumentos de regulación económica en procesos de democratización". En: Oszlak, Oscar (Compilador): *Proceso", crisis y transición democrática/1*: 136-166.
- Druetta, Gustavo (1983): "Guerra, política y sociedad en la ideología de la corporación militar". *Crítica & Utopía*. 10-11: 105-152.
- Echegaray, Fabián y Raimondo Ezequiel (1987): *Desencanto político, transición y democracia*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. Colección Biblioteca Política Argentina, 177.
- Eisendat, Shmuel N. (1985): "Los resultados de las revoluciones: una reflexión sobre las sociedades autocráticas y democráticas postrevolucionarias". En: AAVV (1985): *Los límites de la democracia I*: 71-96.
- Errandonea, Alfredo (h) (1987): "Algunas hipótesis sobre el cambio político en la argentina actual". En: García Delgado, Daniel (compilador): *Los cambios en la sociedad política (1976-1986)*: 11-29.
- Escudé, Calos (1987): "Condicionantes externos de la democracia argentina". En: AAVV: *Sobre la consolidación de la democracia*: 145-164.
- Etchepareborda, Roberto (1983): "Elementos bibliográficos para una historia argentina (1943-1982)". En: AAVV (1983): *1943-1982. Historia política de Argentina*: 311-371.
- Feldman, Ernesto (1983): "La crisis financiera argentina: 1980-1982. Algunos comentarios." *Desarrollo Económico*. 23 (91): 449-455, octubre-diciembre. Buenos Aires
- Feldman, Ernesto y Juan Sommer (1986): *Crisis financiera y endeudamiento externo argentino*. Buenos Aires Centro Editor de América Latina (C.E.A.L.). pp. 189.
- Fernández, Roque (1983): "La crisis financiera argentina: 1980-1982". *Desarrollo Económico*. 23 (89): 79-97, abril-junio. Buenos Aires.
- Fernández, Roque (1985): "The Expectations Management Approach to Stabilisation in Argentina during 1976-82". *World Development*. 23 (8): 871-892. Washington DC.
- Fernández Baeza, María (1985): "La intervención militar en la política en América Latina": *Revista de Estudio Políticos*, 48, noviembre-diciembre. Madrid.
- Ferrero, Guglielmo (1943): *El poder. Los genios invisibles de la ciudad*. Bs. As., Interamericana.
- Finer, Samuel E. (1969): *Los militares en la política mundial*. Buenos Aires, Sudamericana.

- Fitch, John Samuel (1987): "*The Armed Forces and Democracy in America*". Preparado para la sesión plenaria Diálogo Americano. Mimeo. Octubre. Washington, D.C.
- Fitch, John Samuel (1987): "*Theoretical Model: core assumption; assessment of Civil-Military tensions and short-term coup risk*". Documento preparado para el Inter-American Dialogue. Mayo. Washington, D.C.
- Flisfich, Ángel, Lechner Norberto y Moulian, Tomás (1986): "Problemas de la democracia y de la política democrática en América Latina". En: AAVV: *Democracia y desarrollo en América Latina*: 51-103. Buenos Aires.
- Flisfich, Ángel (1982): "Notas acerca de la idea del reforzamiento de la sociedad civil". *Crítica & Utopía*. 6: 11-23. Buenos Aires.
- Flisfich, Ángel (1983): "El surgimiento de una nueva ideología democrática en América Latina". *Crítica & Utopía*. 8. Buenos Aires
- Flisfich, Ángel (1986): "Reflexiones algo oblicuas sobre el tema de la concertación". *Desarrollo Económico*. 26 (101): 3-20. Buenos Aires.
- Floria, Carlos y Marcelo Monserrat (compiladores) (1977): *Pensar la República*. Buenos Aires, Editorial Persona a Persona.
- Floria, Carlos (1978): "El régimen de transición y el sistema de partidos". En: Beltrán, Virgilio (compilador): *El futuro político en Argentina*: 109-131.
- Floria, Carlos (compilador) (1981): *Reflexiones sobre la argentina política*. Buenos Aires, Editorial de Belgrano.
- Floria, Carlos (1981): "La subordinación militar y la civilización del poder." En Floria, Carlos (Compilador). pp. 89-113.
- Floria, Carlos (1983): "El régimen militar y la argentina corporativa (1966-1972)". En: AAVV: *1943-1982. Historia política de Argentina*: 75-103.
- Floria, Carlos (1986): "Argentina: algunas claves políticas". *Vuelta 2 Sudamericana*. 2 (1): 6-12.
- Floria, Carlos (1986): *Análisis introductorio de la política y del Estado*. Buenos Aires, Astrea.
- Floria, Carlos (1987): "Dilemas de la consolidación democrática Argentina". En: AAVV: *Sobre la consolidación de la democracia*: 183-196.
- Floria, Carlos (1988): "La transición hacia la democracia pluralista". En: Pinto, Julio (Compilador): *Ensayos sobre la crisis política argentina/2*. 206: 175-220.
- Floria, Carlos y García Belsunce, César A. (1988): *Historia política de la Argentina Contemporánea. 1880-1983*. Buenos Aires, Alianza.
- Fodor, Jorge (1985): "Notas para la economía política de la industria argentina". *Boletín Informativo Techint*. 239: 21-41, octubre-diciembre. Buenos Aires
- Fontana, Andrés (1981): "Armed Forces and Neoconservative Ideology: State shrinking in Argentina, 1976-1981". Trabajo presentado en la conferencia sobre Análisis Comparativo de Procesos de Privatización. Instituto de Estudios Latinoamericanos. Austin, Universidad de Texas.

- Fontana, Andrés (1984): *Fuerzas Armadas, partidos políticos y transición a la democracia*. Buenos Aires, CEDES.
- Fontana, Andrés (1986): "De la crisis de Malvinas a la subordinación condicionada: conflictos intramilitares y transición política en Argentina". En: Working paper 74, Agosto. Kellogg Institute, University of Notre Dame, Notre Dame.
- Fontana, Andrés (1987): "La política militar del gobierno constitucional argentino". En: Nun, José y Portantiero, Juan Carlos (Compilador): *Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina*: 375-418. Buenos Aires, Puntosur.
- Fontana, Andrés (1990), "La política militar en un contexto de transición, 1983-1990". CEDES, *Documentos* 34. Buenos Aires
- Fraga, Rosendo (1988): *Ejército del escarnio al poder (1973-1976)*. Buenos Aires, Planeta.
- Frenkel, Roberto y Mario Damill (1987): "De la apertura a la crisis financiera. Un análisis de la experiencia argentina de 1977-1982". *Ensayos Económico*. 107-122. Buenos Aires.
- Gaba, Ernesto (1981): "La reforma financiera argentina." *Ensayos Económicos*. 19. 1-52. Banco Central de la República Argentina. Buenos Aires.
- Gallo, Ezequiel (1981): "Reflexiones sobre la crisis de la democracia argentina". En: Floria, Carlos (Compilador): *Reflexiones sobre la argentina política*: 17-30.
- García Delgado, Daniel (Compilador) (1987): *Los cambios en la sociedad política (1976-1986)*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. Colección Biblioteca Política Argentina, 172.
- García Delgado, Daniel (1987): "Cultura política y partidos en la sociedad argentina". En: García Delgado, Daniel (compilador): *Los cambios en la sociedad política (1976-1986)*: 41-73.
- García Delgado, Daniel y Marcelo Stiletano (1988): "La participación de los militares en los nuevos autoritarismos". *Opciones* (Ex Alternativas). 14: 53-86, mayo-agosto. Santiago de Chile.
- García-Pelayo, Manuel (1973): *Los mitos políticos*. Madrid, Alianza.
- Garretón, Manuel A. (1978): "De la seguridad nacional a la nueva institucionalización. Notas sobre la trayectoria ideológica del nuevo Estado Autoritario". *Revista Mexicana de Sociología*. 4 (40): 1259-1282. México DF.
- Garretón, Manuel A. (1982): "Evolución política de la transición a la democracia en el régimen militar chileno". FLACSO, Documento de Trabajo 148. Santiago de Chile.
- Garretón, Manuel A. (1984): "Proyecto, trayectoria y fracaso de los regímenes militares en el Cono Sur: un balance". *Opciones* (Ex Alternativas). 2: 5-23. Santiago de Chile.
- Garzón Valdés, Ernesto (1983): "La emigración argentina. Acerca de sus causas ético-políticas". En: Waldman, Peter y Garzón Valdés, Ernesto (compiladores) (1982): *El poder militar en Argentina (1976-1981)*: 179-204.
- Garzón Valdés, Ernesto, Manfred Mols y Arnold Spitta (compiladores) (1987): *La nueva democracia argentina (1983-1986)*. Buenos Aires, Sudamericana.

- Garzón Valdés, Ernesto (1987): "La democracia argentina actual: problemas ético-políticos de la transición". En: Garzón Valdés, Ernesto et al. (compiladores): *La nueva democracia argentina (1983-1986)*: 237-258.
- Geller, Lucio (1981): "Análisis de una situación de relaciones de fuerzas: Argentina, 1976-1981". *CICSO*, Cuadernos 40. Buenos Aires.
- Gillespie, Richard (1988): *Montoneros. Los soldados de Perón*. Buenos Aires, Sudamericana.
- Godoy Arcaya, Oscar (compilador) (1990): *Hacia una democracia moderna: la opción parlamentaria*. Santiago, Ediciones de la Universidad Católica de Chile.
- Gómez, José M. y Eduardo Viola (1984): "Transición desde el autoritarismo y potencialidades de invención democrática en la Argentina de 1983". En: Oszlak, Oscar (Compilador): *"Proceso", crisis y transición democrática/2*: 29-42.
- Gopeguy, Pedro (1981): "La sociedad argentina hacia la Republica". *Criterio*. LIV (1870): 641-645. Buenos Aires. Buenos Aires.
- Grabendorff, Wolf (1983): "¿De país aislado a aliado preferido? Las relaciones de Argentina y Estados Unidos: 1976-1981". En: Waldman, Peter y Garzón Valdés, Ernesto (compiladores) (1982): *El poder militar en Argentina (1976-1981)*: 155-168.
- Graham-Yooll, Andrew (1984): "The Press in Argentina, 1973-1978". Londres. Writers and Scholars Educational Trust.
- Graham-Yooll, Andrew (1984): *A State of Fear. Memories of Argentina's Nightmare*. Londres, Eland.
- Guisarri, Adrián (1989): *La Argentina informal. Realidad de la vida económica*. Buenos Aires EMECE.
- Graciarena, Jorge (1985): "La democratización en la sociedad y la política. Apuntes sobre un caso concreto". En: AAVV (1985): *Los límites de la democracia II*: 191-202.
- Griffith-Jones, Stephany y Osvaldo Sunkel (1986): *Debt and Development Crises in Latin America: The End of An Illusion*. Oxford, Oxford University Press.
- Groisman, Enrique I. (1985): "El sistema jurídico argentino frente a las secuelas del "Proceso de Reorganización Nacional"". En: Rouquié, Alain y Schvarzer, Jorge (Compilador): *¿Cómo renacen las democracias?*: 213-225.
- Groisman, Enrique I. (1987): *La Corte Suprema de Justicia durante la dictadura (1976-1983)*. CISEA. Buenos Aires.
- Hermet, Guy, Alain Rouquié y Juan Linz (1982): *¿Para qué sirven las elecciones?* México. Fondo de Cultura Económica.
- Hermet, Guy (1982): "Las elecciones en los regímenes autoritarios: bosquejo de marco de análisis". En: Hermet, Guy, Alain Rouquié y Juan Linz (1982): *¿Para qué sirven las elecciones?*: 18-53.
- Huneus, Carlos (1981): "La transición a la democracia en España. dimensiones de una política consociacional". En: Santamaría, Julián (Compilador): *Transición a la democracia en el Sur de Europa y América Latina*: 243-286.

- Huneus, Carlos (1984): "La democracia en Argentina: comentarios desde el otro lado de los Andes". *Opciones* (Ex Alternativas). 2: 145-158, enero-abril. Santiago de Chile.
- Huneus, Carlos (1985): "La transición a la democracia en España: experiencias para América Latina". En: Orrego Vicuña, Francisco (Compilador): *La transición a la democracia en América Latina*: 165-183.
- Huneus, Carlos (1986): "Autoritarismo, cuestión sucesoria y transición a la democracia: España, Brasil y Chile". En: *Opciones* (Ex Alternativas). 8: 138-180, enero-abril. Santiago de Chile.
- Huneus, Carlos (1986): "La dinámica de los nuevos autoritarismos: Chile en una perspectiva comparada". *Revista de Estudios Políticos. Nueva Época*. 54: 105-166, noviembre-diciembre. Madrid.
- Huneus, Carlos (1988): "El Ejército y la política en el Chile de Pinochet. Su magnitud y alcance". *Opciones* (Ex Alternativas). 14: 87-136, mayo-agosto. Santiago de Chile.
- Huneus, Carlos (1988): "La democracia en Chile. Un enfoque institucional". *Pensamiento Iberoamericano*. 14: 93-108, julio-diciembre. Madrid.
- Huntington, Samuel P. (1957): *The soldier and the state. The theory of Civil-Military relations*. Cambridge, Massachusetts. Harvard University Press.
- Huntington, Samuel P. (1972): *El orden político en las sociedades en cambio*. Buenos Aires
- Imaz, José Luis de (1969): *Los que mandan*. Buenos Aires, EUDEBA.
- Imaz, José Luis de (1978): "Sugerencias de mecanismos institucionales". En: Beltrán, Virgilio (Compilador). *El futuro político argentino*: 167-200.
- Imaz, José Luis de (1980): "La representación de las regiones. Un modelo de simulación política". *Criterio*. LIII (1849-1850): 764-768. Buenos Aires.
- Itzcovitz, Victoria (1985): *Estilo de gobierno y crisis política (1973-1976)*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. Colección Biblioteca Política Argentina, 93.
- Janowitz, Morris (1960): *The professional soldier: a social and political portrait*. Glencoe, Illinois. The Free Press of Glencoe.
- Jelin, Elizabeth (1977): "Conflictos laborales en la Argentina, 1973-1976". *CEDES, Estudios sociales*. 9. Buenos Aires.
- Jelin, Elizabeth (Compilador) (1985): *Los nuevos movimientos sociales /2*. Buenos Aires, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. Colección Biblioteca Política Argentina.
- Julliard, Jacques (1987): "Democracia, militares y revolución". En: *Vuelta 11 Sudamericana*. 11 (1): 63-64, junio, Buenos Aires.
- Kaufman, Robert (1988): "Liberalización y democratización en América del Sur": perspectivas a partir de la década de 1970". En: O'Donnell, Guillermo, Phillippe Schmitter y Laurence Whitehead (compiladores): *Transición desde un gobierno autoritario. Perspectivas comparadas*. 3: 137-170.

- Koeneke, Herbert (1987): "Pretorianismo, legitimidad y opinión pública". *Nueva Sociedad*. 81, enero-marzo. San José de Costa Rica.
- Kosacoff, Bernardo y Daniel Azpiazu (1989): *La industria argentina: desarrollo y cambios estructurales*. Buenos Aires, C.E.A.L.
- Landi, Oscar (1982): "Conjeturas políticas sobre la Argentina post-Malvinas". *Revista Mexicana de Sociología*. 4: 1225-1247. México DF.
- Landi, Oscar (1984): "Cultura política en la transición a la democracia". En: Oszlak, Oscar (compilador): *Proceso, crisis y transición a la democracia*. Buenos Aires.
- Landi, Oscar (1984): *"El discurso sobre lo posible. (La democracia y el realismo político)"*. CEDES, Buenos Aires.
- Landi, Oscar (1988): "La crisis del Proceso como colapso". En: Landi, Oscar: *Reconstrucciones*. Buenos Aires, Puntosur.
- Landi, Oscar (s/f): *"La tercera presidencia de Perón, gobierno de emergencia y crisis política"*. CEDES-G/E CLACSO. 10: 1-51. Buenos Aires.
- Lamounier, Bolívar (1988): "Apertura a través de elecciones: ¿será Brasil un caso paradigmático?". *Opciones (Ex Alternativas)*. 14: 41-52, mayo-ago. Santiago de Chile.
- Lanusse, Alejandro (1977): *Mi testimonio*. Buenos Aires, Lasserre.
- Lechner, Norberto (1982): "El proyecto neoconservador y la democracia". *Crítica & Utopía*. 6: 1-19. Buenos Aires.
- Lechner, Norberto (1984): "Cultura política y democratización". *David & Goliath*. 46: 21-28, Buenos Aires.
- Leis, Héctor R. (1989): *El movimiento de derechos humanos y la política argentina/1*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. Colección Biblioteca Política Argentina, 250.
- Leis, Héctor R. (1989): *El movimiento de derechos humanos y la política argentina/2*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. Colección Biblioteca Política Argentina, 251.
- Lijphart, Arendt (1988): "Democracia y modelos alternativos de democracia". *Opciones (Ex Alternativas)*. 14: 27-40, mayo-agosto. Santiago.
- Lijphart, Arendt (1990): "Presidencialismo y democracia de mayoría". En: Godoy Arcaya, Oscar (compilador) (1990): *Hacia una democracia moderna: la opción parlamentaria*: 109-128.
- Linz, Juan (1978): "Una interpretación de los regímenes autoritarios". *Revista de Sociología*. 8: 11-26.
- Linz, Juan (1981): "Stability and Regime Change". Werner-Reimers Stiftung, Bad Homburg. IPSA-ISA. May.
- Linz, Juan (1982): "Funciones y disfunciones de las elecciones no competitivas: los sistemas autoritarios y totalitarios". En: Hermet, Guy, Alain Rouquié y Juan Linz (1982): *¿Para qué sirven las elecciones?*: 90-136.
- Linz, Juan (1988): *La quiebra de la democracia*. Madrid, Alianza.

- Linz, Juan y Alfred Stepan (1989): "Political Crafting of Democratic Consolidation or Destruction: European and South American Comparisons". En: Pastor, Robert (compilador): *Democracy in the Americas: Stopping the Pendulum*: 41-61.
- Linz, Juan (1990): "Transiciones a la democracia". *Reis*. 51: 7-33.
- Linz, Juan (1990): "Democracia: Presidencialismo o parlamentarismo. ¿Hace alguna diferencia? En: Godoy Arcaya, Oscar (compilador): *Hacia una democracia moderna: la opción parlamentaria*: 41-108.
- Lipset, Martin S. (1963): *El hombre político*. Buenos Aires, EUDEBA.
- Llach, Juan José (1987): "El apoyo externo a los programas de estabilización". En: AAVV: *Sobre la consolidación de la democracia*: 165-173.
- Loewenstein, Karl (1983): *Teoría de la Constitución*. Barcelona, Editorial Ariel.
- Loñ, Félix (1980): "Reforma constitucional y transición política". *Criterio*. LIV (1849-1850): 750-751. Buenos Aires.
- López, Ernesto (1987): *Seguridad nacional y sedición militar*. Buenos Aires, Legasa.
- López, Mario J. (1980): "La defensa institucional del acuerdo básico". *Criterio*. LIII (1867): 521-525. Buenos Aires.
- López Pintor, Rafael (1987): "Sobre el cambio político en España: lecciones para demócratas en transición". En: AAVV: *Lecciones para demócratas en transición*: 143-162.
- Luna, Félix (1983): "El 'Proceso' (1976-1982). En: AAVV (1983): *1943-1982. Historia política de Argentina*. 148-169.
- Maceyra, Horacio (1983): *Las presidencias peronistas. Cámpora/Perón/Isabel*. Buenos Aires Centro Editor de América Latina. Colección Biblioteca Política Argentina, 25.
- Mainwaring, Scott (1990): "Presidentialism in Latin America". *Latin American Research Review*. 25 (1): 157-179.
- Mallea, Eduardo (1960): *La vida Blanca*. Buenos Aires, Sur.
- Miguens, José E. (1986): *Honor militar, conciencia moral y violencia terrorista*. Buenos Aires, Sudamericana-Planeta.
- Moneta, Carlos (1984): "Elementos para el análisis del proceso de decisiones del régimen militar argentino en el conflicto de las islas Malvinas: 1976-1982". En: Muñoz, Heraldo y Joseph Tulchin (compiladores): *Entre la autonomía y la subordinación política exterior de los países latinoamericanos*. Buenos Aires, G.E.L.
- Moneta, Carlos (1984): "El conflicto de las islas Malvinas en el contexto de la política exterior argentina". En: Russell, Roberto (compilador): *América Latina y la guerra del Atlántico Sur*. Buenos Aires, Editorial de la Universidad de Belgrano.
- Moneta, Carlos, Ernesto López, Aníbal Romero, Aníbal (Compilador) (1985): *La reforma militar*. Buenos Aires, Legasa.

- Moneta, Carlos (1985): "Fuerzas armadas y gobierno constitucional después de Malvinas: hacia una nueva relación civil-militar". En: Moneta, Carlos, Ernesto López, Aníbal Romero, Aníbal (Compilador) (1985): *La reforma militar*: 7-99.
- Mora y Araujo, Manuel (1978): "Procesos electorales y fuerzas políticas. Una perspectiva. En: Beltrán, Virgilio (compilador): *El futuro político argentino*: 83-108.
- Mora y Araujo, Manuel (1980): "Los sindicatos y los problemas políticos de la democracia moderna". *Criterio*. LIII (1849-1850): 800-806. Buenos Aires.
- Mora y Araujo, Manuel y Ignacio Llorente (1980): El voto peronista. Buenos Aires, Editorial Sudamericana,
- Morlino, Leonardo (1981): "Del Fascismo a una democracia débil. El cambio de régimen en Italia (1939-1948)". En: Santamaría, Julián (Compilador): *Transición a la democracia en el Sur de Europa y América Latina*: 93-150.
- Morlino, Leonardo (1987): "Las instauraciones democráticas en Europa Mediterránea. Algunas hipótesis comparativas." En: AAVV: Lecciones para demócratas en transición: 221-256.
- Morlino, Leonardo (1988): "Los autoritarismos". En: Pasquino, Gianfranco (compilador): *Manual de ciencia política*: 129-178.
- Morlino, Leonardo (1988): "Consolidación democrática. Definición, modelos, hipótesis". En: Pinto, Julio (Compilador): *Ensayos sobre la crisis política de argentina/3*.
- Müller, Christoph (1987): "Consolidación de la democracia. Viejos problemas y nuevas experiencias desde una perspectiva alemana". En: AAVV: *Sobre la consolidación de la democracia*: 37-55.
- Muñoz, Heraldo y Tulchin, Joseph (Compilador) (1984): *Entre la autonomía y la subordinación política exterior de los países latinoamericanos*. Buenos Aires, G.E.L.
- Needler, Martin (1966): "Political Development and Military Intervention in Latin America". *American Political Science Review*. 60 (3): 612-626. Septiembre.
- Nielson, James (1976): "¿Es natural el asesinato? Editorial. 12 de octubre. *Buenos Aires Herald*.
- Neumann, Franz (1968): *El estado democrático y el estado autoritario*. Buenos Aires, Paidós.
- Nun, José (1966): "América Latina: la crisis hegemónica y el poder militar". *Desarrollo Económico*. 6 (22-23): 355-416, julio-diciembre, Buenos Aires.
- Nun, José y Juan Carlos Portantiero (1986): "La consolidación de la democracia en Argentina". *CLADE*, Documentos de trabajo 1: 1-126. Buenos Aires.
- Nun, José y Juan Carlos Portantiero (compiladores) (1987): *Ensayos sobre la transición a la democracia en la Argentina*. Buenos Aires, Puntosur.
- Nun, José (1987): "La teoría política y la transición democrática". En: Nun, José y Juan Carlos Portantiero (compiladores) (1987): *Ensayos sobre la transición a la democracia en la Argentina*: 15-56.

- Ochoa de Eguileor, Jorge y Juan Carlos Beltrán (1968): *Las fuerzas armadas hablan*. Buenos Aires, Paidós.
- OEA (1979): "Informe sobre los derechos humanos en Argentina". Organización de Estados Americanos, Washington DC.
- O'Donnell, Guillermo (1972): "Modernización y golpes de estado. (teoría, comparación y el caso argentino). *Desarrollo Económico*. 12 (47): 519-566, octubre-diciembre, Buenos Aires.
- O'Donnell, Guillermo (1972): *Modernización y autoritarismo*. Buenos Aires, Paidós.
- O'Donnell, Guillermo (1978): "Reflections on the Patterns of Change in the Bureaucratic-Authoritarian State". *Latin American Research Review*. 12 (1): 3-38.
- O'Donnell, Guillermo (1984): "Democracia en Argentina: micro y macro". En: Oszlak, Oscar (Compilador): "Proceso", crisis y transición democrática/1: 13-30.
- O'Donnell, Guillermo (1985): "Las tensiones del estado burocrático-autoritario". En: Collier, David (compilador) (1985): *El nuevo autoritarismo en América Latina*.
- O'Donnell, Guillermo, Phillipe Schmitter y Laurence Whitehead, Laurence (compiladores) (1988a): *Transiciones desde un gobierno autoritario. Perspectivas comparadas 3*. Buenos Aires, Paidós.
- O'Donnell, Guillermo, Phillipe Schmitter y Laurence Whitehead, Laurence (compiladores) (1988b): *Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre democracias inciertas, 4*. Buenos Aires, Paidós.
- O'Donnell, Guillermo (1989): "Transiciones, continuidades y algunas paradojas". *Cuadernos Políticos*. 56. México DF.
- O'Donnell, Guillermo (1989): "The Consolidation of Fragile Democracies: A Discussion with Illustrations". En: Pastor, Robert (compilador): *Democracy in the Americas: Stopping the Pendulum*: 62-75.
- Offe, Claus (1981): "Ingovernabilidad, el renacimiento de las teorías neoconservadoras". *Revista mexicana de Sociología*. 43. México DF.
- Olivieri, Mabel (1984): "Orígenes y evolución de la presencia militar en América Latina". *Revista de Estudios Políticos Nueva época*. 42: 163-168, noviembre-diciembre. Madrid.
- Orrego Vicuña, Francisco (compilador) (1986): *La transición a la democracia en América Latina*. Buenos Aires, G.E.L.
- Oszlak, Oscar (compilador) (1984a): "*Proceso*", crisis y transición democrática /1. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. Colección Biblioteca Política Argentina, 45.
- Oszlak, Oscar (compilador) (1984b): "*Proceso*", crisis y transición democrática /2. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. Colección Biblioteca Política Argentina, 59.
- Oszlak, Oscar (1984): "Privatización autoritaria y recreación de la escena pública". En: Oszlak, Oscar (Compilador): "*Proceso*", crisis y transición democrática /1: 31-48.

- Paramio, Rudolfo (1988): "Algunos rasgos de las transiciones políticas pactadas a la democracia". *Pensamiento Iberoamericano*. 14: 285-290, agosto-diciembre. Madrid.
- Pasquino, Gianfranco (compilador) (1988): *Manual de ciencia política*. Madrid, Alianza.
- Passerin D'Entrèves, Alessandro (1970): *La noción del Estado*. Madrid, Euramérica.
- Pastor, Robert (compilador) (1989): *Democracy in the Americas: Stopping the Pendulum*. Nueva York, Holmes and Meier.
- Pastor, Robert (1989): "How to Reinforce Democracy in the Americas: Seven Proposals". En: Pastor, Robert (compilador): *Democracy in the Americas: Stopping the Pendulum*: 139-158.
- Peña, Félix (1983): "La Argentina en el mundo que cambia: prioridades de la política exterior a partir de los años 70". En: Waldman, Peter y Garzón Valdés, Ernesto (compiladores) (1982): *El poder militar en Argentina (1976-1981)*: 139-154.
- Perina, Rubén (1983): *Onganía, Levingston, Lanusse, los militares en la política argentina*. Buenos Aires, Editorial de la Universidad de Belgrano.
- Pinto, Julio (Compilador) (1988): *Ensayos sobre la crisis política argentina /1*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. Colección Biblioteca Política Argentina, 205.
- Pinto, Julio (Compilador) (1988): *Ensayos sobre la crisis política argentina /2*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. Colección Biblioteca Política Argentina, 206.
- Pinto, Julio (Compilador) (1988): *Ensayos sobre la crisis política argentina /3*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. Colección Biblioteca Política Argentina, 207.
- Pion-Berlin, David (1989): "The Latin America National Security Doctrine: 'Hard-line' and 'Softline' variations on a theme". *Armed Forces & Society*. 15 (3):411-429. Abril. Ohio, Estados Unidos.
- Pion-Berlin, David and Lopez, George (1989): *"Of victims and executioners: Argentine State Terror, 1976-1983"*. The Helen Kellogg Institute for International Studies, University of Notre Dame. Working Paper 117. Abril. Notre Dame, Estados Unidos.
- Pizzorno, Alessandro (1985): "Sobre la racionalidad de la opción democrática". En: AAVV (1985): *Los límites de la democracia II*: 9-46.
- Poneman, Daniel (1988): *La democracia puesta a prueba*. Buenos Aires, EMECE.
- Portantiero, Juan Carlos (1985): "La consolidación democrática en sociedades conflictivas". *Crítica & Utopía*. 13: 39-50, Buenos Aires.
- Potash, Robert A. (1982): *El Ejército y la política en la Argentina. (1928-1945) De Yrigoyen a Perón*. Buenos Aires, Sudamericana.
- Potash, Robert A. (1982): *El Ejército y la política en la Argentina. (1945-1962) De Perón a Frondizi*. Buenos Aires, Sudamericana.

- Przeworski, Adam and Michael Wallerstein (1982): "The Structure of Classes Conflict in Democratic Capitalist Society". *American Political Science Review*. 76 (2): 215-238.
- Przeworski, Adam (1988): "Algunos problemas en el estudio de la transición a la democracia". En: O'Donnell, Guillermo, Phillippe Schmitter y Laurence Whitehead, Laurence (compiladores): *Transición desde un autoritarismo. Perspectivas comparadas*. 3: 79-104.
- Przeworski, Adam (1991): *Democracy and the Market*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Ramos, Joseph (1986): *Neoconservative Economics in the Southern Cone of Latin America, 1973-1983*. Baltimore, The John Hopkins Press.
- Rial, Juan (1988): "Transición a la democracia y gobernabilidad en Uruguay: 1985-1988". *Pensamiento Iberoamericano*. 14: 247-260, julio-diciembre. Madrid.
- Raggio, Ezequiel (1986): *La formación del estado militar en Argentina: 1955-1976*. Buenos Aires, Losada.
- Revista Criterio. Buenos Aires, 1975-1983. Varios números.
- Rock, David (1977): "Revolt and Repression in Argentina". *The World Today*: 33 (6): 215-222. Junio.
- Rodríguez, Carlos (1979): "El plan argentino de estabilización del 20 de diciembre." *CEMA, Documentos de Trabajo*. 5. Buenos Aires
- Rodríguez, Carlos (1983): "Políticas de estabilización en la economía argentina, 1978-1982". *Cuadernos de Economía*. 20 (59): 21-42. Santiago de Chile.
- Rouquié, Alain (1981): "Dictadores, militares y legitimidad en América Latina". *Crítica & Utopía*. 5: 11-28. Buenos Aires.
- Rouquié, Alain (1982): "Las elecciones en los regímenes autoritarios con partidos controlados o autorizados". En: Hermet, Guy, Alain Rouquié y Juan Linz (1982): *¿Para qué sirven las elecciones?*: 147-157.
- Rouquié, Alain (1983): "El poder militar en Argentina de hoy: cambio y continuidad". En: Waldman, Peter y Garzón Valdés, Ernesto (compiladores): *El poder militar en Argentina (1976-1981)*: 65-76.
- Rouquié, Alain y Schvarzer, Jorge (Compilador) (1985): *¿Cómo renacen las democracias?* Buenos Aires, EMECE.
- Rouquié, Alain (1986): *Poder militar y sociedad política en la Argentina. Tomo I*. Buenos Aires, Hyspamérica.
- Rouquié, Alain (1986): *Poder militar y sociedad política en la Argentina. Tomo II*. Buenos Aires, Hyspamérica.
- Rouquié, Alain (1988): "La desmilitarización y la institucionalización de los sistemas políticos dominados por los militares en América Latina". En: O'Donnell, Guillermo, Phillippe Schmitter y Laurence Whitehead, Laurence (compiladores): *Transición desde un autoritarismo. Perspectivas comparadas*. 3: 171-212.

- Russel, Roberto (1982): "Elementos bibliográficos para una historia latinoamericana (1930-1982)". En: AAVV (1983): *1943-1982. Historia política de Argentina*: 282-310.
- Russell, Roberto (Compilador) (1984): *América Latina y la guerra del Atlántico Sur*. Buenos Aires, Editorial de Belgrano.
- Sánchez Aizcorbe (1979): "Reflexiones acerca de los condicionamientos de la renovación democrática en Argentina". *Revista CIAS*.XXVIII (281): 5-12.
- Sánchez Agesta, Luis (1987): "Sobre la consolidación de la democracia en España". En: AAVV: *Sobre la consolidación de la democracia*: 13-36.
- Sánchez Sorondo, Marcelo (1987): *La Argentina por dentro*. Buenos Aires, Sudamericana.
- San Martino de Dromi, María Laura (1988): *Historia política argentina. (1955-1988) Tomo I*. Buenos Aires, Astrea.
- San Martino de Dromi, María Laura (1988): *Historia política argentina. (1955-1988) Tomo II*. Buenos Aires, Astrea.
- Santa Cruz, Lucía (1986): "Entrevista a Robert Dahl. Democracia: porqué y para qué". *Opciones* (Ex Alternativas). 8: 70-78, enero-abril. Santiago de Chile.
- Santamaría, Julián (Compilador) (1981): *Transición a la democracia en el Sur de Europa y América Latina*. Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Santamaría, Julián (1981): "Transición controlada y dificultades de consolidación: el ejemplo español." En: Santamaría, Julián (compilador): *Transición a la democracia en el Sur de Europa y América Latina*: 371-418.
- Sartori, Giovanni (1987): "Notas para una teoría general de la dictadura". En: *Opciones* (Ex Alternativas). 11, mayo-agosto. Santiago de Chile.
- Schmitter, Philippe (1973): *Military Rule in Latin America*. Beverly Hills, California. Sage.
- Schmitter, Philippe (1985): "La transición del gobierno autoritario a la democracia en sociedades en proceso de modernización: ¿podrá invertirse la proposición (y el pesimismo) de Gino Germani?" En: AAVV (1985): *Los límites de la democracia II*: 143-168.
- Sheahan, John (1988): "Las políticas económicas y las perspectivas de un proceso exitoso de transición desde la dominación autoritaria en América Latina". En: O'Donnell, Guillermo, Phillippe Schmitter y Laurence Whitehead, Laurence (compiladores) (1988a) *Transiciones desde un gobierno autoritario. Perspectivas comparadas 3*: 237-253.
- Sigal, Silvia y Santi, Isabel (1985): "El discurso en el régimen autoritario. Un estudio comparativo". En: Cheresky, Isidoro y Jacques Chonchol (compiladores) (1985): *Crisis y transformación de los regímenes autoritarios*: 145-170.
- Sjaastad, Larry (1989): "Argentine Economic Policy, 1976-81". In: Di Tella, Guido and Rudiger Dornbusch (eds.): *The Political Economy of Argentina, 1946-83*: 254-275. London, The Macmillan Press.

- Solá, Lourdes (1989): "Choque heterodoxo y transición política sin ruptura: un enfoque transdisciplinario". *Desarrollo Económico*. 28 (112): 483-524, enero-marzo. Buenos Aires.
- Solari Yrigoyen, Hipólito (1977): "El ocaso de la antidemocracia en la República Argentina". *Nueva Sociedad*. XXV (31/32): 77-90.
- Sonderéguer, María (1985): "Aparición con vida. (El movimiento de derechos humanos en Argentina)". En: Jelin, Elizabeth (Compilador): *Los nuevos movimientos sociales/2*: 7-32.
- Sourrouille, Juan, Bernardo Kosacoff y Jorge Lucángeli (1985): *Transnacionalización y política económica en la Argentina*. Buenos Aires C.E.A.L.
- Spitta, Arnold (1983): "El "Proceso de Reorganización Nacional" de 1976 a 1981: los objetivos básicos y su realización práctica". En: Waldman, Peter y Garzón Valdés, Ernesto (compiladores): *El poder militar en Argentina (1976-1981)*: 77-100.
- Spitta, Arnold (1988): "Experiencias cotidianas en la primera etapa de la recuperada democracia acerca de algunos elementos de la cultura política argentina". En: Garzón Valdés, Ernesto, Manfred Mols y Arnold Spitta (compiladores): *La nueva democracia argentina (1983-1986)*: 173-200.
- Spota, Alberto (1987): "Los aspectos psicosociales de la consolidación de la democracia argentina". En: AAVV: *Sobre la consolidación de la democracia*: 197-238.-
- Stepan, Alfred (1974): *Brasil: los militares y la política*. Buenos Aires, Amorrortu.
- Stepan, Alfred (1988): *Repensando a los militares en política. Cono Sur: un análisis comparado*. Buenos Aires, Planeta.
- Stepan, Alfred (1988): "Caminos hacia la redemocratización: consideraciones teóricas y análisis comparativos". En: O'Donnell, Guillermo; Schmitter, Philippe y Whitehead, Laurence *Transiciones desde un gobierno autoritario. Perspectivas comparadas 3*: 105-136.
- Storni, Fernando: (1976): "Gobierno actual y proyecto nacional": *Revista CIAS*. XXV (257): 21-39.
- Stuart Mill, John (1985): *Del Gobierno representativo*. Madrid. Tecnos.
- Suárez, Waldino C. (1987): "Diseño institucional y consolidación de la democracia". En: AAVV: *Lecciones para demócratas en transición*: 163-219.
- Sunkel, Osvaldo y Stephany Griffith-Jones (1986): *Debt and Development Crises in Latin America: The End of An Illusion*. Oxford, Oxford University Press.
- Sunkel, Osvaldo (1988): "Perspectivas democráticas y crisis de desarrollo". *Pensamiento Iberoamericano*. 14: 313-317, julio-diciembre. Madrid.
- Talmon, Yaacob (1956): *Los orígenes de la democracia totalitaria*. Madrid, Aguilar ediciones.
- Tedesco, Juan Carlos, Cecilia Braslavsky y Ricardo Carciofi (1985): *El proyecto educativo autoritario. Argentina, 1976-1982*. Buenos Aires, Flacso, Grupo Editor Latinoamericano.

- Thompson, Andrés (1985): "Las luchas sociales en la Argentina (1973-1983". En: Cheresky, Isidoro y Jacques Chonchol (compiladores): *Crisis y transformación de los regímenes autoritarios*: 85-102.
- Timerman, Jacobo (1981): *Preso sin nombre, celda sin número*. Nueva York, Random.
- Tocqueville, Alexis de (1984): *La Democracia en América II*. Buenos Aires, SARPE.
- Torre, Juan Carlos (1980) "La cuestión del poder sindical y el orden político en la Argentina". *Criterio*. LIII (1983): 528-533. Buenos Aires. Buenos Aires.
- Torre, Juan Carlos (1982): "El movimiento obrero y el último gobierno peronista (1973-1976). *Crítica & Utopía*. 6. Buenos Aires
- Troncoso, Oscar (1984): *El Proceso de Reorganización Nacional/1. Cronología y documentación*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. Colección Biblioteca Política Argentina, 67.
- Troncoso, Oscar (1985): *El Proceso de Reorganización Nacional/2. Cronología y documentación*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. Colección Biblioteca Política Argentina, 122.
- Troncoso, Oscar (1989): *El Proceso de Reorganización Nacional/3. Cronología y documentación*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. Colección Biblioteca Política Argentina, 242.
- Vanossi, Jorge R. (1976): "Reflexiones sobre el nuevo régimen institucional argentino". *Carta Política*: 41-50, junio. Buenos Aires.
- Vanossi, Jorge R. (1978); "La Constitución de transición". En: Beltrán, Virgilio (compilador): *El futuro político argentino*: 133-166.
- Vázquez, Enrique (1985): *La última. Origen, apogeo y caída de la dictadura militar*. Buenos Aires, EUDEBA.
- Veiga, Raúl (1985): *Las organizaciones de derechos humanos*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. Colección Biblioteca Política Argentina, 127.
- Verbistky, Horacio (1987): *Civiles y militares. Memorias secretas de la transición*. Buenos Aires, Contrapunto.
- Waldman, Peter y Garzón Valdés, Ernesto (compiladores) (1983): *El poder militar en Argentina (1976-1981)*. Buenos Aires, Galerna.
- Walsh, Rodolfo (1977): *Carta abierta de un escritor a la Junta Militar*. Buenos Aires.
- Whitehead, Lawrence (1988): "Generalidad y particularismo de los procesos de transición a la democracia en América Latina". *Pensamiento Iberoamericano*. 14: 309-312, agosto-diciembre. Madrid.
- Whitehead, Lawrence (1988): "Changing Latin American Attitudes: Prerequisite to Institutionalizing Democracy". En: Pastor, Robert (compilador): *Democracy in the Americas: Stopping the Pendulum*: 76-95.
- Zuleta Puceiro, Enrique (1987): "Transición política y estrategias institucionales." En: AAVV: *Lecciones para demócratas en transición*: 99-142.
- Zuleta Puceiro, Enrique (1987): "Algunas reflexiones críticas sobre el tema". En: AAVV: *Sobre la consolidación de la democracia*: 239-250.

El Cambio de régimen político en la Argentina: 1976-1983.

Zylberberg, Jacques (1987): "Democracia y cesarismo en América Latina". En: AAVV (1987): *Sobre la consolidación de la democracia*: 85-141.

ANEXO: Legislación consultada.

Ley 20.840/74: Penalidades para las actividades subversivas en todas sus manifestaciones. Boletín Oficial (B.O.): 2 de octubre de 1974.

Decreto 1368/74: Declaración del Estado de sitio en la República Argentina. B.O. 6 de noviembre de 1974.

Decreto 261/75: Operativo Independencia. B.O. 5 de febrero de 1975.

Decreto 2770/75: Creación del Consejo de Seguridad Interna. B.O.: 4 de setiembre de 1975.

Decreto 2771/75: Creación del Consejo de Defensa, subordinando a las policías provinciales. 4 de setiembre de 1975.

Decreto 2772/75: Intervención de las FFAA en las operaciones de seguridad interna. Ídem.

Proclama. Proceso de Reorganización Nacional. *La Nación*, 24 de marzo de 1976. Buenos Aires.

Comunicado Nº 1 de la Junta Militar, 24 de marzo de 1976.

Acta del Proceso de Reorganización Nacional, constitución de la Junta Militar como el poder político de la República Argentina, declarar caducos los mandatos del presidente de la Nación y el vicepresidente, y los gobernadores e interventores federales en las provincias. Disolver el Congreso de la Nación, y las legislaturas provinciales. Remover a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al procurador general de la Nación, y a los integrantes de los tribunales superiores provinciales. Suspender la actividad política y de los partidos políticos a nivel nacional, provincial y municipal. 24 de marzo de 1976. B.O.: 29 de marzo de 1976.

Acta del Proceso de Reorganización Nacional, establece los propósitos y objetivos básicos del Proceso de Reorganización Nacional. 24 de marzo de 1976.

Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, 24 de marzo de 1976. B.O.: 31 de marzo de 1976.

Ley 21.256: Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar, Poder Ejecutivo Nacional y Comisión de Asesoramiento Legislativo. B.O.: 26 de marzo de 1976.

Constitucional Nacional. Suspensión parcial de la vigencia del Art. 23. B.O.: 26 de marzo de 1976.

Acta de las Bases doctrinarias, programáticas e instrumentales de las Fuerzas Armadas en el Proceso de Reorganización Nacional. B.O.: 29 de marzo de 1976.

Ley 21.258: Destitución de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de los tribunales superiores de todas las provincias, y declara en "comisión" a todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, y de los poderes judiciales de todas las provincias. B.O. 29 de marzo de 1976.

Decreto 1/76: Designación de delegados de la Junta Militar en las áreas de gobierno luego de la destitución de los ministros: Interior, Relaciones Exteriores y Culto,

Justicia, Defensa, Economía, Cultura y Educación, Trabajo, y Bienestar Social.
B.O.: 29 de marzo de 1976.

Decreto 6/76: Suspensión de la actividad de los partidos políticos. B.O.: 29 de marzo de 1976.

Decreto 9/76: Suspensión de la actividad gremial de las entidades de trabajadores, empresarios y profesionales. B.O.: 29 de marzo 1976.

Ley 21.259: Faculta al Poder Ejecutivo Nacional a Poder Ejecutivo a la expulsión de extranjero sospechoso de atentar contra la seguridad nacional. B.O.: 26 de marzo 1976.

Ley 21.260: Baja de los empleados públicos del Congreso de la Nación. B.O.: 26 de marzo de 1976.

Ley 21.261: Suspensión del derecho de huelga. B.O.: 26 de marzo 1976.

Ley 21.263: Supresión del fuero sindical consagrado en la Ley de Asociaciones Profesionales 20.615 de 1973. B.O.: 26 de marzo 1976.

Ley 21.264: Seguridad Nacional, sanción a quiénes atentaran o crearen peligro común a personas y bienes. B.O.: 26 de marzo 1976.

Ley 21.265: Prohibición de la prestación de servicios de seguridad a empresas y particulares sin la autorización previa por parte de la Policía Federal. B.O.: 26 de marzo 1976.

Ley 21.267: Establece el alcance de la jurisdicción militar. B.O.: 26 de marzo 1976.

Ley 21.269: Prohibición del Partido Comunista. B.O.: 26 de marzo de 1976.

Ley 21.270: Intervención y bloqueo de fondos de la C.G.T. B.O.: 26 de marzo de 1976.

Ley 21.272: Seguridad nacional, establece penalidades para quiénes cometieran actos de violencia contra el personal militar o de seguridad o de buques, aeronaves o establecimientos militares o de seguridad. B.O.: 26 de marzo de 1976.

Ley 21.274: Ley de prescindibilidad en la administración pública para el personal judicial, legislativo, municipal, empresas del Estado y obras sociales. B.O.: 2 de abril 1976.

Ley 21.275: Se suspende toda tramitación sobre opción para salir del país. B.O.: 2 de abril 1976.

Ley 21.276: Intervención de las universidades nacionales y supresión de los órganos colegiados de gobierno. B.O.: 2 de abril 1976.

Ley 21.277: Suspensión del régimen de subsidios y franquicias para los partidos políticos. B.O.: 6 de abril de 1976.

Ley 21.278: Faculta al Ministerio de Cultura y Educación a la suspensión total o parcial del Estatuto Docente. B.O.: 6 de abril de 1976.

Ley 21.279: Modificación de la forma de juramento de los magistrados del Poder Judicial, derogación del párrafo *“en la medida que no se opongan a aquellos”*, artículo 14 del Estatuto (hace alusión a los objetivos básicos y al Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional). B.O.: 7 de abril de 1976.

- Ley 21.297: Derogación de artículos de la Ley 20.744 de 1974, de Contrato de Trabajo, y derogación de la Ley 20.695. B.O.: 23 de abril de 1976.
- Ley 21.322: Definición de las actividades subversivas. B.O.: 9 de junio de 1976.
- Ley 21.323: Prohibición y sanción de las actividades políticas. B.O.: 9 de junio de 1976.
- Ley 21.324: Suspensión de las actividades de los partidos políticos: Partido Comunista Revolucionario, Socialista de los Trabajadores, Política Obrera, Obrero Trotskista y Comunista Leninista, derogación de la Ley 21.269 de los partidos políticos. B.O.: 9 de junio de 1976.
- Ley 21.325: Seguridad Nacional, alcance de las actividades subversivas, prohibición de la actividad de determinados partidos políticos. B.O.: 9 de junio de 1976.
- Ley 21.328: Modificación del procedimiento aduanero. Desregulación del funcionamiento de empresas extranjeras. B.O.: 14 de junio de 1976.
- Ley 21.356: Suspensión de la actividad gremial. Faculta al Ministerio de Trabajo a intervenir a las asociaciones profesionales. B.O.: 28 de julio de 1976.
- Ley 21.400: Prohibición de medidas de acción directa mientras se mantenga estado de sitio. B.O.: 8 de setiembre de 1976.
- Ley 21.476: Supresión de cláusulas especiales de las Convenciones Colectivas de Trabajo que implicaban ventajas sectoriales o parciales de los sindicatos. Cancelación de regímenes especiales de escalafones, licencias, supresión de aportes jubilatorios complementarios. B.O.: 16 de diciembre de 1976.
- Ley 21.495: Ley de entidades financieras. B.O.: 21 de enero de 1977.
- Ley 21.526: Descentralización de los depósitos bancarios y liberalización de las tasas de interés. B.O.: 21 de febrero de 1977.
- Ley 21.547: Modificaciones parciales de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.). B.O. 18 de marzo de 1977.
- Ley 21.571: Modificaciones parciales de la Carta Orgánica del B.C.R.A. B.O.: 11 de mayo de 1977.
- Ley 21.572: Creación de la Cuenta de Regulación Monetaria. B.O.: 11 de mayo de 1977.
- Ley 21.757: Modificaciones parciales de la Carta Orgánica del B.C.R.A. B.O.: 7 de marzo de 1978.
- Ley 21.608: Promoción industrial. B.O.: 27 de junio de 1977.
- Ley 21.699: Partidos Políticos, vigencia de la suspensión de la actividad de los partidos políticos. B.O.: 13 de diciembre de 1977.
- Ley 22.051: Nuevo régimen de garantía de los depósitos. B.O.: 20 de agosto de 1979.
- Ley 22.068: Ausencia con presunción de fallecimiento, establece que un Juez federal podrá declarar el fallecimiento presunto de la persona cuya desaparición del lugar de su domicilio o residencia hubiese sido fehacientemente denunciada entre el 6 de noviembre de 1974, fecha de declaración del "Estado de sitio" por Decreto 1368/74 y la fecha de promulgación de la presente. B.O.: 12 de setiembre de 1979.

- Ley 22.105: Derogación de la Ley de Asociaciones Profesionales 20.615. Disolución de las entidades de tercer grado (CGT). Prohibición de grandes sindicatos por rama, reconocimiento de sindicatos, federaciones y uniones (2do. grado) sin superposición territorial. B.O.: 20 de noviembre de 1979.
- Acta fijando las Bases Políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional. 19 de diciembre de 1979.
- Ley 22.267: Incremento del monto mínimo de la garantía de los depósitos, régimen de intervenciones de las entidades financieras. B.O.: 19 de agosto de 1980.
- Ley 22.269: Nuevo régimen de obras sociales, administración a cargo de organismos gubernamentales. B.O.: 20 de agosto de 1980.
- Ley 22.467: Modificaciones parciales de la Carta Orgánica del B.C.R.A. B.O.: 26 de junio de 1981.
- Multipartidaria: "Convocatoria al país", 28 de agosto de 1981.
- Multipartidaria: "Antes que sea tarde", 16 de diciembre de 1981.
- Ley 22.510: Bono Nacional de Consolidación Económico-Financiera. Régimen especial de refinanciación de deudas de las empresas del sector privado con entidades financieras. B.O.: 6 de noviembre de 1981.
- Comunicado de la Junta Militar anunciando el reemplazo del Tt. Gral. (R) Roberto E. Viola por el Tte. Gral. Leopoldo F. Galtieri en el cargo de presidente de la Nación Argentina. La Nación, 11 de diciembre de 1981.
- Ley 22.529: Consolidación y redimensionamiento del sistema financiero. Modificación de las leyes 21.526 y 22.267. B.O.: 22 de enero de 1982.
- Ley 22.559: Seguridad Nacional, Malvinas: faculta al Poder Ejecutivo Nacional para constituir teatros de operaciones y gobernaciones militares y designar a los respectivos comandantes y gobernadores militares en cualquier jurisdicción del territorio nacional, previa resolución del Comité Militar. B.O.: 2 abril de 1982.
- Ley 22.602: Modificaciones parciales de la Carta Orgánica del B.C.R.A. B.O.: 2 de junio de 1982.
- Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo, 28 de abril de 1983.
- Ley 22.838: Sistema Nacional Electoral. B.O.: 23 de junio de 1983.
- Ley 22.839: Reconocimiento de las Asociaciones Gremiales de tercer grado, y pautas para su funcionamiento. B.O.: 24 de junio de 1983.
- Ley 22.847: Convocatoria a elecciones de autoridades nacionales, provinciales y municipales, de la Capital Federal y del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. B.O.: 14 de julio de 1983.
- Ley 22.924: Pacificación nacional, amnistía de delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde 31 25/5/73 hasta el 17/6/82. B.O.: 27 de setiembre de 1983.
- Ley 22.928: Enjuiciamiento de actividades terroristas y subversivas. B.O.: 26 de setiembre de 1983.

Ley 22.956: Autorización de los actos públicos de proselitismo político previos a las elecciones convocadas para el 30 de octubre de 1983 hasta las 24:00 horas del día 28 de octubre del mismo año. B.O.: 27 de octubre de 1983.

Ley 22.962: Faculta al Poder Ejecutivo Nacional para reconocer el pago de indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados por hechos de naturaleza penal que se declaren comprendidos en la Ley de Pacificación Nacional. B.O.: 4 de noviembre de 1983.

Ley 22.967: Se deroga la Ley 22.062 de ausencia con presunción de fallecimiento del año 1979, sin perjuicio que continúen las causas abiertas a la fecha de promulgación de la presente. B.O.: 9 de noviembre de 1983.

Ley 22.971: Modificación del Código de Justicia Militar. B.O.: 15 de noviembre de 1983.

Ley 22.972: Convocatoria al Colegio Electoral para la elección del presidente de la Nación al 28 de noviembre de 1983.